

MÁSTER UNIVERSITARIO
Análisis Económico Derecho y Políticas Públicas



**VNiVERSiDAD
D SALAMANCA**

TRABAJO FIN DE MASTER
**"REGULACIÓN MINERA, CONFLICTOS
SOCIALES Y MEDIO AMBIENTE EN EL PERÚ:
APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO
REGULATORIO PARA ENCONTRAR
ALTERNATIVAS"**

AUTORA
ANDREA MARIANA DOMINGUEZ NORIEGA

DIRECTOR
FERNANDO RODRIGUEZ

Salamanca, 2014

Resumen

El objetivo es proponer una regulación que vincule los recursos de la minería con el medio ambiente e incentive la ejecución del gasto del canon minero de los Gobiernos Regionales y Locales. Con ello se quiere disminuir la percepción de incompatibilidad entre minería y medio ambiente por parte de la población, que es base de los conflictos socioambientales en los principales departamentos donde se desarrollan operaciones mineras. El trabajo se divide en tres capítulos. El primero presenta la regulación minera en el Perú y la distribución y ejecución respecto al canon minero. En el segundo capítulo, se expone la problemática respecto a la conflictividad socioambiental en el país. Finalmente, se realiza una evaluación de impacto regulatorio con la finalidad de encontrar alternativas que logren cumplir con el objetivo del trabajo. Entre las alternativas analizadas se encuentran: la regulación ambiental interna basada en incentivos económicos, la regulación ambiental externa basada en deducción fiscal, la inclusión de una variable ambiental para la distribución del canon minero y la alternativa de no regular.

Índice

I. Introducción.....	5
II. Desarrollo.....	8
1. Regulación minera en el Perú.....	8
1.1. Fundamentos de la regulación.....	9
1.1.1. <u>Jurídicos.....</u>	9
1.1.2. <u>Económicos.....</u>	13
1.1.3. <u>Socioambientales.....</u>	15
1.2. Normativa minera en el Perú.....	18
1.2.1. <u>Legislación y actividad minera.....</u>	18
1.2.2. <u>Ley de Canon y su reglamento.....</u>	25
1.2.2.1. <i>Distribución y utilización del canon minero.....</i>	26
1.2.2.2. <i>Datos sobre la transferencia y ejecución del canon minero en los departamentos.....</i>	30
1.2.2.3. <i>Percepción sobre la ejecución del canon minero.....</i>	36
2. Conflictos socioambientales y su relación con la minería en el Perú.....	39
2.1. Data de la Defensoría del Pueblo sobre conflictos sociales.....	40
2.1.1. <u>Reporte N° 60 febrero 2009 de la Defensoría del Pueblo.....</u>	40
2.1.2. <u>Reporte N° 74 febrero 2010 de la Defensoría del Pueblo.....</u>	43
2.1.3. <u>Reporte N° 89 febrero 2011 de la Defensoría del Pueblo.....</u>	46
2.1.4. <u>Reporte N° 103 febrero 2012 de la Defensoría del Pueblo.....</u>	49
2.1.5. <u>Reporte N° 117 febrero 2013 de la Defensoría del Pueblo.....</u>	51
2.1.6. <u>Evolución de los conflictos sociales 2008-2013.....</u>	53
2.2. Relación entre los departamentos con mayor transferencia de canon minero y la proporción de conflictos sociales 2009-2013.....	54
2.2.1. <u>Evolución de los conflictos sociales, los conflictos socioambientales y los conflictos socioambientales relacionados con minería y medio ambiente en los seis departamentos con mayor canon minero.....</u>	54

3. Economía aplicada a la Evaluación de Impacto Regulatorio.....	60
3.1. Consideraciones sobre la Evaluación de Impacto Regulatorio.....	61
3.2. Evaluación de Impacto Regulatorio.....	66
3.2.1. <u>Definición del problema</u>	67
3.2.2. <u>Objetivos</u>	69
3.2.3. <u>Opciones Disponibles</u>	71
3.2.3.1. <i>Regulación ambiental interna basada en incentivos económicos</i>	71
3.2.3.2. <i>Obra Regulación ambiental externa basada en deducción fiscal</i>	74
3.2.3.3. <i>Inclusión de una variable ambiental para la distribución del canon minero</i>	77
3.2.3.4. <i>La alternativa de no regular</i>	81
3.2.4. <u>Determinación de impactos según costes y beneficios</u>	84
3.2.5. <u>Opción adecuada y justificación</u>	99
3.2.5.1. <i>Análisis Costo- Beneficio de la población local</i>	100
3.2.5.2. <i>Análisis Multicriterio</i>	104
III. Conclusiones.....	107
IV. Bibliografía.....	112
V. Anexos.....	117
5.1. Anexo 1: Evolución de los conflictos sociales en el Perú.....	117
5.2. Anexo 2: Sistematización Reporte N° 60 de 02/2009 de DP.....	120
5.3. Anexo 3: Sistematización Reporte N° 74 de 04/2010 de DP.....	126
5.4. Anexo 4: Sistematización Reporte N° 89 de 07/2011 de DP.....	136
5.5. Anexo 5: Sistematización Reporte N° 103 de 09/2012 de DP.....	148
5.6. Anexo 6: Sistematización Reporte N° 117 de 11/2013 de DP.....	169

Listado de abreviaturas

Análisis Costo-Beneficio (ACB)

Estudios de Impacto Ambiental (EIA)

Evaluación de Impacto Regulatorio (RIA)

Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET)

Instituto Nacional de Cultura (INC)

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

Impuesto sobre el Movimiento de Productos y Servicios (ICMS)

Límites Máximos Permitidos (LMP)

Ministerio del Ambiente (MINAM)

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

Ministerio de Energías y Minas (MINEM)

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)

Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA)

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)

Radio Programas del Perú (RPP)

Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE)

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT)

Texto Único Ordenado (TUO)

Tribunal Constitucional (TC)

I. Introducción

El presente trabajo tiene como propósito desarrollar un análisis basado en la regulación minera, la distribución y utilización de los recursos económicos de la actividad, y la percepción de incompatibilidad entre la minería y el medio ambiente por parte de la población que genera gran parte de la conflictividad socioambiental en el Perú en los departamentos con mayor transferencia de canon minero. En ese sentido, mediante este documento se intenta mostrar que es necesario vincular en parte los recursos económicos de la minería con el medio ambiente con la finalidad de disminuir justamente la percepción de incompatibilidad en estos rubros por parte de la población y buscar garantizar parte de la ejecución del canon minero que no está siendo utilizado por los Gobiernos Regionales y Locales. Para la elaboración del trabajo se han utilizado fuentes académicas, periodísticas, informes y datos de instituciones públicas y privadas; además, se han desarrollado gráficos y cuadros que tratan de sistematizar información recabada en dichos documentos. Para el análisis se han empleado herramientas como la Evaluación de Impacto Regulatorio (RIA)¹, el Análisis Costo-Beneficio (ACB), y como un elemento complementario del ACB para casos en los que no se pueda realizar una valoración cuantitativa se ha utilizado el Análisis Multicriterio.

El contenido del trabajo se divide principalmente en tres capítulos. En el primer capítulo se desarrolla el marco de la regulación minera en el Perú, que abarca dos puntos principalmente. El primero de ellos es un análisis ex ante que sustenta cuales son los fundamentos para que la actividad minera deba de ser regulada en el país; priorizándose especialmente los argumentos jurídicos, económicos y socioambientales. En el segundo punto, se desarrolla la normativa minera en el Perú y cómo ha venido evolucionando. En este apartado se describe el desarrollo histórico de la legislación minera y se incide en cómo, respecto a la regulación ambiental minera, se han implementado, en el pasado, instrumentos de comando-control sin considerar posibles mecanismos de incentivos. Asimismo, en este acápite se incluye la descripción de la propia actividad minera y sus procesos, así como el procedimiento para que una empresa minera pueda operar en el Perú.

¹ Siglas en ingles por Regulatory Impact Assessment.

Después de ello, el capítulo se centra en los recursos económicos que obtiene el Estado de la minería, específicamente en la Ley de Canon. Mediante el análisis de dicha ley se pueden apreciar cuáles son los criterios para distribuir los recursos económicos de la minería provenientes del Impuesto a la Renta a los Gobiernos Regionales y Locales. Además se describen los indicadores utilizados para determinar la mayor o menor proporción de recursos que recibe un Gobierno Regional o Local sobre otro. Este primer capítulo también intenta mostrar cuales son los Gobiernos Regionales con mayor transferencia de canon minero en el tiempo y el nivel de ejecución de gasto de los recursos del canon minero por parte de dichas entidades públicas. Aquí se expone la grave problemática que existe respecto a la poca ejecución del gasto del canon minero por parte de los Gobiernos Regionales.

En el segundo capítulo se analiza la relación entre los conflictos socioambientales y la actividad minera en el Perú. Para ello se utilizan principalmente los reportes seleccionados de la Defensoría del Pueblo de cinco años (2009, 2010, 2011, 2012 y 2013) y una sistematización de la descripción de los conflictos realizada en los anexos al presente trabajo. En este capítulo se muestra cuáles son los departamentos con mayor conflictividad social en el país y la evolución de los conflictos en el tiempo. Asimismo, se expone que el principal rubro de conflictos sociales corresponde al tipo socioambiental y que los departamentos con mayor transferencia de canon minero son los departamentos con la mayor cantidad de conflictos socioambientales relacionados con minería y medio ambiente. En ese sentido, este acápite intenta demostrar que existe un problema respecto a la percepción de la población sobre la actividad minera y el medio ambiente; pues los departamentos donde operan las empresas mineras y donde se destinan mayor cantidad de recursos económicos, son justamente los departamentos con mayor conflictividad social. Aquí el trabajo se centra en resaltar que la población percibe a la actividad minera como generadora de contaminación ambiental y se oponen a ella pues se cree que es incompatible con el medio ambiente.

El tercer capítulo desarrolla un RIA respecto a una propuesta de modificación normativa. Dicha propuesta se basa en lo constatado a partir de los capítulos anteriores; de ellos se infiere que es necesario vincular los recursos económicos de la minería con el medio ambiente para disminuir la percepción de incompatibilidad de la población respecto a estos dos rubros y que es base de los conflictos socioambientales

en los departamentos con mayor transferencia de canon minero. Asimismo, mediante la propuesta se desea también generar un mecanismo que logre incentivar la ejecución del canon minero en los departamentos. De manera que tomando en consideración dichos aspectos, este acápite desarrolla un RIA sobre una propuesta normativa con la finalidad de crear un vínculo entre los recursos económicos de la minería y el medio ambiente por medio de una alternativa de modificación de la Ley de Canon que relacione estos dos aspectos y logre, al mismo tiempo, incentivar la ejecución del gasto de los recursos económicos de la minería.

En ese sentido, en primer lugar se explica el marco teórico del RIA para después aplicarlo a la propuesta mencionada líneas arriba. Para ello se describe primero el problema y los objetivos. Posteriormente, se realiza el análisis de las distintas alternativas consideradas y el ACB cualitativo de cada una de ellas. Aquí se identifican los costes y beneficios que representa cada una de estas medidas de acuerdo a sus impactos en los diferentes grupos afectados la empresa, la población, el Gobierno Regional o Local, el Gobierno Nacional y el Estado, en base a tres efectos: ambiental, económico y político-social. Las alternativas desarrolladas y evaluadas son cuatro: la regulación ambiental interna basada en incentivos económicos; la regulación ambiental externa basada en deducción fiscal, la inclusión de una variable ambiental para la distribución del canon minero, y la alternativa de no regular. Por último, para la elección de la opción más adecuada, tomando en consideración la naturaleza cualitativa del ACB realizado ante la carencia de valores cuantitativos, se presenta un cuadro que consolida los principales efectos ambientales, político-sociales y económicos tanto de la perspectiva de coste como de beneficio para las poblaciones locales en cada una de las alternativas propuestas así como un análisis multicriterio.

Finalmente, el trabajo expone las conclusiones de los tres capítulos desarrollados respecto al régimen minero, la conflictividad social y el RIA de la propuesta de modificación normativa. Asimismo, presenta las conclusiones arribadas de la aplicación del RIA a modo de reflexión sobre su implementación y con el objetivo de resaltar aquellos puntos que han servido para el aprendizaje de dicha herramienta mediante la realización del presente trabajo.

II. Desarrollo

1. Regulación minera en el Perú

La actividad minera ha existido en el territorio peruano desde hace varios siglos. Desde épocas pre Incas ya se venía trabajando en lugares como Cerro de Pasco y Huánuco². La metalurgia más antigua en el Perú es de la cultura Chavín³, donde trabajaban el oro mezclado con plata y cobre mediante la mita⁴. Posteriormente, en la época Inca ya se iniciaron las primeras regulaciones desde el Imperio pues se instauró el criterio de propiedad y usufructo de los recursos, asimismo se asignaron áreas de explotación en determinadas zonas, se vigiló la seguridad y se establecieron periodos de explotación considerando la racionalidad del producto. Igualmente, se desarrollaron varios yacimientos de socavón y se trabajó en la fundición de los metales⁵. Sin embargo, es recién con la conquista española que adquiere la minería mayor importancia; especialmente respecto al oro y la plata. Para la mano de obra se utilizaban sobre todo indígenas. Durante este periodo se desarrollan varias ciudades mineras como Potosí, Huancavelica, Castrovirreyna, Cerro de Pasco y Hualgayoc⁶.

En la época republicana quedaron pocos recursos mineros y la mayoría de ellos fueron destinados para la guerra y en 1821 se crea la Dirección General de Minería para restablecer la producción. Además, en esa época Bolívar crea las Direcciones de Minería en capitales de los departamentos para que se dé en licitación minas abandonadas⁷. Las guerras durante ese siglo así como la desvalorización del metal en el mercado mundial trajeron grandes repercusiones y, por ello, en 1890 se tomaron medidas para no gravar a la industria minera con nuevos impuestos por 25 años ni aumentar la tasa ya existente. Únicamente se tendría el canon minero semestral de 15 soles por pertenencia⁸. En 1900 fue promulgado el Código de Minería, que declaraba que la propiedad minera legalmente adquirida era irrevocable y perpetua, la única

² Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, 'Compendio de Yacimientos Minerales del Perú' (2007) capítulo 1 Historia de la Minería del Perú. Pág. 1.

Disponible en <http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/libros/2007/cyamientos/cap01.pdf>.

³ Ibíd. Pág. 1.

⁴ La mita es el trabajo obligatorio y comunal que todos debían que cumplir dentro de la sociedad a favor del Estado.

⁵ Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico. Op. cit. Pág. 3.

⁶ Ibíd. Págs. 6 – 10.

⁷ Ibíd. Pág. 11.

⁸ Ibíd. Pág. 14.

causal de caducidad que se admitía era la falta de pago del canon minero⁹. Las condiciones de trabajo se basaban en reclutar a indígenas con salarios insuficientes y bajo condiciones laborales deplorables¹⁰, pero en 1919 se cambió el régimen al consagrarse la jornada de 8 horas laborales¹¹. Las guerras mundiales contribuyeron al aumento de la valorización de los metales y ello generó que en el Perú se realizaran mayores explotaciones. De esta forma, ya para 1950 se crea el Nuevo Código de Minería y bajo su regulación se producen grandes inversiones mineras, mayores utilidades y se consideran temas como seguridad e higiene¹². Para 1969 la producción minero-metalúrgica nacional representa un 50% de las exportaciones para el Perú. En dicho periodo se crea el Ministerio de Energías y Minas (MINEM), y mediante la Ley General de Minería se divide la actividad en la minería de empresas privadas y públicas¹³. Si bien comienzan a generarse normas aun la regulación es muy dispersa y ante el incremento económico de los metales es necesario desarrollar regulaciones óptimas para su mejor aprovechamiento.

Es así que durante casi toda la historia peruana la actividad minera ha estado presente y vinculada con el Estado. A continuación se analizará cuáles son los fundamentos jurídicos, económicos y socioambientales para la regulación de esta actividad en el Perú.

1.1. Fundamentos de la regulación

En este acápite se desarrollará los fundamentos que explican la regulación minera en el Perú desde los aspectos jurídicos, económicos y socioambientales. De esta forma, se explicará porque en el Perú ha sido necesario regular la minería.

1.1.1. Jurídicos

De acuerdo al artículo 1° de la Constitución Política del Perú la defensa de la persona y el respeto de su dignidad constituyen el fin supremo de la sociedad y el Estado. Del mismo modo el artículo 58° establece que el régimen económico se ejerce en una

⁹ Ibíd. Pág. 15.

¹⁰ Ibíd. Pág. 16.

¹¹ Ibíd. Pág. 16.

¹² Ibíd. Pág. 17.

¹³ Ibíd. Pág. 18.

economía social de mercado. Bajo estas premisas el Tribunal Constitucional¹⁴ (TC) ha señalado que el mejor sistema para la asignación y distribución de los recursos es aquel que propicia la concertación libre entre oferta y demanda: así como que al Estado en este esquema le corresponde crear las condiciones para que las actividades económicas privadas se desarrollen de manera libre y competitiva, procurándoles un marco para su desarrollo eficiente y al mismo tiempo intervenir para corregir las inequidades sociales, a fin de que todos, y no unos pocos, sean partícipes de los beneficios del progreso y del desarrollo económico.

De manera que la explotación de los recursos naturales debe hacerse de forma sostenible y mediante un uso racional; pues dichos recursos pertenecen a la Nación y su desarrollo está orientado a propiciar la equidad social. Por ende, el Estado tiene la obligación de acentuar la búsqueda del equilibrio entre la libertad económica, la eficiencia económica, la equidad social y las condiciones dignas de vida material y espiritual para las actuales y venideras generaciones¹⁵.

En ese sentido, el inciso 22 del artículo 2º de la Constitución Política del Perú señala que toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. La parte referida al ambiente equilibrado se enmarca dentro de las funciones del Estado como garante del bienestar social. Por ello, el TC indica que en el Estado Social y Democrático de Derecho el crecimiento económico no puede ni debe reñirse con el derecho a la plenitud de la vida humana; no puede superponerse al resguardo de la dignidad de la persona que constituye la prioridad no sólo del Estado, sino de la sociedad en su conjunto¹⁶.

Al respecto, el TC¹⁷ también señala lo siguiente:

“Lo “social”, se define aquí desde tres dimensiones: como mecanismo para establecer legítimamente algunas restricciones a la actividad de los privados; como una cláusula que permite optimizar al máximo el principio de solidaridad, corrigiendo las posibles deformaciones que pueda producir el

¹⁴ Sentencia del Tribunal Constitucional N° 0048-2004-PI/TC, Fundamento 12.

¹⁵ Ibíd. Fundamento 13.

¹⁶ Ibíd. Fundamento 15.

¹⁷ Ibíd. Fundamentos 16 - 17.

mercado de modo casi “natural”, permitiendo, de este modo, un conjunto de mecanismos que permitan al Estado cumplir con las políticas sociales que procuren el bienestar de todos los ciudadanos; y, finalmente, como una fórmula de promoción del uso sostenible de los recursos naturales para garantizar un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida.

(...) Sólo de este modo puede considerarse superado el viejo y equívoco postulado del mercado per se virtuoso y el Estado per se mínimo, para ser reemplazado por un nuevo paradigma cuyo enunciado es: “tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario”.

Los artículos 66° y 67° de la Constitución Política del Perú establecen lo siguiente:

“Artículo 66°. Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento.

Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.

Artículo 67°. El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales”.

Dichas disposiciones son la base para la regulación minera en el país; la norma fundamental del Estado establece que los recursos en su estado natural son patrimonio de la Nación y no pueden ser explotados de forma separada al interés nacional, de forma que los beneficios deben alcanzar a la Nación¹⁸, y la utilización debe de ser de forma razonable y sostenible, correspondiendo al Estado el deber de promover las políticas adecuadas a tal efecto¹⁹. De manera que considerando que la actividad minera tiene como base la extracción de recursos naturales que se encuentran en determinado espacio de la naturaleza, el Estado para cumplir con los fines constitucionales de forma armónica e integral debe emplear todos los medios legítimos y razonables que se encuentren a su alcance, limitando, condicionando, regulando, fiscalizando y sancionando las actividades de los particulares hasta donde

¹⁸ *Ibíd.* Fundamento 29.

¹⁹ *Ibíd.* Fundamento 33.

tenga competencias para ello, sea que éstas se realicen de forma independiente o asociada²⁰.

Además de la normativa constitucional que fundamenta la regulación de la actividad minera, la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales²¹ complementa los argumentos al establecer claramente que los recursos minerales son considerados recursos naturales ya que son componentes de la naturaleza, susceptibles de ser aprovechados por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y tienen un valor actual o potencial en el mercado. Asimismo, respecto a esta norma el TC señala que en ningún caso el Estado puede abdicar de su *ius imperium* para regular el aprovechamiento de los recursos naturales que son de la Nación²².

La Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales también establece que los derechos para el aprovechamiento de los recursos naturales se otorgan a los particulares mediante las modalidades que establecen las leyes especiales para cada recurso natural. La retribución económica incluye todo concepto que deba aportarse al Estado por el recurso natural, ya sea como contraprestación, derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título que contiene el derecho, establecidos por las leyes especiales²³. Sus condiciones se determinan por criterios económicos, sociales y ambientales.

La sentencia citada define acertadamente a la concesión minera como una especie de concesión de dominio público, y que tiene la naturaleza jurídica de un acto administrativo estable e irrevocable²⁴. El otorgamiento del derecho a explotar constituye la concesión minera, derecho real que constituye la suma de atributos que la Ley confiere a esta clase de concesionarios²⁵.

²⁰ Ibíd. Fundamento 38.

²¹ Artículo 3° Ley N° 26821. Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales.

²² Sentencia del Tribunal Constitucional N° 0048-2004-PI/TC, Fundamento 45.

²³ Artículos 19° y 20°. Ley N° 26821. Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales.

²⁴ Sentencia del Tribunal Constitucional N° 0048-2004-PI/TC, Fundamento 99-101.

²⁵ Artículo 10°. Decreto Supremo N° 014-92-EM. TUO de la Ley General de Minería

1.1.2. Económicos

Dentro de los fundamentos económicos para la regulación de la actividad minera debemos analizar la propia naturaleza de los minerales y de la misma actividad. Como bien se sabe el mercado puede funcionar eficientemente bajo la ley de la oferta y de la demanda, lográndose un punto de equilibrio que maximiza el excedente del consumidor y del productor, llegando así al bienestar total²⁶; y ello se puede obtener sin necesidad de la intervención del Estado. Se busca que no haya recursos infrautilizados alcanzando el resultado con el mínimo coste posible. Así como se pretende la eficiencia productiva y asignativa²⁷, es decir que el precio sea igual al coste marginal. De manera que para que exista un mercado en competencia perfecta debe haber productos homogéneos, información perfecta y simétrica, libre entrada y salida, y muchos oferentes y demandantes con un precio aceptante²⁸. Asimismo, se debe buscar que el mercado sea universal estando por ello todos representados en el mismo. Esto se ve traducido en los dos teoremas fundamentales de la Economía del Bienestar²⁹: (i) los mercados competitivos llevan a asignaciones Pareto-eficientes y; (ii) cualquier asignación eficiente se puede lograr mediante mercados competitivos si distribuimos correctamente las dotaciones iniciales de derechos. Sin embargo, hay casos donde estos teoremas no se pueden llevar a cabo y es por ello que la regulación pública se ve justificada.

Una de las razones para que los mercados no puedan funcionar eficientemente son las fallas del mercado³⁰. Dentro de las cuales se encuentran las externalidades, los bienes públicos, los monopolios naturales, el logro de objetivos de equidad y la información asimétrica o imperfecta. Para llegar a las situaciones de óptimo social es necesaria la regulación puesto que, de otro modo, las actividades que contengan fallas del mercado no lograrían alcanzar los objetivos de eficiencia o de equidad. De forma que la

²⁶ Paul Krugman, Robin Wells y Kathryn Graddy. *Fundamentos de Economía*. (Segunda Edición. Editorial Reverté. Barcelona 2013). Págs. 98-103

²⁷ La eficiencia productiva es utilizar los recursos de la mejor forma y la eficiencia asignativa es la traslación de las ventajas a los consumidores.

²⁸ El precio aceptante nadie puede influir con sus acciones individuales en el precio de mercado. Mayor detalle en Krugman, Wells y Graddy. Op. cit. Págs. 198.

²⁹ Robert Cooter y Thomas Ulen. *Derecho y Economía*. (Fondo de Cultura Económica. México 2002). Págs. 60-66.

³⁰ Agustín Molina y Almudena Guarnido. *Fallos de Mercado y Regulación Pública*. Temas actuales de Economía. (Universidad de Almería 2009). Págs. 134-139.

regulación cuenta con instrumentos jurídicos mediante los cuales las instituciones públicas imponen obligaciones o restricciones a la actuación del sector privado³¹. Asimismo, es importante considerar que hay escenarios donde la competencia no es aconsejable como en los monopolios naturales donde resulta mejor que se use la competencia por el monopolio; igualmente, los costes de transacción para introducir competencia podrían ser demasiado elevados y por ello resulta más eficiente no hacerlo³².

En el caso de la actividad minera esta se desarrolla en un espacio determinado geográficamente donde se encuentran los minerales. De manera que no resulta óptimo que en dicho espacio operen varias empresas extrayendo el mineral. En este caso el coste de explorar y explotar una cantidad del recurso resulta menor si lo realiza una sola empresa que si son varias³³. Además, dentro de la actividad minera se presentan economías de escala³⁴, ya que para extraer el mineral se necesita gran infraestructura y tecnología; es así que el coste por las primeras unidades de mineral resulta ser mayor que por las últimas.

Otra falla del mercado que también genera la actividad minera son las externalidades. Las actividades mineras como la exploración y explotación pueden generar impactos significativos en el entorno donde se desarrollan. Por su propia naturaleza, estas actividades generan externalidades negativas como la contaminación ambiental. Así, la actividad minera sin regulación puede provocar un daño a otro sin que medie compensación. Es por ello que se debe considerar no solo el coste o beneficio privado, sino el coste y beneficio social. Si se deja al mercado resolverlo se llega al óptimo privado pero no al óptimo social y, en consecuencia, se pueden generar ineficiencias. De manera que el Estado peruano ha visto conveniente regular la actividad minera mediante la figura de concesiones, lo que se explicará en el capítulo sobre legislación minera.

³¹ Molina y Guarnido. Op. cit. Págs. 130-134.

³² Ibíd. Pág. 136-137.

³³ Este vendría a ser el concepto de Subaditividad. Para mayor detalle consultar: Miguel Ángel Lasheras. *La regulación económica de los servicios públicos*. (1999). Págs. 32-37

³⁴ Krugman, Wells y Graddy. Op. cit. Págs. 229-230.

1.1.3. Socioambientales

El medio ambiente se puede definir como el conjunto de elementos sociales, culturales, bióticos y abióticos que interactúan en un espacio y tiempo determinado; dentro de ellos se encuentran los recursos naturales. Los recursos naturales son todos aquellos recursos que el ser humano encuentra en su ambiente y que puede utilizar en su beneficio³⁵. Dentro de la clasificación normativa están los recursos no renovables. Estos son aquellos que al ser utilizados se agotan irremediablemente. Su utilización o provecho comporta la extinción de su fuente productiva³⁶. Es el caso de los minerales, el petróleo, el carbón, el gas natural, etc.

Como bien se desarrolló en el acápite anterior una de las principales externalidades que genera la minería es la contaminación ambiental. Es posible considerar que esto se debe principalmente a tres factores: (i) las técnicas de alto impacto ambiental de las actividades de exploración y explotación; (ii) la localización geográfica de los recursos minerales; y (iii) la propia naturaleza contaminante de los recursos minerales. De este modo los riesgos ambientales y su impacto pueden ser determinados por lo siguiente: el tamaño de la explotación, la localización, el método de la explotación, la característica de los minerales y su tratamiento.

Dependiendo de la fase de la actividad minera los impactos, riesgos y amenazas serán distintos pero en la mayoría habrá un impacto considerable. Por ejemplo, en la prospección se construyen caminos y ello podría alterar el paisaje natural. Igualmente, podría darse una tala indiscriminada de árboles, lo cual puede ocasionar erosión de los suelos y la sedimentación de ríos y arroyos en hábitats muy sensibles. Además, también se suele generar ruidos que pueden perturbar la fauna existente. En la fase de exploración podría generarse contaminación de los acuíferos y alteración de la vegetación, así como ruido y vibración por motores y por la sísmica. Para la realización de operaciones es necesario también trasladar personal y construir campamentos temporales, lo que puede generar alteraciones en el entorno y en el abastecimiento de agua para la población. En la fase de construcción del proyecto minero hay mucho movimiento de maquinaria y equipo pesado lo que puede crear polvo, ruido y vibración. Por último, en la fase de explotación, ya sea en minería

³⁵ Artículo 3º Ley N° 26821. Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales.

³⁶ Artículo 4º Ley N° 26821. Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales.

subterránea o atajo abierto, se distorsiona el hábitat, se genera vibración, polvo y ruido. Asimismo, se puede originar exposiciones de minerales a agentes erosivos, gases de combustión y polvo de vehículos, derrame de materiales peligrosos durante el transporte de los mismos, lluvias ácidas, incendios y explosiones, entre otros³⁷. De forma que es posible indicar que la actividad, por su propia naturaleza, origina perturbaciones al ambiente que se encuentran intrínsecas a la extracción de los minerales. En ese sentido, resulta necesaria la intervención del Estado para regular que esas externalidades sean internalizadas por las empresas mineras. Mediante la regulación se puede exigir estudios de impacto ambiental (EIA), supervisión y fiscalización con el objeto de llevar a cabo una efectiva remediación y mitigación en el ambiente, así como compensar e indemnizar a la población si fuera necesario.

Dentro del contexto socioambiental se debe reconocer que si bien la minería es una actividad muy antigua en el Perú su regulación no ha tomado en cuenta desde sus inicios consideraciones ambientales y sociales. En este sentido no ha existido normatividad ambiental para las actividades del sector, se ha dado poca o nula fiscalización y control ambiental. Además, ha habido una limitada conciencia ambiental en las empresas operadoras del sector.

Adicionalmente, los recursos minerales se encuentran en zonas alejadas del país donde la geografía es muy difícil y la población ha sido excluida por el Estado históricamente. Estas poblaciones comparten costumbres y tradiciones particulares y sus economías se basan en el autoconsumo. En este sentido, la población que se encuentra en estas zonas ha desarrollado un vínculo con la tierra y los recursos naturales que no se limita a su aprovechamiento económico, sino que la naturaleza y los recursos que esta provee son parte de su tradición, cultura y espiritualidad.

Las poblaciones que habitan en estos lugares no logran entender por qué llega una empresa minera de gran envergadura con grandes maquinarias a extraer los recursos naturales de la zona para un beneficio económico privado. Se da así un choque cultural generado por una actividad económica. La población de escasos recursos

³⁷ Zoila Martínez, 'Guías prácticas para situaciones específicas: manejo de riesgos y preparación para respuestas a emergencias mineras' (2003) Naciones Unidas Comisión Económica para América Latina y el Caribe, División de Recursos Naturales e Infraestructura, Serie 57 Recursos Naturales e Infraestructura. Pág. 21-31. Disponible en: <http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/0/13040/Lcl1936e.pdf>

percibe la actividad como una oportunidad y una amenaza, puede ser una oportunidad laboral pero al mismo tiempo se temen los impactos que pueda generar en su hábitat y en las actividades que ellos desarrollan como la agricultura y ganadería. Existe una correlación entre los impactos económicos, sociales y ambientales. La generación de impactos de la actividad minera sobre fuentes de aguas, de las cuales dependen los pobladores, ocasiona una predisposición negativa con la empresa que va a convivir en la misma zona. Adicionalmente a ello, existe la posibilidad que la actividad minera se desarrolle en sus tierras, eso origina que la población considere que debe verse beneficiada por la actividad minera como forma de compensación. Además, al ser la empresa minera la única presencia ajena a ellos se le demanda servicios públicos al percibir que en sus campamentos sí se cuenta con agua potable, saneamiento, etc. La actividad minera trae consigo mayor comercio en la zona pero al mismo tiempo ello también puede ocasionar problemas de violencia sexual, narcotráfico, prostitución, cambios en las normas sociales, consumo de drogas y de alcohol, entre otros³⁸.

En ese sentido resulta fundamental que el Estado pueda regular esta situación y establezca condiciones claras para la empresa y para la población dentro de un marco jurídico estable. Sobre todo considerando que, de acuerdo con la regulación, la concesión minera se otorga únicamente respecto a los recursos naturales que se encuentran en el subsuelo y no sobre el terreno superficial. De manera que en la mayoría de casos las empresas deben negociar con la población para poder establecerse en sus tierras. Hemos tenido la oportunidad de señalar que es necesario un árbitro no sólo este al momento de la negociación, sino que participe desde antes y después del proceso de manera eficaz y continua³⁹.

³⁸Daniel Franks, 'Evaluación del impacto social de los proyectos de recursos' (2012) The International Mining for Development Centre, Mining for Development: Guide to Australian Practice. Pág. 5. Disponible en: http://im4dc.org/wp-content/uploads/2012/01/UWA_1833_Paper-2_Spanish-version_Social-impactassessment-of-resource-projects.pdf

³⁹Andrea Domínguez, 'El juego de jalar la cuerda entre las Empresas y las Comunidades' (2010) Enfoque Derecho. Disponible en: <http://www.enfoquederecho.com/?q=node/292/>

1.2. Normativa minera en el Perú

1.2.1. Legislación y actividad minera

Como se mencionó la actividad minera está presente en el Perú desde hace varios siglos. Sin embargo, su regulación data desde algunas décadas atrás. Las primeras normas fueron el código de minería de 1901 y 1950. Luego en 1970, 1971 y 1981 se promulgó la Ley General de Minería. En 1989 se estableció la Comisión Técnica Multisectorial para desarrollar el caso Southern Perú⁴⁰. En 1990 se creó el Código del Medio Ambiente que desarrolló en mayor medida la regulación ambiental minera. Posteriormente se promulgó el Decreto Legislativo 708 y el Reglamento ambiental para el sector minero metalúrgico de 1993.

Actualmente la legislación minera en el Perú principalmente comprende a la propia Constitución Política del Perú que hace referencia a los recursos naturales, la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, Texto Único Ordenado (TUO) de La Ley General de Minería⁴¹, el Reglamento de Procedimientos Mineros⁴² y el Reglamento de Organización y Funciones de Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET)⁴³. Para el desarrollo de la legislación minera nos centraremos particularmente en el TUO de la Ley General de Minería.

De acuerdo a lo establecido en la propia Constitución Política del Perú y normativa mencionada los recursos minerales pertenecen al Estado cuya propiedad es inalienable e imprescriptible. Esto quiere decir que no es transferible ni temporal. Asimismo, la actividad minera está considerada como de utilidad pública y su promoción es de interés nacional. Las entidades encargadas de la actividad Minera son el MINEM, el INGEMMET, Pro inversión, y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). La primera de ellas se encarga de establecer la regulación, la segunda es la que determina técnicamente los petitorios y registro de catastro minero, la tercera es el organismo que se encarga de la promoción de la inversión en este sector y finalmente

⁴⁰ Comisión creada para buscar soluciones a los problemas ambientales de Southern Perú. Southern Perú es una empresa minera que viene operando en el Perú desde 1950. Más información en: <http://www.southernperu.com/ESP/Pages/default.aspx>

⁴¹ Decreto Supremo N° 014-92-EM, publicado el 04 de Junio de 1992.

⁴² Decreto supremo N° 018-92-EM, publicado el 08 de Septiembre de 1992.

⁴³ Decreto supremo N° 035-2007-EM, publicado el 06 de Julio de 2007.

la OEFA es la entidad encargada de la fiscalización y supervisión en materia ambiental.

La concesión minera otorga el derecho de exploración y explotación de los recursos minerales concedidos que se encuentren dentro de un sólido de profundidad indefinida, limitado por planos verticales correspondientes a los lados de un cuadrado, rectángulo o poligonal cerrada, cuyos vértices están referidos a coordenadas Universal Transversal Mercator⁴⁴. Se otorgan en extensiones de 100 a 1,000 has, en cuadrículas colindantes al menos por un lado⁴⁵. La concesión minera es un derecho real y por tanto es considerado como un inmueble distinto y separado del predio donde se encuentre ubicado. Asimismo, las concesiones son irrevocables pero el titular debe cumplir con una serie de obligaciones establecidas en la normativa para mantenerlas. Las concesiones confieren al titular del derecho la posibilidad de convertirse en propietario de las sustancias extraídas.

Dentro de los atributos de los concesionarios⁴⁶ está el uso gratuito de la superficie de la concesión cuando esta se encuentra en terreno eriazos de propiedad del Estado, el derecho a solicitar una servidumbre, el uso de aguas para las operaciones mineras o para personal de la concesión y el derecho a inspeccionar concesiones vecinas cuando se tema de un derrumbe. Desde 1995 ya no se encuentra vigente el derecho a solicitar expropiaciones puesto que la Constitución Política del Perú establece que solo se llevará a cabo por causas de seguridad nacional o necesidad pública, y la actividad minera es de utilidad pública y la promoción de inversiones de interés nacional.

Las obligaciones mineras que establece el TUO de la Ley General de Minería se basan en el sistema de amparo por el trabajo donde a través del sistema de producción se establece un valor mínimo de venta que debe de ser alcanzado por el concesionario⁴⁷. Es decir, se exige una producción mínima. Asimismo, existen una serie de pagos que deben realizarse, estos son:

- El derecho de vigencia, que debe pagarse al momento de solicitar el petitorio de la concesión minera ante la autoridad competente. Es decir, es el pago

⁴⁴ Artículo 9° TUO de la Ley General de Minería

⁴⁵ Artículo 11° TUO de la Ley General de Minería

⁴⁶ Artículo 37° TUO de la Ley General de Minería

⁴⁷ Artículo 38° TUO de la Ley General de Minería.

anual que realiza todo titular de cualquier concesión minera para el mantenimiento de su condición de titular sobre el área concesionada. Este pago es recaudado por el INGEMMET. El derecho de vigencia es un pago que se hace anualmente y se calcula considerando el número de hectáreas que tenga el denunciado minero y la tasa que le corresponda al tipo de titular minero de acuerdo a la normativa. Se distribuye el 100% del monto recaudado, considerando en la distribución a los municipios donde se encuentran ubicadas las concesiones mineras⁴⁸.

- El pago de la regalía minera, es el pago que deben realizar los titulares de las concesiones mineras al Estado por la extracción de los recursos minerales. Este monto es recaudado por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). La empresa debe realizar el cálculo de la regalía minera que le corresponderá pagar cada mes, de acuerdo al esquema que establece la Ley de Regalía Minera⁴⁹. El monto de la regalía minera se obtiene de multiplicar el valor bruto de las ventas del concentrado (que se valoriza según los precios internacionales de los minerales) con un porcentaje que puede ser 1%, 2% o 3%. De acuerdo a Ley se distribuye el 100% del monto de la regalía minera a los Gobiernos Regionales y Locales, así como universidades de la zona. La Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se encarga de realizar los cálculos que determinan los montos que le corresponde a cada Gobierno Regional o Local, en función a la siguiente información: (i) los montos de regalía minera que tiene la SUNAT para cada una de las empresas mineras; (ii) la ubicación de cada una de las operaciones mineras del país que registra el MINEM; (iii) los datos sobre las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) que calcula el Instituto Nacional de Estadística e Informática; (iv) el criterio de distribución que indica la Ley de Regalía Minera⁵⁰.

⁴⁸ Ministerio de Energía y Minas – Iniciativa Para la Transparencia de las Industrias Extractivas en el Perú, ‘Origen, Distribución y Uso de las Rentas de la Extracción de los Recursos Minerales’ (2008, Cartilla Informativa N° 2). Pág. 6. Disponible en:

http://eitiperu.minem.gob.pe/images/archivos/cartillas/CARTILLA_2_EITI_final_23_marzo.pdf

⁴⁹ Artículo 2° Ley N° 28258. Ley de Regalía Minera

⁵⁰ Ministerio de Energía y Minas – Iniciativa Para la Transparencia de las Industrias Extractivas en el Perú. Op.cit. Pág. 4.

La regalía minera se distribuye mensualmente y debe efectuarse dentro del mes posterior al pago realizado. El abono por regalía minera se hace mediante un depósito en cuentas especiales en el Banco de la Nación, creadas por cada uno de los Gobiernos Regionales y Locales que reciben este beneficio. Los Gobiernos Regionales y Locales pueden utilizar los recursos económicos provenientes de la regalía minera para financiar o cofinanciar proyectos de inversión pública⁵¹.

- El pago del canon minero, es la participación efectiva y adecuada de la que gozan los Gobiernos Regionales y Locales del total de ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación económica de los recursos mineros. Es decir, el canon, es la participación de la renta económica ya recaudada dispuesta por el Estado a favor de los Gobiernos Regionales y Locales de las zonas de explotación de recursos. En ese sentido, efectuada la recaudación y regularización anual del Impuesto a la Renta, el Estado transfiere el 50% de los ingresos captados por dicho concepto a las zonas en donde se explotó el recurso minero⁵². La distribución de la misma se desarrollará más adelante en el presente documento (punto 1.2.2).

Es importante destacar que la propia jurisprudencia del TC Peruano ha establecido que la regalía minera, el pago del derecho de vigencia y el canon minero constituyen diferentes tipos de retribución económica⁵³. Por un lado la regalía es una retribución económica contraprestativa por el usufructo de lo que se extrae del titular de la concesión minera a los Gobiernos Regionales y Locales por la explotación de recursos naturales no renovables, justificada en la necesidad de la Nación de recibir beneficios de sus propios recursos antes que se agoten⁵⁴. El derecho de vigencia en cambio es una retribución económica basada en el mantenimiento de la concesión⁵⁵. Mientras que el canon minero no es un pago, sino de una compensación del Estado a los Gobiernos Regionales y Locales respecto a la distribución de ingresos ya recaudados. La compensación será la distribución de los ingresos recaudados a las zonas donde se

⁵¹ Ibíd. Pág. 5.

⁵² Artículo 1º Ley N° 27506. Ley de Canon

⁵³ Sentencia del Tribunal Constitucional N 0048-2004-PI/TC, Fundamento 51 - 53.

⁵⁴ Ibíd. Fundamento 53.

⁵⁵ Ibíd. Fundamento 55.

explotan los recursos minerales, garantizándose la participación directa de la población local en el beneficio del reparto⁵⁶.

Además de las obligaciones referidas a la producción mínima y a los pagos, los concesionarios también deben presentar una declaración anual consolidada con información respecto de la actividad y el titular. Del mismo modo deben cumplir con las obligaciones de bienestar y seguridad, así como de protección ambiental que establece el ordenamiento jurídico peruano.

Las actividades mineras son cateo, prospección, exploración y explotación, labor general, beneficio, comercialización y transporte minero⁵⁷. El ejercicio de las actividades mineras excepto el cateo, la prospección y la comercialización, se realiza exclusivamente bajo el sistema de concesiones. El TUO de la Ley General de Minería establece las siguientes actividades:

- El cateo es la acción conducente a poner en evidencia indicios de mineralización por medio de labores mineras elementales.
- La prospección es la investigación conducente a determinar áreas de posible mineralización, por medio de indicaciones químicas y físicas, medidas con instrumentos y técnicas de precisión.
- La concesión minera otorga a su titular el derecho a la exploración y explotación de los recursos minerales concedidos. La exploración es la actividad minera tendente a demostrar las dimensiones, posición, características mineralógicas, reservas y valores de los yacimientos de minerales. La explotación es la actividad de extracción de los minerales contenidos en un yacimiento.
- La actividad de beneficio es el conjunto de procesos físicos, químicos y/o físico-químico que se realizan para extraer o concentrar las partes valiosas de un agregado de minerales y/o para purificar, fundir o refinar metales.

⁵⁶ Ibíd. Fundamento 52.

⁵⁷ TUO de la Ley General de Minería

- Labor general es toda actividad minera que presta servicios auxiliares, tales como ventilación, desagüe, izaje o extracción a dos o más concesiones de distintos concesionarios.
- La comercialización de productos minerales es una actividad libre, interna y externamente y para su ejercicio no se requiere el otorgamiento de una concesión.
- Transporte minero es todo sistema utilizado para el transporte masivo continuo de productos minerales, por métodos no convencionales como fajas transportadoras, tuberías, o cable carriles.

De acuerdo a la mencionada norma, para obtener una concesión en la actividad minera el solicitante debe presentar un petitorio de concesión minera ante el INGEMMET. Dicho petitorio viene acompañado de una Declaración Jurada del solicitante donde se compromete a realizar sus actividades productivas de acuerdo al marco legal y la normativa ambiental. Igualmente, se obliga a actuar con respeto frente a las costumbres locales, manteniendo una relación propicia con la población del área de influencia de la operación minera, así como a mantener un diálogo continuo y oportuno con las autoridades regionales y locales, la población del área de influencia de la operación minera y sus organismos representativos, alcanzándoles información sobre sus actividades mineras. Finalmente, debe fomentar preferentemente el empleo local, adquirir preferentemente los bienes y servicios locales para el desarrollo de las actividades mineras y la atención del personal, entre otros.

Sin embargo, es importante considerar que el título de concesión no autoriza por si mismo a realizar las actividades mineras, sino que previamente se deberá cumplir con una serie de requisitos como: (i) gestionar aprobaciones respecto a la existencia de restos arqueológicos en la zona con el Instituto Nacional de Cultura (INC); (ii) contar con la certificación ambiental y cumplir con las normas de participación ciudadana o consulta previa; (iii) obtener el permiso para la utilización de tierras mediante acuerdo previo con el propietario del terreno superficial o la culminación del procedimiento de servidumbre administrativa, conforme a la reglamentación sobre la materia; y (iv)

obtener las demás licencias, permisos y autorizaciones que son requeridos en la legislación vigente.

A partir de la década de 1990 en el Perú se empieza a realizar una verdadera regulación minero ambiental principalmente a través del Reglamento para la Protección Ambiental en la Actividad Minero Metalúrgica⁵⁸. De acuerdo a dicha norma, las actividades de exploración y explotación, de beneficio, de labor general y de transporte minero, deben contar con EIA aprobados previo al inicio de las actividades. Los estudios deben evaluar y describir los aspectos físico-naturales, biológicos, socio-económicos y culturales en el área de influencia del proyecto, con el fin de determinar las condiciones existentes y capacidades del medio, analizar la naturaleza, magnitud y prever los efectos y consecuencias de la realización del proyecto, indicando medidas de previsión y control a aplicar para lograr un desarrollo armónico entre las operaciones de la industria minera y el medio ambiente. Asimismo, deben cumplir con obligaciones de monitoreo periódico de las emisiones y calidad de aire, monitoreo de los efluentes y calidad de agua, así como presentar un reporte trimestral al MINEM.

De manera que es responsabilidad del operador minero las emisiones y vertimientos que se arrojen al medio ambiente y poner en marcha programas de previsión y control contenidos en el EIA y Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). El EIA es un instrumento de gestión ambiental que contiene una descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos previsibles de dicha actividad en el medio ambiente físico y social, a corto y largo plazo, así como la evaluación técnica de los mismos⁵⁹. El PAMA es el programa que contiene las acciones e inversiones necesarias para incorporar a las operaciones minero-metalúrgicas los adelantos tecnológicos y/o medidas alternativas que tengan como propósito reducir o eliminar las emisiones y/o vertimientos para poder cumplir con los niveles máximos permisibles establecidos por la autoridad competente⁶⁰. Asimismo, los operadores mineros deben adoptar medidas y buenas prácticas para prevenir,

⁵⁸ Decreto Supremo 016-93-EM. Reglamento para la Protección Ambiental en la Actividad Minero Metalúrgica.

⁵⁹ Artículo 25°. Ley N° 28611. Ley General del Ambiente.

⁶⁰ Artículo 26°. Ley N° 28611. Ley General del Ambiente

controlar, monitorear, mitigar o reparar los impactos y ejecutar las medidas de cierre y post-cierre de la actividad.

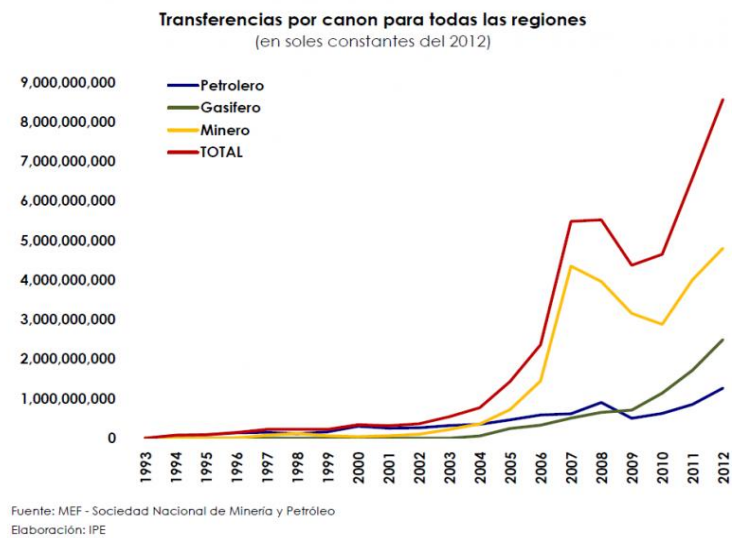
La Dirección General de Asuntos Medioambientales Mineros del MINEM es la autoridad competente para evaluar y aprobar los EIA y PAMAS. El OEFA es el organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM), para supervisar, fiscalizar y sancionar la regulación ambiental.

1.2.2. Ley de Canon y su reglamento

Como ya se mencionó el canon es la participación efectiva y adecuada de la que gozan los Gobiernos Regionales y Locales del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación económica de los recursos mineros. Así, efectuada la recaudación del Impuesto a la Renta, el Estado por intermedio de la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) transfiere un porcentaje de los ingresos captados por dicho concepto a las zonas en donde se explotó el recurso minero.

De acuerdo con el artículo 9° de la Ley de Canon, el mismo está constituido por el 50% del total de ingresos y rentas obtenidas por el Estado por el aprovechamiento de los recursos minerales. Cabe destacar que el canon minero es el más importante de los 6 tipos de canon existentes (minero, petrolero, gasífero, hidroenergético, forestal y pesquero), debido al enorme volumen de recursos que genera para las zonas donde se distribuye. En la figura 1 se puede apreciar las transferencias de canon a todas las regiones del 1993 hasta el 2012. Del mismo grafico es de destacar que el canon minero es el que ha generado mayores ingresos.

Figura 1: Transferencia de canon para todas las regiones del 2012



Fuente: MEF y Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE⁶¹)

En el Perú el canon ha sido previsto constitucionalmente en el artículo 77° señalándose que:

“Corresponden a las respectivas circunscripciones, conforme a ley, recibir una participación adecuada del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la explotación de los recursos naturales en cada zona en calidad de canon”.

Por ello, la Ley de Canon establece que todos los funcionarios y servidores públicos que administren los recursos públicos transferidos a las entidades de su dirección o gobierno son responsables por el buen uso de los mismos y tienen la obligación de rendir cuentas semestrales de los gastos efectuados a la Contraloría General de la República. Asimismo, se menciona que la ejecución de las obras, los gastos incurridos y los logros alcanzados estarán sujetos a la fiscalización posterior de los pobladores mediante la rendición de cuentas.

1.2.2.1. Distribución y utilización del canon minero

La Ley del Canon y su reglamento también hacen referencia a la distribución y utilización del mismo. El artículo 3° del reglamento de la Ley de Canon señala que el

⁶¹ Elaborado por el Instituto Peruano de Economía. Disponible en: <http://ipe.org.pe/comentario-diario/09-8-2013/quien-corta-peor-el-jamon>

canon será distribuido a los Gobiernos Regionales y Locales en cuya circunscripción se exploten o utilicen los recursos naturales.

Para ello resulta oportuno mencionar que la Constitución Política del Perú establece una forma de organización descentralizada y en base a ello desarrolla su política con el objetivo de integrar todo el país⁶². De acuerdo a lo indicado en el artículo 189° de la Constitución Política del Perú el territorio peruano se encuentra conformado de la siguiente manera:

“(....) por regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local. El ámbito del nivel regional de gobierno son las regiones y departamentos (...) El ámbito del nivel local de gobierno son las provincias, distritos y los centros poblados (...)”

Asimismo, cabe mencionar que hoy en día las regiones son consideradas como departamentos pues todavía no se ha creado una región distinta a ellos a pesar de ser el objetivo a largo plazo mediante un referéndum. Mientras esto no ocurra, en la práctica no hay mayor diferencia entre ambos términos. Resulta relevante resaltar que los Gobiernos Regionales y Locales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia⁶³.

De acuerdo a la Ley de Canon, el canon minero generado en un año determinado se distribuye desde junio del año siguiente a su recaudación, hasta mayo del año siguiente. Es decir, la distribución se hace con 18 meses de retraso, sobre todo considerando la regularización del Impuesto a la Renta⁶⁴.

La distribución de acuerdo a la normativa⁶⁵ es la siguiente:

- a) El 10% (diez por ciento) del total recaudado para los gobiernos locales de la municipalidad o municipalidades distritales donde se encuentra localizado el recurso natural.*

⁶² Artículo 188° de la Constitución Política del Perú.

⁶³ Artículo 191° de la Constitución Política del Perú.

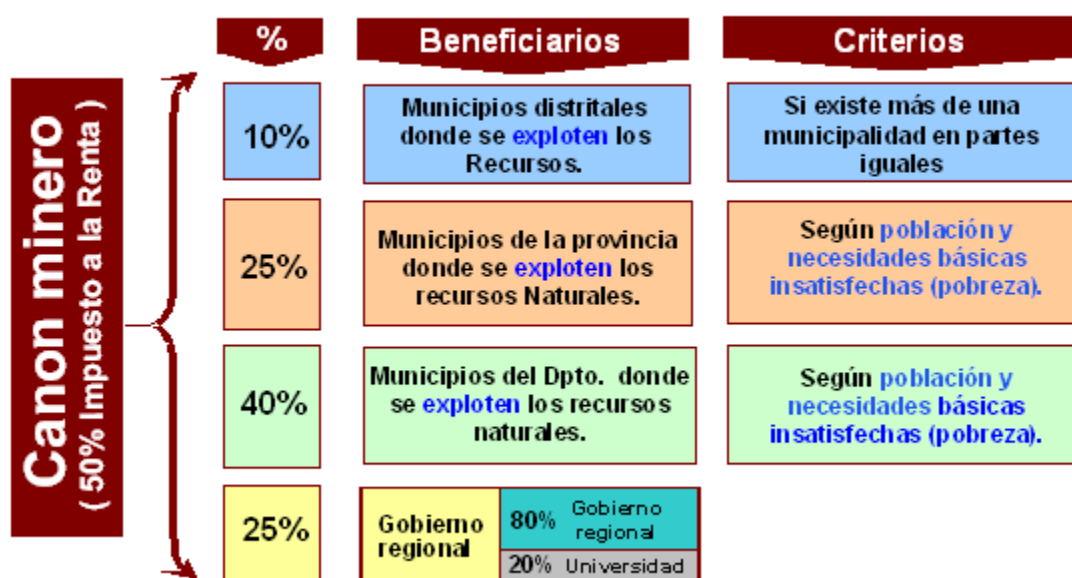
⁶⁴ Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, ‘¿Qué es el Canon Minero?’ (2013). Disponible en: <http://www.snmpe.org.pe/informes-y-publicaciones-snmpe/canon/canon-en-cifras/que-es-el-canon-minero.html>

⁶⁵ Artículo 5° de la Ley N° 27506. Ley de Canon.

- b) El 25% (veinticinco por ciento) del total recaudado para los gobiernos locales de la provincia o provincias donde se encuentra localizado el recurso natural, excluyendo al distrito o distritos productores.
- c) El 40% (cuarenta por ciento) del total recaudado para los gobiernos locales del departamento o departamentos de las regiones, excluyendo a la provincia o provincias donde se encuentra el recurso natural.
- d) El 25% (veinticinco por ciento) del total recaudado para los gobiernos regionales donde se encuentra el recurso natural.

Este esquema de distribución puede observarse en el diagrama de la figura 2 a continuación:

Figura 2: Grafico por distribución del canon minero de acuerdo a la normativa



Fuente: MEF⁶⁶

Cuando una operación minera que genera canon se encuentra en dos o más regiones la distribución del canon será proporcional al valor de ventas del concentrado proveniente de cada región.

⁶⁶Portal Web del MEF. Disponible en:
http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2296%3Acanon-metodologia-de-distribucion&catid=150&Itemid=100848&lang=en

En ese sentido, para realizar la distribución se toma como referencia los indicadores que son calculados por el MEF⁶⁷. Dichos cálculos se realizan en razón de varios criterios como población y pobreza, vinculados a la carencia de necesidades básicas y déficit de infraestructura. Para ello se toma en cuenta índices de distribución de fuentes oficiales. Se recoge información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para determinar las proyecciones de la población estimada a nivel departamental, provincial y distrital; e indicadores de pobreza vinculado a necesidades básicas insatisfechas y déficit de infraestructura según departamentos, provincias y distritos. Asimismo, se considera información del MINEM, como el listado de empresas concesionarias de generación de energía eléctrica que utilicen el recurso hídrico, las centrales de generación de energía hidroeléctrica, niveles de producción y su ubicación a nivel distrital, provincial y departamental. También se toma en cuenta la utilidad bruta y/o ventas netas desagregadas por actividades en el caso de empresas que realizan diversas actividades de las que se derivan más de un canon proveniente de un monto de Impuesto a la Renta único. Por último también se utiliza información de la SUNAT que indica cuales son los montos de Impuesto a la Renta pagados por las empresas que explotan el recurso natural⁶⁸. Por ejemplo, en julio del 2013 se aprobó la Resolución Ministerial que determino los Índices de Distribución del canon minero proveniente del Impuesto a la Renta correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012⁶⁹.

Los recursos que los Gobiernos Regionales y Locales reciban por concepto de canon deben ser utilizados exclusivamente para el financiamiento o co-financiamiento de proyectos u obras de impacto regional y local. Para ello el Gobierno Regional o Local tendrá que establecer una cuenta destinada a dicha finalidad específica. Desde el 2006 se está permitiendo que los Gobiernos Regionales y Locales utilicen hasta el 20% de los recursos provenientes del canon para el mantenimiento de la infraestructura generada por los proyectos de impacto regional y local⁷⁰. Asimismo, podrán destinar hasta el 5% para financiar la elaboración de perfiles correspondientes a los proyectos

⁶⁷ Ibíd.

⁶⁸ Ibíd.

⁶⁹ Resolución Ministerial N° 209-2013-EF/15 -Aprueban Índices de Distribución del Canon Minero proveniente del Impuesto a la Renta correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012.

⁷⁰ Portal Web del MEF. Op. cit.

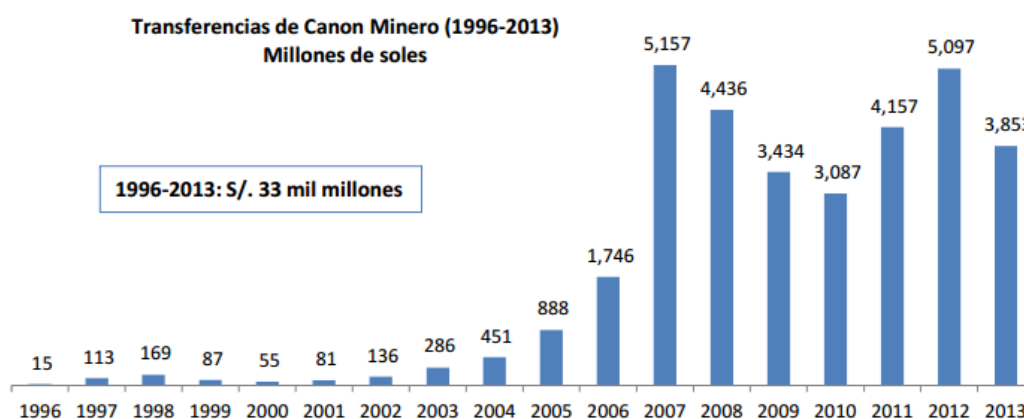
de inversión pública que se enmarquen en los respectivos planes de desarrollo concertado.

1.2.2.2. Datos sobre la transferencia y ejecución del canon minero en los departamentos

El canon viene a ser un reflejo de la rentabilidad del sector. Por ello dependerá de su evolución, sobre todo considerando el precio internacional de los minerales, para captar más o menos recursos vía Impuesto a la Renta. En el caso peruano se puede apreciar que la crisis financiera influyó para una reducción sustancial en el canon, sin embargo, desde el 2010 se viene recuperando.

De acuerdo a la información recabada por el MEF⁷¹ que se muestra en la figura 3, en los últimos 18 años se han transferido a los Gobiernos Regionales y Locales más de 33 mil millones de soles⁷² por concepto de canon minero. Cabe indicar que antes del 2007 se distribuía únicamente el 20%, sin embargo después de esa fecha se aumentó el porcentaje a 50%.

Figura 3: Transferencias de canon minero de 1996 a 2013



Fuente: MEF⁷³

⁷¹ Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, 'Reporte Canon Minero. Transferencias 2013' (2014). Disponible en: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/pdf-76205-reporte-canon-minero-2013.pdf

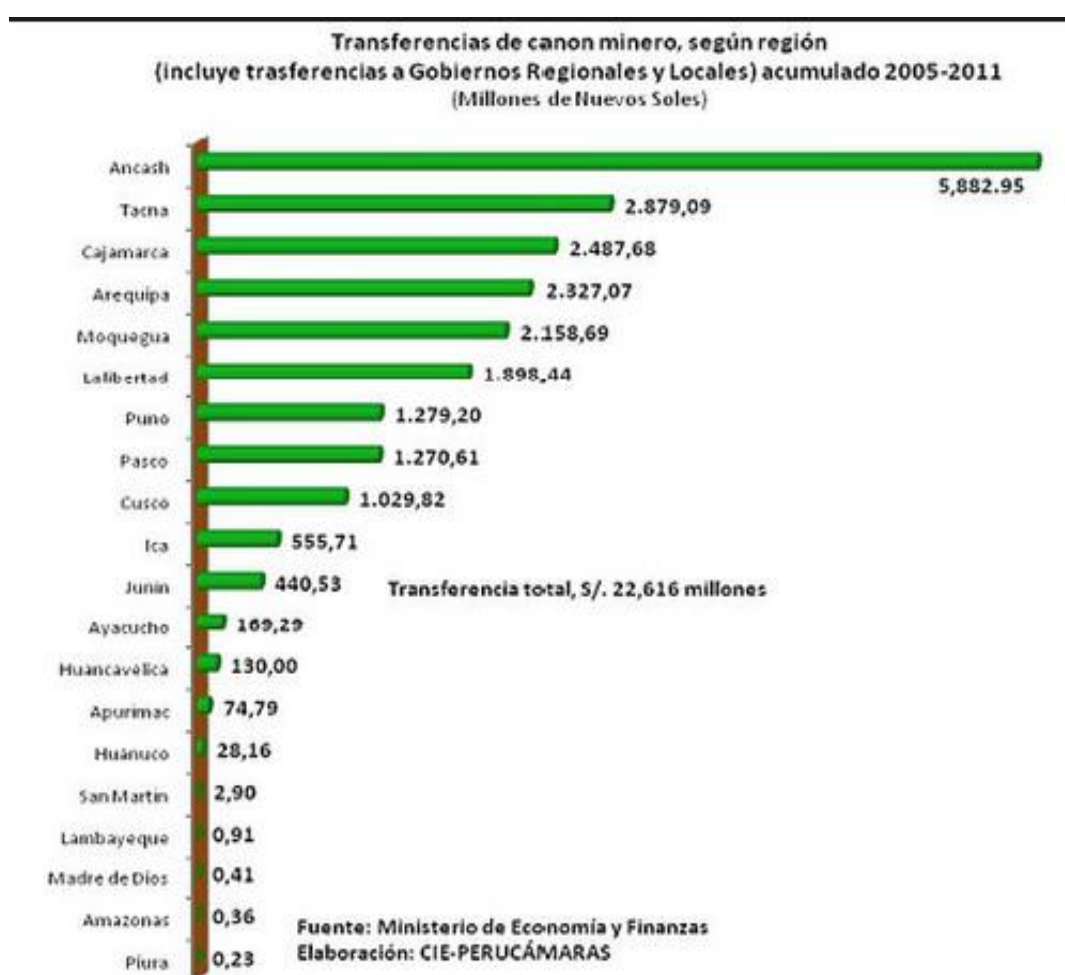
⁷² Es importante destacar que 1 nuevo sol peruano es igual a 0.36 dólares y 0.26 euros.

⁷³ Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Op. cit.

En dicha figura se logra observar la gran subida generada en el 2007 y la bajada posterior por la crisis internacional que influye en los precios de los metales. Sin embargo, la cantidad ha seguido manteniéndose dentro del rango.

Asimismo, la figura 4 nos muestra las transferencias de canon minero por regiones entre 2005 y 2011. Ahí se puede ver que durante todo ese periodo las regiones de Ancash, Tacna, Cajamarca, Arequipa, Moquegua y La Libertad son las que más recursos han recibido del canon minero.

Figura 4: Ingresos recibidos por canon minero a los Gobiernos Regionales del 2005-2011

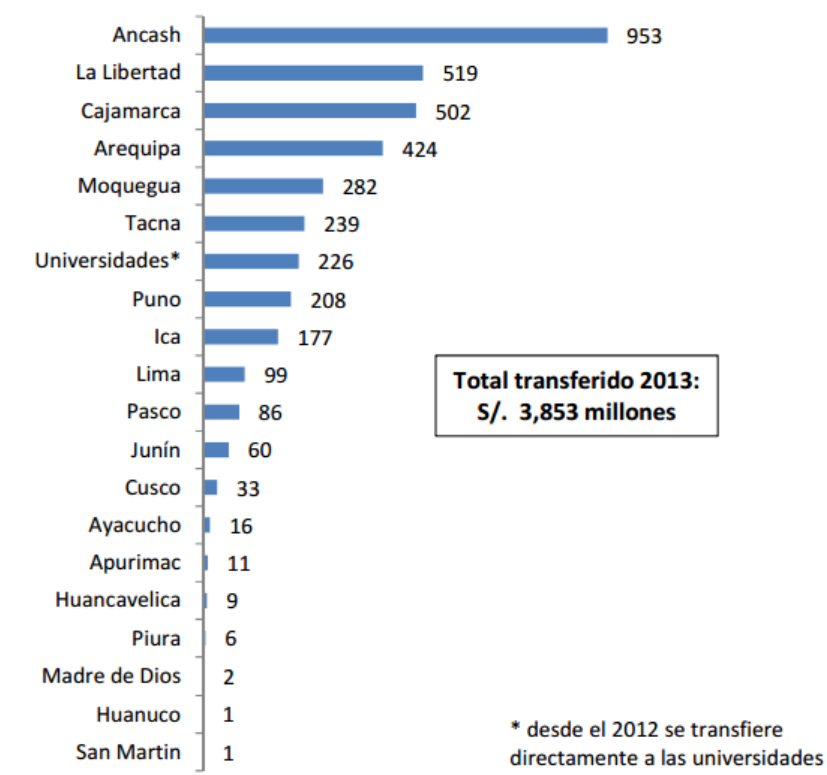


Fuente: MEF⁷⁴

⁷⁴ Gestión, El Diario de Economía y Negocios del Perú (30 de Marzo de 2012). Disponible en: <http://gestion.pe/noticia/1394887/canon-minero-regiones-crecio-328-2011>.

En la figura 5 se puede visualizar que en Julio de 2013 los montos totales distribuidos a los Gobiernos Regionales y Locales son los siguientes (en millones de S/.):

Figura 5: Ingresos recibidos por canon minero a los Gobiernos Regionales en el 2013



Fuente: MEF⁷⁵

Este gráfico muestra como los Gobiernos Regionales de Ancash, La Libertad, Cajamarca, Arequipa, Moquegua y Tacna son los que mayores ingresos han recibido por el canon minero en Julio de 2013. Es decir, los mismos Gobiernos Regionales que en los años anteriores han recibido mayores ingresos provenientes del canon minero.

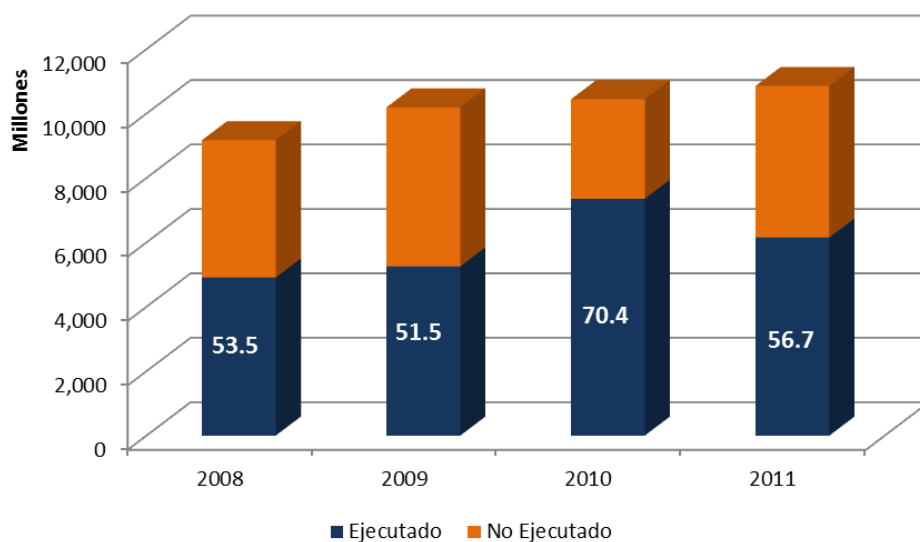
En la figura 6 se muestra la brecha entre el canon distribuido y el ejecutado durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011. Ahí se puede visualizar que la diferencia es casi del 50% a excepción del año 2010 donde llega a ser solo de un 30%. Esto se debe al Plan Estimulo Económico liderado por el Gobierno Nacional para hacer frente a la crisis⁷⁶. Esta situación es paradójica, pues el Perú es un país donde existen muchas

⁷⁵ Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Op. cit.

⁷⁶ Voz Democrática (20 de Junio de 2012). Disponible en:

demandas de bienes y servicios de la población, sobre todo en zonas alejadas de la capital, que casi la mitad del canon no sea utilizado y ello se mantenga a través de los años.

Figura 6: Canon minero ejecutado y no ejecutado por parte de los Gobiernos Regionales y Locales



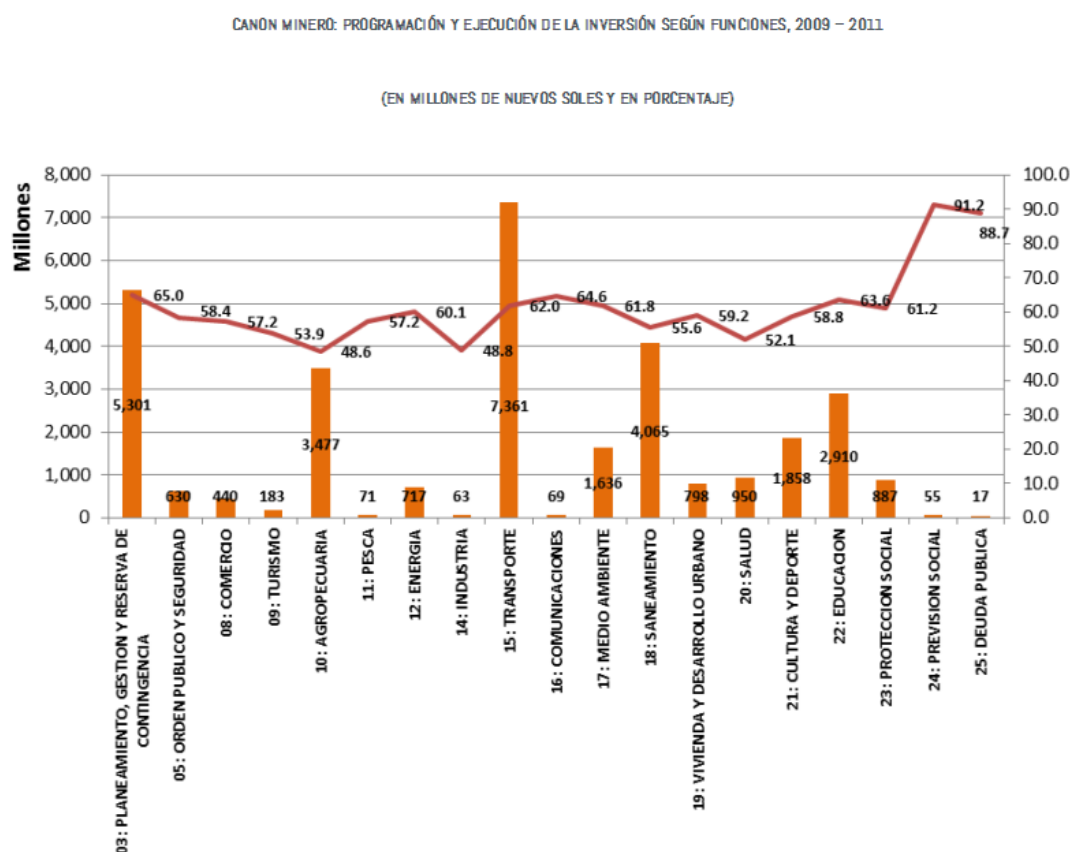
Fuente: MEF⁷⁷

El gráfico anterior muestra como las transferencias por canon ha ido aumentando del 2008 al 2011. Sin embargo, ello no se traduce en una ejecución adecuada por parte de los distintos niveles de Gobierno. En consecuencia, se aprecia que si el canon, a pesar de ser mayor, no es bien ejecutado no implica necesariamente una mejora concreta.

<http://vozdemocratica.wordpress.com/2012/06/20/distribucion-del-canon-minero-a-gobiernos-locales-2008-2011/>

⁷⁷ Ibíd.

Figura 7: Programación y ejecución de la inversión del canon minero según funciones 2009-2011



Fuente: MEF⁷⁸

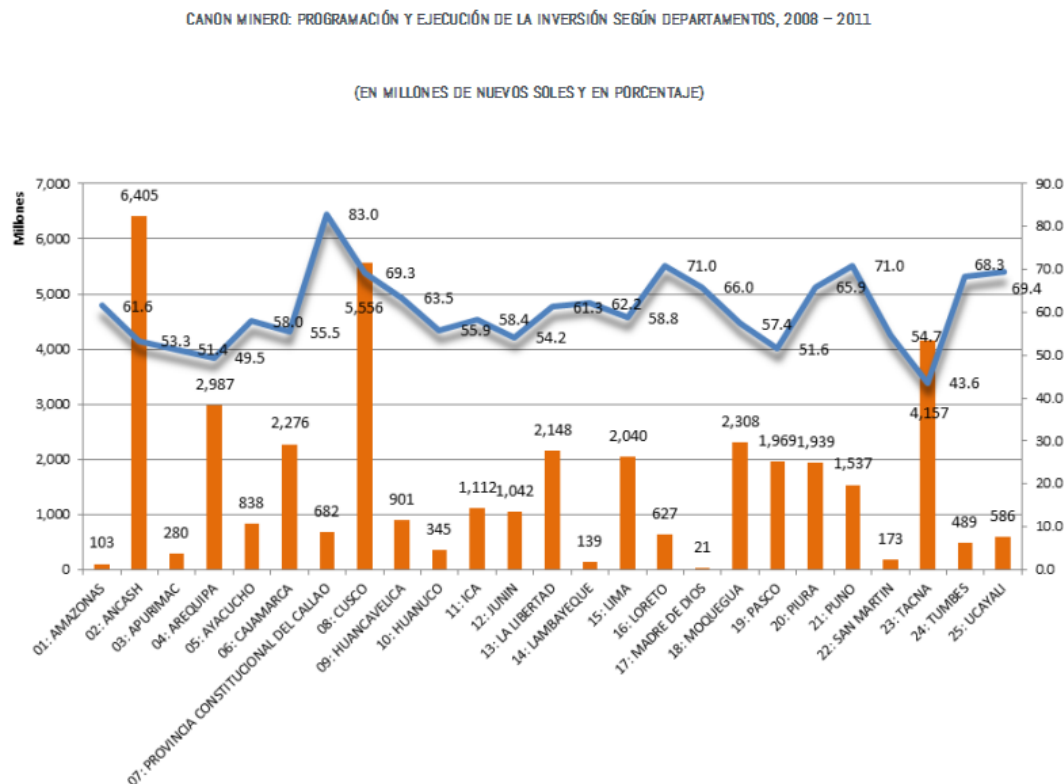
La figura 7 destaca la cantidad que se programó gastar en cada rubro y el verdadero nivel de ejecución que se alcanzó entre el 2009 y 2011. Se puede apreciar que el rubro priorizado fue el sector transporte, donde los proyectos mayormente son vías urbanas y rurales, pistas, veredas, construcción de puentes, mantenimiento de trochas, así como transporte hidroviario y ferroviario. En segundo lugar, se encuentra Planeamiento, Gestión y Reserva de contingencia, es decir los proyectos de fortalecimiento institucional como construcciones de obras municipales. En tercer lugar, tenemos proyectos de saneamiento y en cuarto lugar proyectos agropecuarios que están más vinculados a proyectos de infraestructura de riego.

Sin embargo, el nivel de ejecución de estos cuatro principales rubros muestra que su nivel de ejecución no sobrepasa el 65% aproximadamente. En el caso de proyectos de

⁷⁸ Ibíd.

transporte su nivel de ejecución fue de 62%, mientras que en el rubro de Planeamiento, Gestión y Reserva de contingencia se ejecutó un 65% que se destinó a palacios municipales. En el caso de saneamiento se ejecutó un 55% y para proyectos agropecuarios un 48%.

Figura 8: Programación y ejecución de la inversión según departamento



Fuente: MEF⁷⁹

Por último, la figura 8 muestra la programación y ejecución del canon a nivel departamental del 2008 al 2011. Ahí se destaca a Ancash como el principal departamento en recibir mayor canon con más de S/. 6 400 millones y con un nivel de ejecución promedio del 53%. Después se encuentra Cusco con un total de S/. 5 556 millones, con una ejecución promedio de 69%. También resalta el caso de Tacna y Cajamarca con una ejecución menor al 55%.

⁷⁹ Ibíd.

1.2.2.3. *Percepción sobre la ejecución del canon minero*

Justamente en razón de estas diferencias entre las transferencias del canon y el nivel de ejecución a nivel regional y local es que surgen muchas interrogantes en la búsqueda de una eficiente distribución y utilización de los recursos del canon. Para ello en este acápite se van a presentar tres notas de prensa del año 2011, 2012 y 2013 de importantes y reconocidos diarios de prensa escrita y radial en el Perú donde se podrá ver cuál es la percepción que tienen distintos sectores de la población sobre la brecha existente entre el canon transferido y su nivel de ejecución.

La primera nota es del diario Peru21⁸⁰ de diciembre del 2011, en ella el presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas señala que es de suma urgencia mejorar la calidad del gasto del canon minero en las regiones para reducir los conflictos sociales en el país. Manifiesta que los Gobiernos Regionales y Locales no tienen capacidad de gestión y la población demanda bienes y servicios necesarios para su desarrollo. Por ello, si hay inversión minera en la zona la población espera ver un beneficio directo, de lo contrario, no apoya los proyectos extractivos. Asimismo, el empresario mencionó que la población no está informada de los recursos que se destinan por canon minero a las regiones. Esta última afirmación muestra como respecto a los recursos del canon minero hay poca transparencia y rendición de cuentas, y la ejecución del gasto no se realiza considerando el presupuesto participativo que se trabaja conjuntamente con la población y el plan de desarrollo concertado.

La segunda nota es del diario Gestión⁸¹ de junio del 2012. En esta nota se señala que los Gobiernos Regionales tienen 3,500 millones de dólares provenientes del canon minero y dichos recursos no se están usando para construir hospitales o escuelas, lo que estaría generando mayor conflictividad social en el país. Se resalta que en el 2011 que de las 16 regiones mineras sólo se invirtió en infraestructura el 45% de unos 1,862 millones de dólares.

⁸⁰ Perú 21 (04 de Diciembre de 2011). Disponible en: <http://peru21.pe/2011/12/04/actualidad/se-gastar-mejor-canon-minero-evitar-conflictos-2001775>

⁸¹ Gestión, el Diario de Economía y Negocios del Perú, (14 de Junio de 2012). Disponible en: <http://gestion.pe/2012/06/14/economia/gobierno-regionales-tienen-estancados-us-3500-millones-canon-minero-2005175>

Además, se cita al ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, quien menciona que se debe tratar de lograr un mejor uso de los recursos que se encuentran embalsados en cuentas de bancos y que no se traducen en proyectos que el país necesita. También se cita al ex viceministro de Economía, Carlos Casas quien indica que la gente sabe que ha entrado mucho dinero a su región pero considera que ello no le es útil, y esa percepción es un factor que contribuye a la conflictividad social.

En ese sentido, esta nota también vincula el problema de la ejecución del gasto del canon minero por parte de los Gobiernos Regionales y locales con la conflictividad social. De este modo, la nota observa que de los 250 conflictos sociales identificados por la Defensoría del Pueblo hasta mayo del 2012, la gran mayoría está asociado a protestas socioambientales relacionados con minería. Precisamente se puede apreciar que las regiones con mayores conflictos de este tipo son Ancash, Puno, Cajamarca y Cusco, en donde todas ellas albergan operaciones mineras y se benefician en gran medida del canon minero. Por último, la nota indica que el problema no es la falta de dinero en las regiones sino su deficiente ejecución. Por ejemplo, el documento coloca como ejemplo el proyecto Minas Conga en Cajamarca, esta viene a ser una de las minas más importantes de Latinoamérica. Sin embargo, a nivel del Gobierno Regional en el 2011 sólo se utilizó el 34% del canon transferido a proyectos de inversión, según las cifras del MEF citadas en la nota.

En esa misma línea, la nota también coloca como ejemplo a la región de Tacna donde opera la minera Southern Copper. Ahí se pudo ver que de acuerdo a las cifras del MEF el Gobierno Regional durante el 2011 solo se usó en proyectos de inversión el 28% del canon minero transferido.

Por otro lado, el medio de prensa Radio Programas del Perú (RPP)⁸² indicó en el 2012 que el Perú es el segundo productor mundial de cobre, plata y zinc, y sexto en oro por lo que es necesario seguir impulsando la economía en la industria extractiva. Además, este medio pone énfasis en lo perjudicial que pueden ser los conflictos sociales en el país y el ejemplo de las Minas Conga de oro y cobre que fue temporalmente suspendido por oposición de la población por temor a la contaminación ambiental, donde la empresa estadounidense Newmont planeaba invertir 4.800 millones de

⁸² Radio Programas del Perú (14 de Junio de 2012). Disponible en: [http://www.rpp.com.pe/2012-06-14-regiones-de-peru-malgastan-ingresos-mineros-por-us\\$-3-500-millones-noticia_492235.html](http://www.rpp.com.pe/2012-06-14-regiones-de-peru-malgastan-ingresos-mineros-por-us$-3-500-millones-noticia_492235.html)

dólares. Esta última nota también resalta lo manifestado por Miguel Santillana, investigador principal del Instituto del Perú de la Universidad San Martín de Porres, donde enfatiza que desde el 2001 los Gobiernos Regionales y Locales están obligados a invertir en infraestructura los ingresos del canon minero, y casi siempre hay un mal gasto del canon donde no se ve beneficios a la población, pues cuando se gasta “*casi siempre es fierro y cemento*”. De esta forma, dijo el investigador en esta nota de prensa, que la población tiende a culpar a la empresa de sus problemas y no responsabiliza al Estado por su ineficiencia y su poca presencia.

Finalmente, la última nota de prensa recogida en el presente documento es del medio de prensa RPP⁸³ de septiembre 2013, en la nota se recogen las declaraciones del propio presidente Ollanta Humala en la clausura de la 31 Convención Minera Perumin en Arequipa. En dichas declaraciones el actual presidente señaló que se estaba realizando un mal manejo de los recursos del canon minero y que no solo las mineras son responsables, sino también los Gobiernos Regionales y Locales que utilizaban el canon minero en obras que son “*elefantes blancos inútiles y disparatados*”. Literalmente el medio de prensa recogió las siguientes declaraciones del presidente: “*No es posible que con el canon se hagan elefantes blancos inútiles y disparatados, como poner jacuzzis en espacios públicos o construir grandes complejos deportivos o exagerados palacios municipales en comunidades con mil habitantes en promedio*”. Asimismo, enfatizó que la población debe exigir a las autoridades un buen uso del canon y que estos recursos no queden en cuentas del Banco de la Nación sin utilizar.

⁸³ Radio Programas del Perú (20 de Septiembre de 2013). Disponible en: http://www.rpp.com.pe/2013-09-20-humala-alcaldes-usan-canon-minero-para-hacer-elefantes-blancos-noticia_632856.html

2. Conflictos socioambientales y su relación con la minería en el Perú

En este acápite se analiza los conflictos sociales en el Perú en los últimos años (2009, 2010, 2011, 2012 y 2013). La principal fuente de información son los Informes de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo⁸⁴. Los meses de cada año se han seleccionado de forma aleatoria. Cabe resaltar que la Defensoría agrupa los conflictos sociales de acuerdo a distintos tipos de conflictos en razón de su rubro. En la figura 9 se puede visualizar un cuadro con cada uno de los tipos y la dinámica que gira en torno a los mismos de acuerdo a la Defensoría del Pueblo.

Figura 9: Tipos de conflictos sociales de acuerdo a la Defensoría del Pueblo

TIPO	DINÁMICA GIRA EN TORNO:
Asuntos de Gobierno Local	A la gestión pública de los municipios provinciales y distritales.
Asuntos de Gobierno Regional	A la gestión pública de los gobiernos regionales
Asuntos de Gobierno Nacional	A la gestión pública del gobierno central.
Socioambiental	Al control, uso y/o acceso al ambiente y sus recursos. Están presentes también componentes políticos, económicos, sociales y culturales.
Por demarcación territorial	Al establecimiento de límites entre circunscripciones territoriales.
Por cultivo ilegal de hoja de coca	A la siembra ilegal de coca, la presencia del narcotráfico y las acciones del Estado.
Laborales	A los derechos laborales
Comunales	Al acceso a recursos naturales, propiedad y límites territoriales entre comunidades.
Electorales	A la no aceptación de resultados electorales y el rechazo a las autoridades electas.
Otros asuntos	A reclamos estudiantiles, universitarios, etc.

*Fuente: Defensoría del Pueblo*⁸⁵

A efectos de este trabajo este capítulo se divide en dos partes. En la primera se destaca lo siguiente: (i) la cantidad de conflictos sociales latentes y activos durante cada periodo de tiempo; (ii) los departamentos con mayores conflictos sociales; (iii) la cantidad de conflictos sociales de acuerdo a su tipo; (iv) cuáles dentro de ellos corresponden al tipo socioambiental; y (v) la frecuencia en la evolución de los conflictos sociales.

⁸⁴ Portal web de la Defensoría del Pueblo – Reportes mensuales de Conflictos Sociales. Disponible en: <http://www.defensoria.gob.pe/temas.php?des=3#r>

⁸⁵ Ibíd.

En la segunda parte se añadirán gráficos donde se ha seleccionado a los principales departamentos que a lo largo del tiempo han recibido mayores transferencias del canon minero como Ancash, Cajamarca, La Libertad, Arequipa, Tacna y Moquegua. Ello con el objeto de analizar: (i) la cantidad de conflictos sociales que representan; (ii) los conflictos socioambientales que han tenido; y (iii) entre de los conflictos socioambientales activos cuáles de ellos tienen relación con minería y medio ambiente.

2.1. Data de la Defensoría del Pueblo sobre conflictos sociales

2.1.1. Reporte N° 60 Febrero 2009 de la Defensoría del Pueblo⁸⁶

El primer reporte que se analizará es el N° 60 de febrero 2009. Dicho informe resalta que hasta esa fecha se han identificado 218 conflictos sociales, dentro de ellos 157 se encuentran activos y 61 en estado latente. Es decir, 72% y 28% respectivamente. Asimismo, los principales departamentos donde se han ubicado mayores conflictos sociales para el mes de febrero de 2009 han sido Cajamarca, Lima, Ayacucho, Cusco, y Puno.

En la figura 10 se muestra una tabla del reporte de la Defensoría del Pueblo donde se puede visualizar la cantidad de conflictos activos y latentes por departamento.

⁸⁶ Defensoría del Pueblo – Dirección de la Unidad de Conflictos Sociales, ‘Reporte de Conflictos Sociales N° 60’ (Febrero 2009).

Disponible en:

http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2009/conflictos_reporte_60_febrero2009-1.pdf

Figura 10: Tabla de conflictos sociales por departamento – Febrero 2009

Departamento	Activos	Latentes	TOTAL
Amazonas	2	0	2
Ancash	7	3	10
Apurímac	4	0	4
Arequipa	3	3	6
Arequipa/Cusco	1	0	1
Arequipa/Puno	1	0	1
Arequipa/Moquegua	0	1	1
Ayacucho	8	8	16
Ayacucho/Arequipa	1	0	1
Ayacucho/Huancavelica	1	0	1
Cajamarca	14	4	18
Callao	1	0	1
Cusco	12	3	15
Cusco/Junín	1	0	1
Huancavelica	5	5	10
Huánuco	3	1	4
Ica	1	0	1
Ica/Lima	1	0	1
Junín	7	4	11
La Libertad	5	1	6
Lambayeque	3	2	5
Lima	11	6	17
Loreto	8	1	9
Madre de Dios	3	0	3
Moquegua	4	1	5
Moquegua/Puno	0	1	1
Moquegua/Tacna	1	0	1
Nacional	17	1	18
Pasco	4	4	8
Piura	11	0	11
Puno	8	6	14
San Martín	4	4	8
Tacna	5	2	7
Total	157	61	218

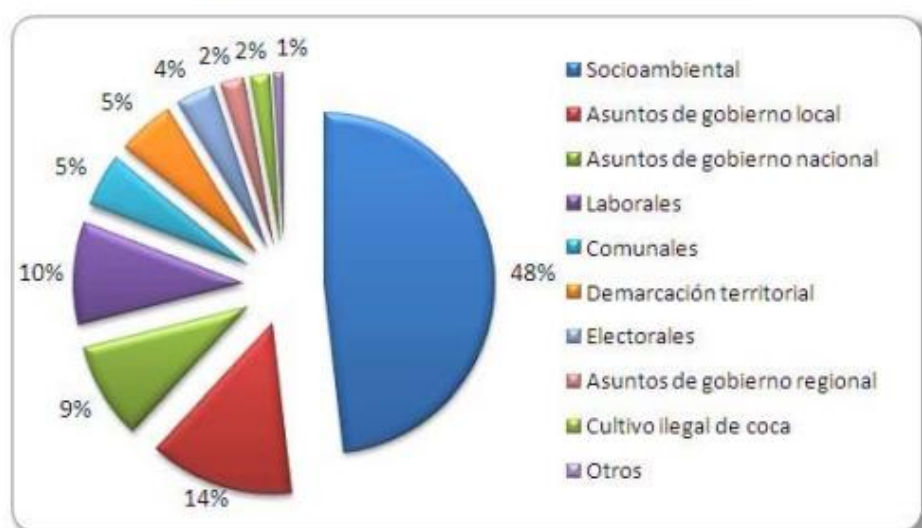
Fuente: Defensoría del Pueblo – Reporte N° 60 febrero 2009

La figura 11 presenta un cuadro del reporte de la Defensoría del Pueblo donde se puede visualizar cada tipo de conflicto social, así como la cantidad y porcentaje de ellos respecto al total.

Figura 11: Conflictos según tipo – Febrero 2009

Conflictos según el tipo – Febrero 2009

Tipo	N° de casos
Socioambiental	105
Asuntos de gobierno local	30
Asuntos de gobierno nacional	20
Laborales	21
Comunales	11
Demarcación territorial	12
Electorales	8
Asuntos de gobierno regional	5
Cultivo ilegal de coca	4
Otros	2
Total	218



Fuente: Defensoría del Pueblo – Reporte N° 60 febrero 2009

Conforme al tipo de los conflictos sociales, se identifican los conflictos socioambientales (tanto activos como latentes) que representan el 48% del total de conflictos registrados este mes. En segundo lugar se encuentran los conflictos por asuntos de Gobierno Local con el 14% y en tercer lugar los conflictos laborales con el 10%.

2.1.2. Reporte N° 74 Abril 2010 de la Defensoría del Pueblo⁸⁷

El segundo reporte a analizar es el N° 74 de abril de 2010. Dicho informe resalta que hasta esa fecha se han identificado 260 conflictos sociales, dentro de ellos 179 se encuentran activos y 81 en estado latente. Es decir, 69% y 31% respectivamente. Asimismo, los principales departamentos donde se han ubicado mayores conflictos sociales en el mes de abril de 2010 han sido Cusco, Puno, Lima, Junín y Piura.

La figura 12 muestra una tabla del reporte de la Defensoría del Pueblo donde se puede visualizar la cantidad de conflictos activos y latentes por departamento.

⁸⁷ Defensoría del Pueblo – Adjuntía Para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, ‘Reporte de Conflictos Sociales N° 74’ (Abril 2010).

Disponible en:

<http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2010/Reporte-74.pdf>

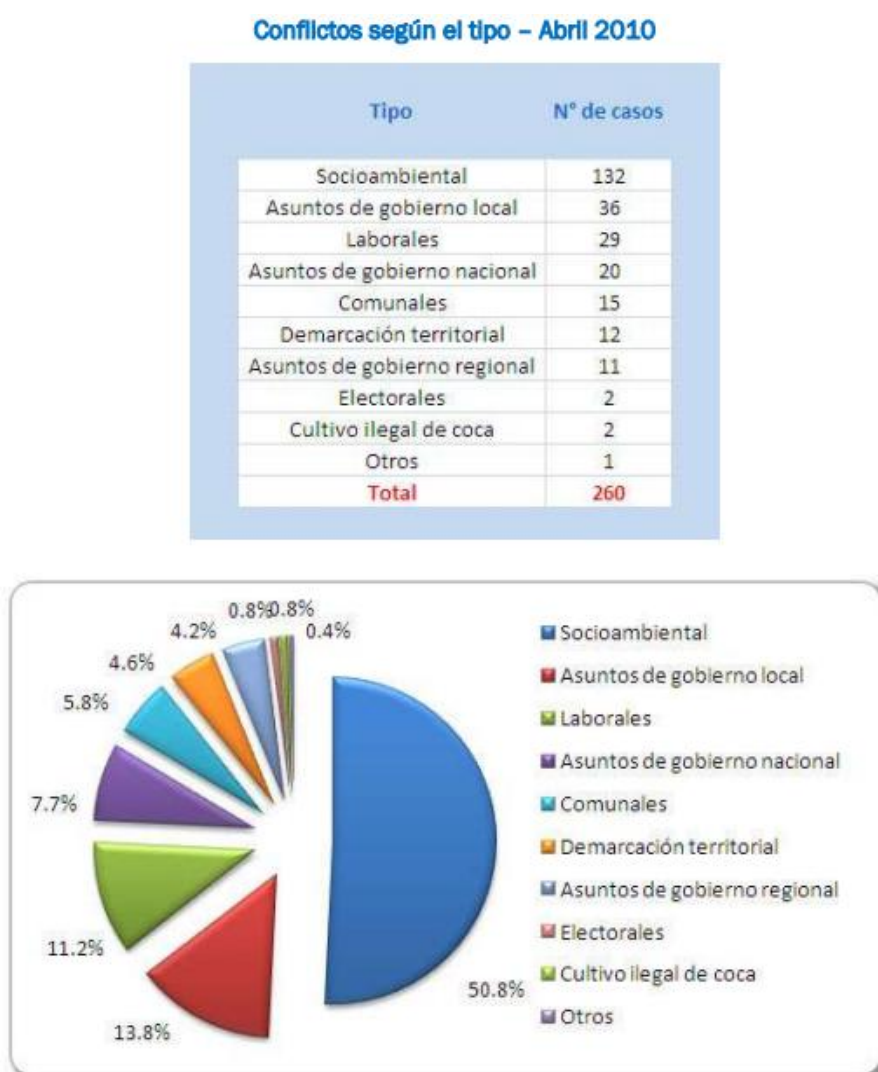
Figura 12: Tabla de los conflictos sociales por departamento – Abril 2010

Departamento	Activos	Latentes	TOTAL
Amazonas	2	0	2
Ancash	14	3	17
Apurímac	7	3	10
Apurímac / Cusco	1	0	1
Arequipa	5	2	7
Arequipa/Cusco	2	0	2
Arequipa/Puno	0	1	1
Ayacucho	9	3	12
Ayacucho/Arequipa	0	1	1
Ayacucho/Huancavelica	1	0	1
Cajamarca	14	3	17
Callao	0	2	2
Cusco	18	5	21
Cusco/Junín	0	1	1
Cusco / Madre de Dios	1	0	1
Cusco / Madre de Dios / Puno	1	0	1
Huancavelica	3	5	8
Huánuco	1	1	2
Ica	4	0	4
Ica/Lima	0	1	1
Junín	10	8	18
La Libertad	7	2	9
Lambayeque	4	1	5
Lima	12	8	20
Loreto	6	3	9
Madre de Dios	2	1	3
Moquegua	3	4	7
Moquegua/Puno	1	0	1
Moquegua/Tacna	0	1	1
Nacional	15	2	17
Pasco	4	2	6
Piura	12	6	18
Puno	15	5	20
San Martín	2	4	6
Tacna	4	2	6
Tumbes	0	1	1
Ucayali	1	0	1
Total	179	81	260

Fuente: Defensoría del Pueblo – Reporte N° 74 Abril 2010

La figura 13 presenta un cuadro del reporte de la Defensoría del Pueblo donde se puede visualizar cada tipo de conflicto social, así como la cantidad y porcentaje de ellos respecto al total.

Figura 13: Conflictos según tipo- Abril 2010



Fuente: Defensoría del Pueblo – Reporte N° 74 Abril 2010

Conforme al tipo de los conflictos sociales, se identifican los conflictos socioambientales (tanto activos como latentes) que representan el 50.8% del total de conflictos registrados este mes. En segundo lugar se encuentran los conflictos por asuntos de Gobierno Local con el 13.8% y en tercer lugar los conflictos laborales con el 11.2%.

2.1.3. Reporte N° 89 Julio 2011 de la Defensoría del Pueblo⁸⁸

El tercer reporte a analizar es el N° 89 de julio de 2011. Dicho informe resalta que hasta esa fecha se han identificado 214 conflictos sociales, dentro de ellos 135 se encuentran activos y 79 en estado latente. Es decir, 63% y 37% respectivamente. Asimismo, los principales departamentos donde se han ubicado mayores conflictos sociales en el mes de julio de 2011 han sido Puno, Cajamarca y Ancash. En el siguiente la figura 14 se presenta una tabla de la Defensoría del Pueblo donde se puede visualizar la cantidad de conflictos activos y latentes por departamento.

⁸⁸ Defensoría del Pueblo – Adjuntía Para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, ‘Reporte de Conflictos Sociales N° 89’ (Julio 2011).

Disponible en:

<http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2011/Reporte-89.pdf>

Figura 14: Tabla de conflictos sociales por departamento – Julio 2011

Departamento	Activos	Latentes	TOTAL
Amazonas	3	0	3
Amazonas / San Martín	1	0	1
Ancash	13	4	17
Ancash / Huánuco	1	0	1
Apurímac	9	0	9
Arequipa	1	4	5
Arequipa / Cusco	2	0	2
Arequipa / Moquegua	1	0	1
Ayacucho	7	7	14
Ayacucho / Huancavelica	0	1	1
Ayacucho / Ica	1	0	1
Cajamarca	13	5	18
Cusco	10	3	13
Cusco / Madre de Dios	0	1	1
Cusco / Madre de Dios / Puno	1	0	1
Huancavelica	5	2	7
Huánuco	1	0	1
Ica	1	2	3
Junín	9	3	12
La Libertad	1	4	5
Lambayeque	0	1	1
Lima	6	8	14
Loreto	6	3	9
Loreto / San Martín	1	0	1
Madre de Dios	1	3	4
Moquegua	2	1	3
Moquegua / Puno	1	0	1
Moquegua / Tacna	1	1	2
Nacional	8	5	13
Pasco	3	1	4
Piura	6	6	12
Puno	12	10	22
San Martín	2	1	3
Tacna	4	2	6
Tumbes	2	1	3
TOTAL	135	79	214

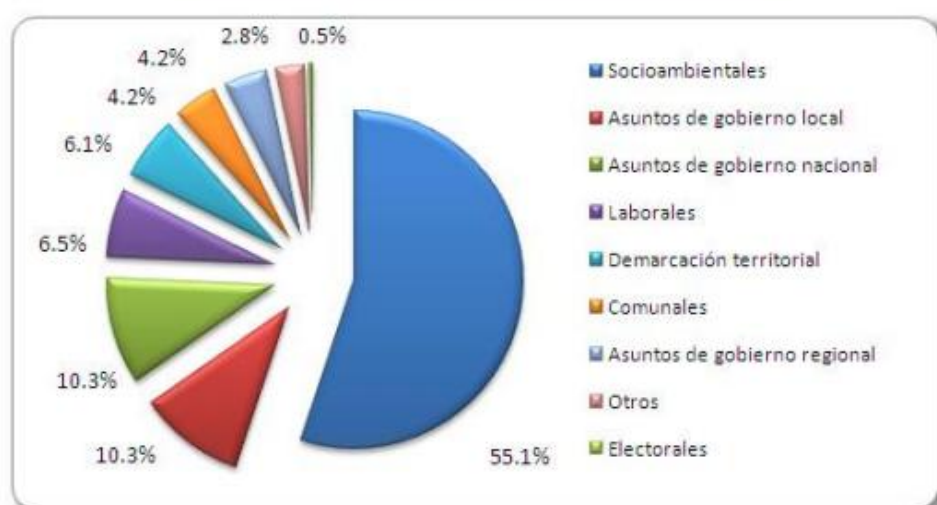
Fuente: Defensoría del Pueblo – Reporte N° 89 Julio 2011

La figura 15 presenta un cuadro del reporte de la Defensoría del Pueblo donde se puede visualizar cada tipo de conflicto social, así como la cantidad y porcentaje de ellos respecto al total.

Figura 15: Conflictos según tipo – Julio 2011

Conflictos según el tipo – Julio 2011

Tipo	Nº de casos
Socioambientales	118
Asuntos de gobierno local	22
Asuntos de gobierno nacional	22
Laborales	14
Demarcación territorial	13
Comunales	9
Asuntos de gobierno regional	9
Otros	6
Electorales	1
Total	214



Fuente: Defensoría del Pueblo – Reporte N° 89 Julio 2011

Conforme al tipo de los conflictos sociales, se identifican los conflictos socioambientales (tanto activos como latentes) que representan el 55.1% del total de conflictos registrados este mes. En segundo lugar se encuentran los conflictos por asuntos de Gobierno Local y del Gobierno Nacional con el 10.3% ambos.

2.1.4. Reporte N° 103 Septiembre 2012 de la Defensoría del Pueblo⁸⁹

El cuarto reporte a analizar es el N° 103 de septiembre de 2012. Dicho informe resalta que hasta esa fecha se han identificado 238 conflictos sociales. Entre ellos 167 se encuentran activos y 71 en estado latente. Es decir, 70.2% y 29.8% respectivamente. Asimismo, los principales departamentos donde se han ubicado mayores conflictos sociales en el mes de septiembre de 2012 han sido Ancash, Puno, Lima, Apurímac, Ayacucho, Cusco y Cajamarca.

En la figura 16 se muestra una tabla del reporte de la Defensoría del Pueblo donde se puede visualizar la cantidad de conflictos activos y latentes por departamento.

Figura 16: Tabla de conflictos sociales por departamento- Septiembre 2012

Departamento	Activos	Latentes	TOTAL
Amazonas	2	1	3
Ancash	26	6	32
Apurímac	15	2	17
Arequipa	2	1	3
Ayacucho	9	4	13
Cajamarca	10	3	13
Cusco	7	6	13
Huancavelica	1	2	3
Huánuco	2	0	2
Ica	1	2	3
Junín	8	4	12
La Libertad	4	0	4
Lambayeque	2	1	3
Lima Metropolitana	1	2	3
Lima Provincias	9	5	14
Loreto	11	2	13
Madre de Dios	1	2	3
Moquegua	3	0	3
Pasco	2	2	4
Piura	10	3	13
Puno	12	10	22
San Martín	3	1	4
Tacna	4	2	6
Tumbes	4	0	4
Ucayali	1	0	1
TOTAL	150	61	211

Fuente: Defensoría del Pueblo – Reporte N° 103 Septiembre 2012

⁸⁹ Defensoría del Pueblo – Adjuntía Para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, 'Reporte de Conflictos Sociales N° 103' (Septiembre 2012).

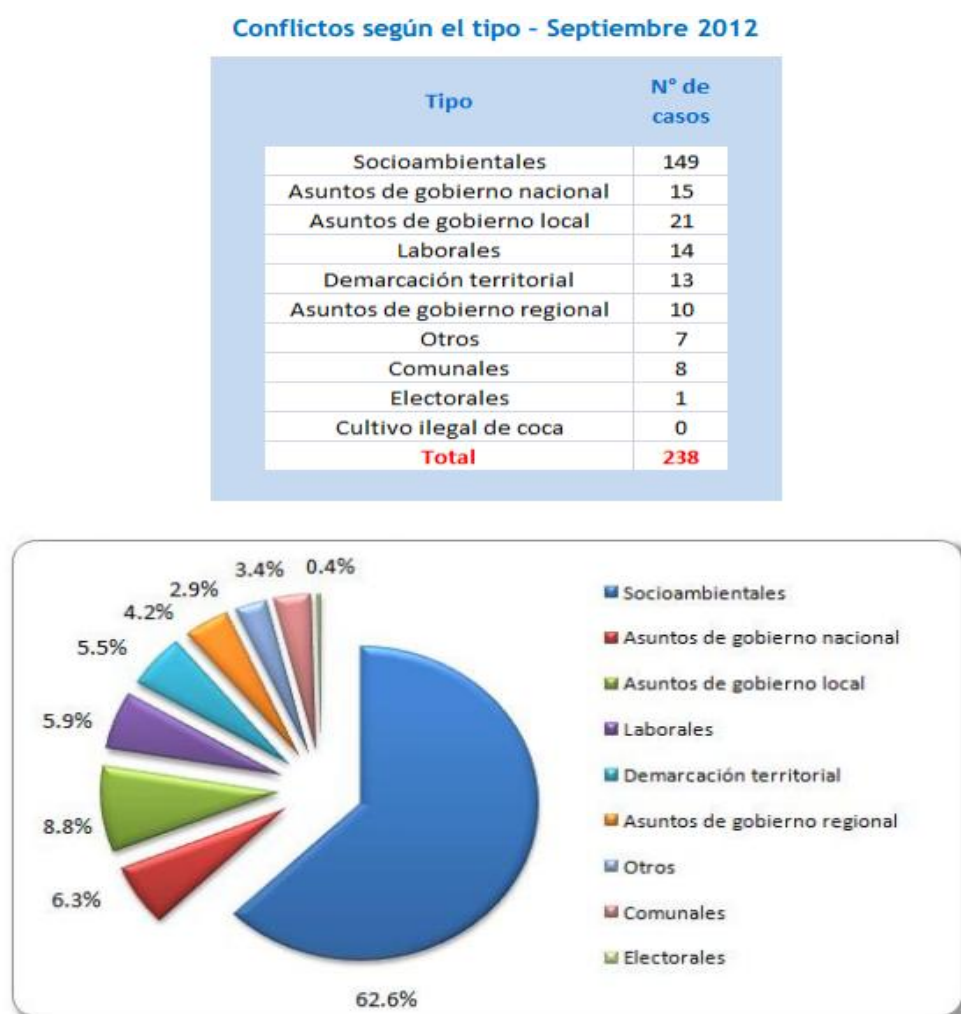
Disponible en:

<http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2012/Reporte-Mensual-de-Conflictos--Sociales-N-103----Sept-2012.pdf>

Son 238 conflictos sociales porque entre los 211 mencionados en el cuadro hay 27 que corresponden simultáneamente a dos o más Departamentos.

La figura 17 presenta un cuadro del reporte de la Defensoría del Pueblo donde se puede visualizar cada tipo de conflicto social, así como la cantidad y porcentaje de ellos respecto al total.

Figura 17: Conflictos según tipo –Septiembre 2012



Fuente: Defensoría del Pueblo – Reporte N° 103 Septiembre 2012

Conforme al tipo de los conflictos sociales, se identifican los conflictos socioambientales (tanto activos como latentes) que representan el 62.6% del total de conflictos registrados este mes. En segundo lugar se encuentran los conflictos por

asuntos de Gobierno Local con el 8.8% y en tercer lugar los conflictos por asuntos de Gobierno Nacional con el 6.3%.

2.1.5. Reporte N° 117 Noviembre 2013 de la Defensoría del Pueblo⁹⁰

Finalmente, el quinto reporte a analizar es el N° 117 de noviembre de 2013. Dicho informe resalta que hasta esa fecha se han identificado 221 conflictos sociales. Entre ellos 174 se encuentran activos y 47 en estado latente. Es decir, 78.7% y 21.3% respectivamente. Asimismo, los principales departamentos donde se han ubicado mayores conflictos sociales para el mes de noviembre de 2013 han sido Ancash, Apurímac, Puno, Piura y Cajamarca.

En la figura 18 se presenta una tabla del reporte de la Defensoría del Pueblo donde se puede visualizar la cantidad de conflictos activos y latentes por departamento.

Figura 18: Tabla de conflictos sociales por departamento- Noviembre 2013

Departamento	Activos	Latentes	TOTAL
Amazonas	1	2	3
Ancash	21	9	30
Apurímac	22	1	23
Arequipa	5	3	8
Ayacucho	11	1	12
Cajamarca	10	3	13
Cusco	10	0	10
Huancavelica	1	0	1
Huánuco	1	0	1
Ica	3	0	3
Junín	6	7	13
La Libertad	5	0	5
Lambayeque	3	0	3
Lima Metropolitana	1	0	1
Lima Provincias	7	4	11
Loreto	9	3	12
Madre de Dios	1	0	1
Moquegua	2	1	3
Pasco	6	0	6
Piura	11	2	13
Puno	12	6	18
San Martín	2	0	2
Tacna	5	0	5
Tumbes	3	0	3
Ucayali	0	0	0
TOTAL	158	42	200

Fuente: Defensoría del Pueblo – Reporte N° 117 Noviembre 2013

⁹⁰ Defensoría del Pueblo – Adjuntía Para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, ‘Reporte de Conflictos Sociales N° 117’ (Noviembre 2013).

Disponible en:

<http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2013/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N-117-noviembre---2013.pdf>

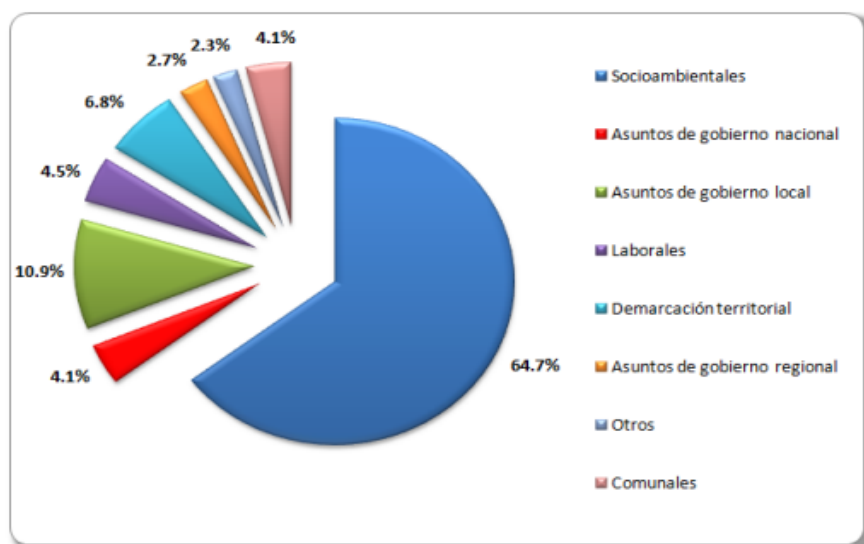
Son 221 conflictos sociales porque entre los 200 mencionados en el cuadro hay 21 que corresponden simultáneamente a dos o más Departamentos.

La figura 19 presenta un cuadro del reporte de la Defensoría del Pueblo donde se puede visualizar cada tipo de conflicto social, así como la cantidad y porcentaje de ellos respecto al total.

Figura 19: Conflictos sociales por tipo – Noviembre 2013

Conflictos según el tipo - noviembre 2013

Tipo	N° de casos
Socioambientales	143
Asuntos de gobierno local	24
Demarcación territorial	15
Laborales	10
Asuntos de gobierno nacional	9
Comunales	9
Asuntos de gobierno regional	6
Otros	5
Total	221



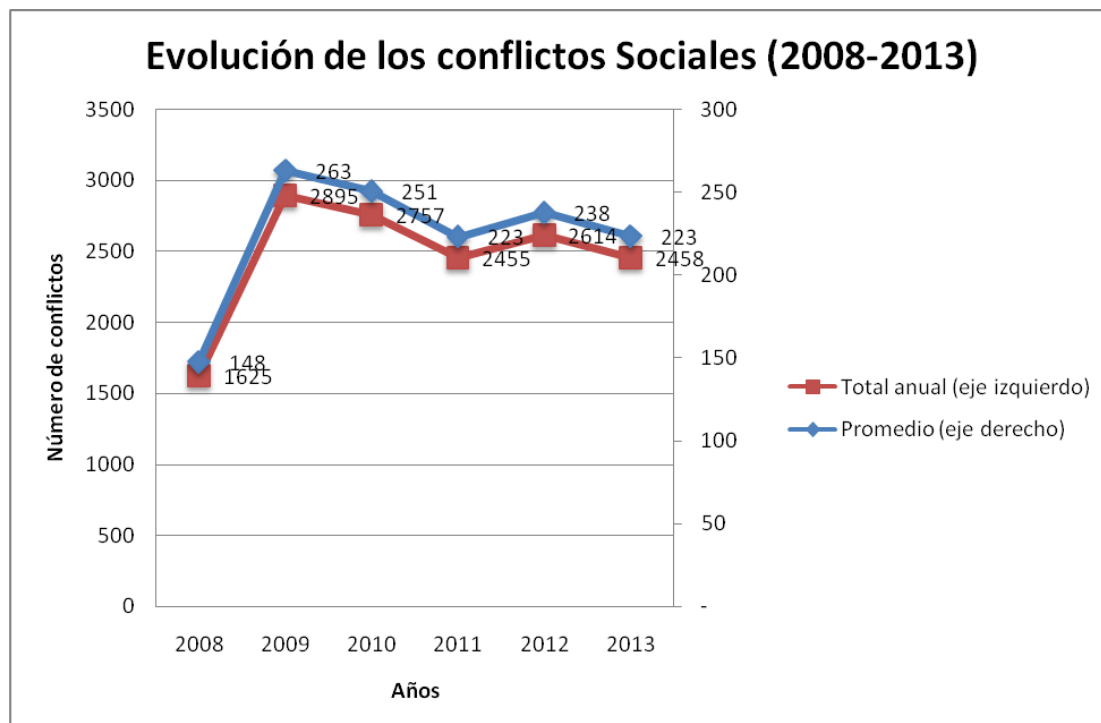
Fuente: Defensoría del Pueblo – Reporte N° 117 Noviembre 2013

Conforme al tipo de los conflictos sociales, se identifican los conflictos socioambientales (tanto activos como latentes) que representan el 64.7% del total de conflictos registrados este mes. En segundo lugar se encuentran los conflictos por asuntos de Gobierno Local con el 10.9% y en tercer lugar los conflictos por demarcación territorial con el 6.8%.

2.1.6. Evolución de los conflictos sociales 2008-2013

De acuerdo a la información recabada en estos cinco informes seleccionados de la Defensoría del Pueblo se ha sistematizado en el grafico 1 la tendencia de la evolución de los conflictos sociales del 2008 al 2013. El detalle de los años se puede ver en el anexo 1 que recoge todos los gráficos de los 5 informes y desarrolla su evolución.

Grafico 1: Evolución de los conflictos sociales – 2008 al 2013



Fuente: Elaboración propia

Como puede verse desde el 2008 los conflictos sociales se han venido incrementando progresivamente. Ese mismo año suben de 100 hasta aproximadamente 200 los conflictos sociales en el Perú. Posteriormente a ello, durante el 2009 continuaron creciendo los conflictos sociales hasta casi llegar a los 300 identificados por la Defensoria Pueblo. A finales del 2009 e inicios del 2010 dicha tendencia comenzó a bajar y a partir de ahí los conflictos sociales se han mantenido, aproximadamente, entre 200 y 250 entre el 2010 y el 2013. Esto es una clara muestra que los conflictos sociales en el Perú son un gran problema que debe de ser atendido pues siguen manteniéndose en el tiempo y representan un número importante de asuntos en los que el Estado debe involucrarse pues generan inestabilidad e inseguridad en el país.

2.2. Relación entre los departamentos con mayor transferencia de canon minero y la proporción de conflictos sociales 2009-2013

Con la información recabada de los cinco reportes de la Defensoría del Pueblo seleccionados (Febrero 2009, Abril 2010, Julio 2011, Septiembre 2012 y Noviembre 2013) y los anexos⁹¹ elaborados, que se adjuntan al presente trabajo, se analiza y grafica la relación existente entre los conflictos sociales y socioambientales en los departamentos con mayor transferencia de canon minero en el Perú (Ancash, Cajamarca, La Libertad, Arequipa, Tacna y Moquegua).

2.2.1. Evolución de los conflictos sociales, los conflictos socioambientales y los conflictos socioambientales relacionados con minería y medio ambiente en los seis departamentos con mayor canon minero

En el grafico 2 se puede visualizar que la mayoría de los conflictos sociales de cada uno de los seis departamentos seleccionados son los conflictos socioambientales y, de estos, la mayor parte tiene relación con minería y medio ambiente.

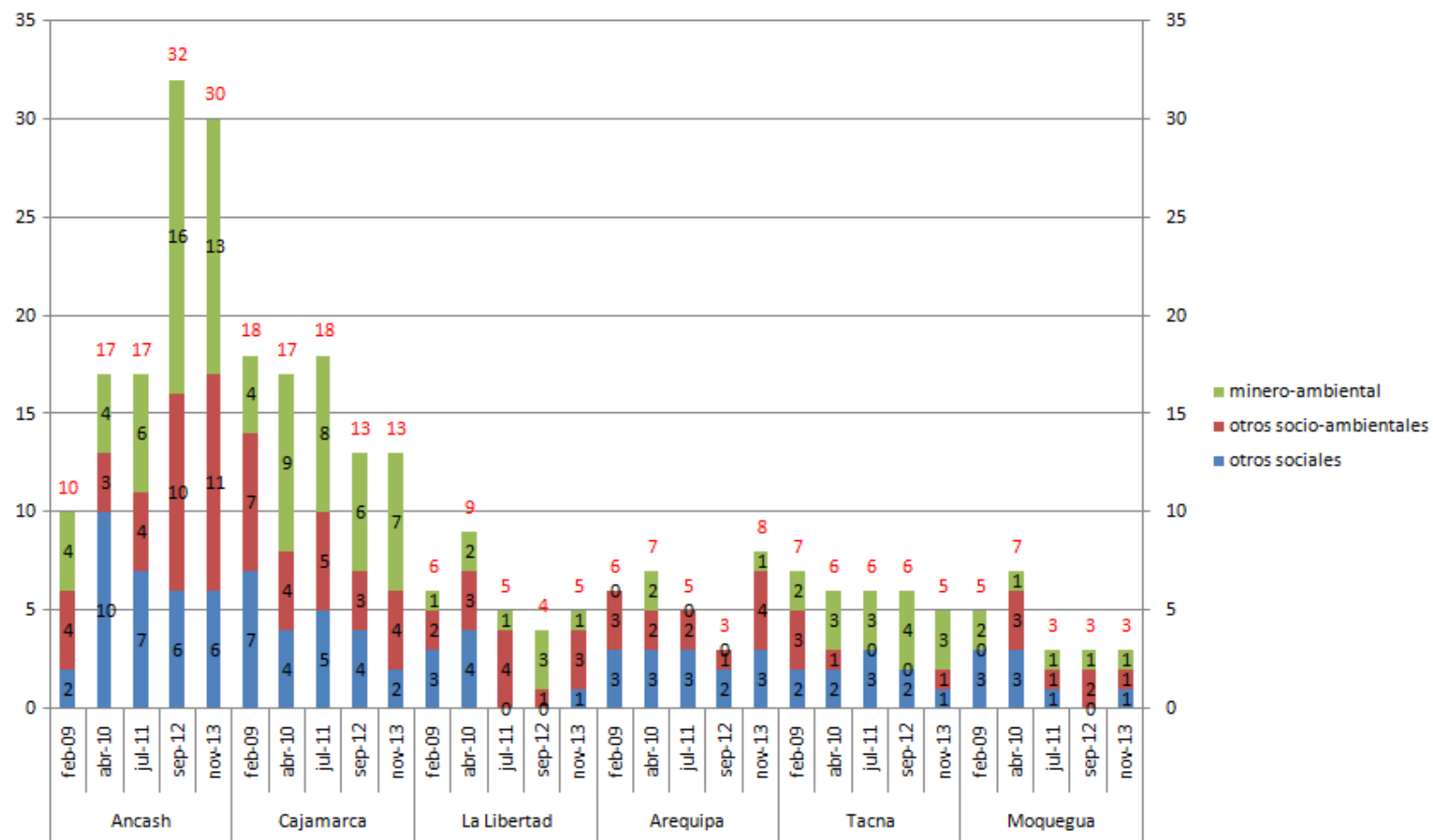
Ancash y Cajamarca resaltan por ser los departamentos con mayores conflictos sociales y socioambientales de los seis. Asimismo, en la mayoría de casos se puede ver que los conflictos se han mantenido constantes en los últimos años. También se puede apreciar que en el caso de Ancash hay un claro incremento en julio del 2011 respecto a abril 2010. En el caso de Cajamarca, que es otro de los departamentos con mayores conflictos socioambientales puede verse que la cantidad de conflictos se ha mantenido constante y es en septiembre 2012 donde hay un decrecimiento de ellos con una tendencia a incrementarse en noviembre 2013. En los otros casos los conflictos socioambientales no sobre pasan los 5 y se mantienen en esa línea, variando en menor medida.

A continuación, en base a la información de los anexos, se expondrá detalladamente la evolución de los conflictos sociales, socioambientales y los relacionados a minería y medio ambiente ocurrida en cada departamento y de acuerdo a cada uno de los reportes de la Defensoría del Pueblo. Ello esta detallado en el gráfico 2.

⁹¹Los anexos 2, 3, 4, 5 y 6 sistematizan los conflictos sociales de los departamentos con mayor transferencia de canon minero en el Perú (Ancash, Cajamarca, La Libertad, Arequipa, Tacna y Moquegua).

Grafico 2: Evolución de los conflictos sociales, socioambientales y minero ambientales por departamento

Conflictos sociales según naturaleza del mismo



Fuente: Elaboracion propia

El Anexo 2 recoge la información del Reporte 60 de la Defensoría del Pueblo de febrero de 2009. En el mismo se puede apreciar que, en el caso de Ancash, de los 10 conflictos sociales, 8 de ellos representan conflictos socioambientales y 5 de estos conflictos socioambientales son conflictos activos. El 80% de estos conflictos activos tienen relación con minería y medio ambiente. En el caso de Cajamarca de los 18 conflictos sociales, 11 de ellos representan conflictos socioambientales y 6 de estos conflictos socioambientales son conflictos activos. El 67% de estos conflictos activos tienen relación con minería y medio ambiente. En La Libertad de los 6 conflictos sociales, 3 de ellos representan conflictos socioambientales y 2 de estos conflictos socioambientales son conflictos activos. El 50% de estos conflictos activos tienen relación con minería y medio ambiente. En Arequipa de los 6 conflictos sociales, 3 de ellos representan conflictos socioambientales y 1 de estos conflictos socioambientales es un conflicto activo. Este conflicto activo no tiene relación con minería y medio ambiente. En Tacna de los 7 conflictos sociales, 5 de ellos representan conflictos socioambientales y 4 de estos conflictos socioambientales son conflictos activos. El 50% de estos conflictos activos tienen relación con minería y medio ambiente. Finalmente, en el caso de Moquegua de los 5 conflictos sociales, 2 de ellos representan conflictos socioambientales activos. El 100% de estos conflictos activos tienen relación con minería y medio ambiente.

El Anexo 3 recoge la información del Reporte 74 de la Defensoría del Pueblo de abril de 2010. En el mismo se puede apreciar que, en el caso de Ancash, de los 17 conflictos sociales, 7 de ellos representan conflictos socioambientales y 6 de estos conflictos socioambientales son conflictos activos. El 67% de estos conflictos activos tienen relación con minería y medio ambiente. En el caso de Cajamarca de los 17 conflictos sociales, 13 de ellos representan conflictos socioambientales y 6 de estos conflictos socioambientales son conflictos activos. El 82% de estos conflictos activos tienen relación con minería y medio ambiente. En La Libertad de los 9 conflictos sociales, 5 de ellos representan conflictos socioambientales y 4 de estos conflictos socioambientales son conflictos activos. El 50% de estos conflictos activos tienen relación con minería y medio ambiente. En Arequipa de los 7 conflictos sociales, 4 de ellos representan conflictos socioambientales y 3 de estos conflictos socioambientales es un conflicto activo. El 67% de estos conflictos activos tienen relación con minería

y medio ambiente. En Tacna de los 6 conflictos sociales, 4 de ellos representan conflictos socioambientales y 3 de estos conflictos socioambientales son conflictos activos. El 100% de estos conflictos activos tienen relación con minería y medio ambiente. Finalmente, en el caso de Moquegua de los 7 conflictos sociales, 4 de ellos representan conflictos socioambientales y 2 de estos conflictos socioambientales son conflictos activos. El 50% de estos conflictos activos tienen relación con minería y medio ambiente.

El Anexo 4 recoge la información del Reporte 89 de la Defensoría del Pueblo de julio de 2011. En el mismo se puede apreciar que, en el caso de Ancash, de los 17 conflictos sociales, 10 de ellos representan conflictos socioambientales y 9 de estos conflictos socioambientales son conflictos activos. El 67% de estos conflictos activos tienen relación con minería y medio ambiente. En el caso de Cajamarca de los 18 conflictos sociales, 13 de ellos representan conflictos socioambientales y 11 de estos conflictos socioambientales son conflictos activos. El 73% de estos conflictos activos tienen relación con minería y medio ambiente. En La Libertad de los 5 conflictos sociales, los 5 representan conflictos socioambientales activos. El 100% de estos conflictos activos tienen relación con minería y medio ambiente. En Arequipa de los 5 conflictos sociales, 2 de ellos representan conflictos socioambientales y pero ninguno de estos conflictos socioambientales es un conflicto activo. Por lo que, no hay conflictos socioambientales activos relacionados con minería y medio ambiente. En Tacna de los 6 conflictos sociales, 3 de ellos representan conflictos socioambientales activos. El 100% de estos conflictos activos tienen relación con minería y medio ambiente. Finalmente, en el caso de Moquegua de los 3 conflictos sociales, 2 de ellos representan conflictos socioambientales activos. El 50% de estos conflictos activos tienen relación con minería y medio ambiente.

El Anexo 5 recoge la información del Reporte 103 de la Defensoría del Pueblo de septiembre de 2012. En el mismo se puede apreciar que, en el caso de Ancash, de los 32 conflictos sociales, 26 de ellos representan conflictos socioambientales y 22 de estos conflictos socioambientales son conflictos activos. El 73% de estos conflictos activos tienen relación con minería y medio ambiente. En el caso de Cajamarca de los 13 conflictos sociales, 9 de ellos representan conflictos socioambientales activos. El 67% de estos conflictos activos tienen relación con minería y medio ambiente. En La

Libertad los 4 conflictos sociales representan los conflictos socioambientales activos. El 75% de estos conflictos activos tienen relación con minería y medio ambiente. En Arequipa de los 3 conflictos sociales, 1 de ellos representa los conflictos socioambientales activos. Este conflicto activo no tiene relación con minería y medio ambiente. En Tacna de los 6 conflictos sociales, 4 de ellos representan conflictos socioambientales activos. El 100% de estos conflictos activos tienen relación con minería y medio ambiente. Finalmente, en el caso de Moquegua los 3 conflictos sociales representan los conflictos socioambientales activos. El 33% de estos conflictos activos tienen relación con minería y medio ambiente.

Finalmente el Anexo 6 recoge la información del Reporte 117 de la Defensoría del Pueblo de noviembre de 2013. En el mismo se puede apreciar que, en el caso de Ancash, de los 30 conflictos sociales, 24 de ellos representan conflictos socioambientales y 19 de estos conflictos socioambientales son conflictos activos. El 68% de estos conflictos activos tienen relación con minería y medio ambiente. En el caso de Cajamarca de los 13 conflictos sociales, 11 de ellos representan conflictos socioambientales y 10 de estos conflictos socioambientales son conflictos activos. El 70% de estos conflictos activos tienen relación con minería y medio ambiente. En La Libertad de los 5 conflictos sociales, 4 de ellos representan conflictos socioambientales activos. El 25% de estos conflictos activos tienen relación con minería y medio ambiente. En Arequipa de los 8 conflictos sociales, 5 de ellos representan conflictos socioambientales y 2 de estos conflictos socioambientales es un conflicto activo. El 50% de estos conflictos activos tienen relación con minería y medio ambiente. En Tacna de los 5 conflictos sociales, 4 de ellos representan conflictos socioambientales activos. El 75% de estos conflictos activos tienen relación con minería y medio ambiente. Finalmente, en el caso de Moquegua de los 3 conflictos sociales, 2 de ellos representan conflictos socioambientales y 1 de estos conflictos socioambientales son conflictos activos. El 100% de estos conflictos activos tienen relación con minería y medio ambiente.

La gran mayoría de conflictos sociales en los seis departamentos con mayor transferencia de canon minero son conflictos socioambientales. Destaca sobre todo el caso de Ancash y Cajamarca. Se puede observar que, a excepción de Arequipa, todos los otros departamentos muestran que sus conflictos socioambientales activos se

encuentran determinados mayormente por casos relacionados a minería y medio ambiente.

3. Economía aplicada a la Evaluación de Impacto Regulatorio

Se ha visto hasta ahora que el Perú es un país minero desde hace muchos siglos atrás y su regulación ha venido consolidándose a través del tiempo. Actualmente existe una regulación respecto a la transferencia de canon minero a los Gobiernos Regionales y Locales. Sin embargo, es claro que hay problemas de gestión eficiente del gasto público de dichos recursos. Asimismo, mediante los reportes de la Defensoría del Pueblo se ha podido destacar que los departamentos con mayor transferencia de canon minero también tienen gran cantidad de conflictos socioambientales y la mayoría de ellos se encuentran relacionados con minería y medio ambiente.

En ese sentido, para el desarrollo de esta parte del trabajo se ha visto necesario realizar una evaluación ex ante de la propuesta de modificación regulatoria del canon minero. Es decir, constatando en el documento que existen claros conflictos socioambientales relacionados con minería y medio ambiente en los departamentos con mayor transferencia de canon minero, y los problemas respecto a la ejecución del gasto en los mismos, ha sido necesario evaluar si los beneficios económicos de la minería deberían ser destinados en parte para el medio ambiente. De esta forma, mediante el RIA se analizará la posibilidad de incluir una variable ambiental en la regulación del canon minero. De esta manera, se podrá evaluar propuestas que logren disminuir la percepción negativa que tiene la población sobre la minería y medio ambiente.

Para el desarrollo de la presente propuesta se va a utilizar, como se ha mencionado, la herramienta del RIA. En primer lugar, se va a desarrollar el marco teórico de dicha herramienta y las consideraciones que se deben tener en cuenta para su aplicación. En segundo lugar, se realizará el RIA de una modificación que incluya una variable ambiental en la regulación del canon minero. En este sentido, se analizará el problema, los objetivos, las opciones disponibles que se presentan, la determinación de cómo se desarrolla el impacto según costes y beneficios, y finalmente se seleccionará la opción más adecuada y justificada para el problema planteado.

3.1. Consideraciones sobre la Evaluación de Impacto Regulatorio

El RIA es una herramienta útil para la evaluación del impacto de normas o políticas públicas. Es parte de los métodos y herramientas que se desarrollan actualmente para mejorar la gestión pública, transparencia, rendición de cuentas y la gobernanza en general. El RIA no solo se basa en el cumplimiento de la normativa y la buena utilización de los recursos económicos, sino que se extiende a la búsqueda de los resultados y los efectos integrales de la norma o política pública que se intenta desarrollar⁹². De manera que el RIA resulta ser un método para producir mejores leyes y al mismo tiempo disminuir los costes que podrían implicar las normas a todos los actores de la sociedad. Es decir, no solo es una herramienta que permite mejorar la calidad de la regulación actual, sino también establecer propuestas eficientes y eficaces en las regulaciones existentes y las futuras⁹³. Es un proceso sistemático donde se identifican los efectos de la regulación y se utilizan métodos como el de análisis coste-beneficio⁹⁴. Asimismo, compara diversas opciones regulatorias para dar solución a un problema dado y cumplir los objetivos.

La regulación es una forma de intervención del Estado en la economía. Por ello resulta importante prever sus efectos en los actores. En ese sentido, el RIA resulta útil para identificar quiénes se verán afectados y cómo será dicha afectación⁹⁵. La propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)⁹⁶ señala que el objetivo de una herramienta como el RIA es ser apoyo a los Gobiernos en la toma de decisiones para que estas sean lo más eficiente posible, dándoles la posibilidad de comparar opciones antes de decidir la regulación pertinente⁹⁷. Asimismo, les permite evaluar y estimar el impacto que tendrá la normativa en términos económicos y en el comportamiento de los agentes. Ello con el objetivo de propiciar escenarios de competitividad y de libre mercado. Es importante resaltar que el RIA se presenta

⁹² Jean-Bernard Auby y Thomas Perroud, *La Evaluación de Impacto Regulatorio* (Instituto Nacional de Administración Pública, 1 edición, 2013) Pág. 16.

⁹³ *Ibíd.* Pág. 16

⁹⁴ Organisation de Coopération et de Développement Économiques, 'Introductory Handbook for Undertaking Regulatory Impact Analysis (RIA)' (2008). Pág. 3.
Disponible en: <http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/44789472.pdf>

⁹⁵ *Ibíd.* Pág. 3.

⁹⁶ Siglas en francés: Organisation de Coopération et de Développement Économiques.

⁹⁷ Auby y Perroud. Op. cit.

como un método para apoyar a los decisores políticos en su tarea normativa; sin embargo no es un sustituto a su juicio político⁹⁸.

Siempre se ha considerado que el Estado tiene la obligación de regular las conductas a través de su función normativa, pero a veces no se considera que ello tiene un costo económico que debe ser evaluado. De esta forma, al regular, es importante tener presente que toda regulación debiera tener mayores beneficios que costes. Esto generaría que los impactos de la regulación sobre la sociedad tengan efectos positivos para el propio crecimiento económico y social⁹⁹.

En ese sentido, el RIA busca que el agente que analiza la normativa pueda valorar los riesgos, implicancias, costes-beneficios, alternativas y mejores resultados al problema y objetivos planteados de forma integral¹⁰⁰. En la evaluación se consideran los factores reales y efectos que generará la regulación en la realidad y no únicamente aspectos jurídicos o el cumplimiento de la normativa. Es por ello que es necesario un análisis interdisciplinario y articulado. Así, se debe tener en cuenta que si bien el RIA puede integrar el análisis coste-beneficio, esto no quiere decir que se trate de lo mismo. El primero integra criterios cuantitativos y cualitativos, y el segundo trata de cuantificar los beneficios y costes en términos monetarios buscando la opción con menores costes y mayores beneficios que logre cumplir el objetivo planteado. En el RIA el análisis coste-beneficio viene a ser una parte importante pero no la única de toda la evaluación que se realiza¹⁰¹.

Existe una vinculación entre el RIA y los principios desarrollados por el Análisis Económico del Derecho dado que en este último se pueden distinguir tres niveles¹⁰². El primero está vinculado al análisis del marco normativo para entender su relación con los efectos económicos de modo tal que las herramientas económicas puedan servir para analizar el entorno legal y su eficiencia. Una segunda parte se basa en predecir cómo las decisiones de los agentes económicos pueden encontrarse influenciadas por el marco normativo, de forma que cualquier cambio en la norma

⁹⁸ Colin Kirkpatrick y David. Parker, *Regulatory Impact Assessment. Towards Better Regulation?* (Cheltenham; Northampton: Edward Elgar, cop. 2007).

⁹⁹ Organisation de Coopération et de Développement Économiques. Op cit. Pág. 6.

¹⁰⁰ Auby y Perroud. Op cit. Pág. 119-135.

¹⁰¹ *Ibíd.*

¹⁰² *Ibíd.* Pág. 97.

podría generar una modificación en el comportamiento del agente económico y con ello el decisor de las políticas puede estimar las consecuencias de la iniciativa legal en términos económicos y sociales. Finalmente, se trata de utilizar el análisis económico para poder identificar la opción que tenga el impacto deseado sobre el objetivo seleccionado determinando cuál es el cambio legal necesario para conseguir el resultado deseado¹⁰³.

La historia y evolución del RIA es bastante reciente, pues nace a partir de las doctrinas desarrolladas en los gobiernos neoliberales de Reagan en Estados Unidos y Thatcher, y posteriormente Blair, en el Reino Unido. Dichos políticos buscaron la mínima intervención del Estado en la economía e integraron la idea de costes y beneficios en el interés público¹⁰⁴. Estas doctrinas fueron evolucionando y se pasó de un objetivo de *menos regulación* a uno de *mejor regulación*. Se busca así que se legisle mejor considerando una serie de principios como proporcionalidad, transparencia, coherencia, determinación de objetivos y rendición de cuentas¹⁰⁵.

En ese sentido, el RIA busca un estándar de calidad para el desarrollo más eficiente y efectivo de la regulación. Por ejemplo la herramienta del RIA viene siendo impulsada por la OCDE en sus programas de *smart regulation*¹⁰⁶. Es así que desde 1995 la OCDE viene trabajando dentro de sus recomendaciones para mejorar la regulación gubernamental con la incorporación del RIA para los países miembros. Asimismo, dichos países han refrendado el informe sobre la reforma normativa donde se recomienda que se incorpore la metodología del RIA a los Gobiernos en el desarrollo de sus normas¹⁰⁷.

Además, dentro de la Unión Europea también se ha utilizado el RIA para desarrollar una mejor regulación que ayude a mejorar la competitividad, el medio ambiente y los servicios sociales. De forma que consiguiendo un buen entorno normativo se pueden alcanzar los objetivos trazados en la Estrategia de Lisboa respecto a la modernización de las economías europeas y la búsqueda de la gobernanza integrando el desarrollo

¹⁰³ Ibíd. Pág. 97.

¹⁰⁴ Ibíd. Pág. 27.

¹⁰⁵ Ibíd. Pág. 40-49.

¹⁰⁶ Portal de la Comisión Europea. Disponible en: http://ec.europa.eu/smart-regulation/index_en.htm

¹⁰⁷ Organisation de Coopération et de Développement Économiques. Op cit. Pág. 3.

sostenible¹⁰⁸. Asimismo, la Comisión Europea ha desarrollado Guías de Impacto Regulatorio¹⁰⁹ para la aplicación del RIA donde establece¹¹⁰: (i) la necesidad de determinar variables como la naturaleza y magnitud del problema; (ii) las partes afectadas e interesadas; (iii) la necesidad de involucramiento de la Unión Europea y los objetivos que deben fijarse ante el problema presentado; (iv) las opciones para conseguir objetivos; (v) el efecto generado de esas opciones comparándolas en términos de eficiencia y eficacia para la resolución del problema; y (vi) el seguimiento y monitoreo futuro.

El RIA puede utilizarse tanto de forma ex ante como ex post¹¹¹. Es decir, puede ayudar a valorar determinada norma o proyecto de norma antes de su aprobación, como también evaluar una norma vigente que necesite ser examinada pues sus impactos pueden ser distintos a los deseados en un inicio. Esto último con la idea de reducir aquellas ineficiencias de la norma que no ayuden a la efectividad de la misma, basándose en los impactos ya producidos y no futuros.

Para el desarrollo del RIA se distinguen tres fases de evaluación¹¹². La primera de ellas consiste en identificar los puntos débiles y vacíos de la regulación, así como seleccionar la información relevante. La segunda fase se trata de valorar las opciones propuestas para los objetivos planteados. Para ello se intenta estimar costes y beneficios. La última fase desarrolla recomendaciones respecto a los resultados obtenidos. La idea es enviar dichas conclusiones para que sean consideradas por los tomadores de decisiones dentro de su proceso de aprobación normativa.

Las tres fases del RIA involucran cinco pasos para su aplicación¹¹³:

- (i) Definición del problema considerando sobre todo los riesgos que implica, su necesidad y oportunidad.
- (ii) Los objetivos que se quieren alcanzar expresándolos de forma transparente tomando en cuenta la participación de la población y los

¹⁰⁸ Auby y Perroud. Op cit. Pág. 262-265.

¹⁰⁹ Comisión Europea, 'Impact Assessment Guidelines' (Diario Oficial de la Unión Europea, Bruselas, 2008, 2009)

¹¹⁰ Auby y Perroud. Op cit. Pág. 170 - 171.

¹¹¹ *Ibíd.* Pág. 21 - 22.

¹¹² *Ibíd.*

¹¹³ *Ibíd.*

indicadores o medios constatables que ayuden al seguimiento y cumplimiento de las metas que se planteen.

- (iii) Las distintas alternativas u opciones para dar solución al problema de la forma más efectiva y eficiente posible, considerando hasta la opción de no hacer nada como una solución válida. Para esta búsqueda de alternativas se consideran los distintos métodos, tradicionales o no, como son la legislación, los acuerdos entre partes, los mecanismos de comando control, medidas de fomento o incentivos, entre otros.
- (iv) La utilización de metodologías como la de análisis coste-beneficio que en términos cuantitativos permite una mejor evaluación de las alternativas.
- (v) La elección de la medida más adecuada y la necesidad de justificar y motivar la decisión tomando en cuenta también los mecanismos de compromisos posteriores que ayuden a la continua revisión de los efectos de la normativa.

Considerar a la población en el desarrollo del RIA, por ejemplo mediante procesos de consulta, ayuda a que los procesos de creación de normas sean transparentes y cuenten con mayor legitimidad¹¹⁴. Para escoger la mejor alternativa, además del análisis coste-beneficio, se pueden utilizar otras herramientas como el desarrollo de cuestionarios que ayudan a obtener información de los actores y del impacto de la medida regulatoria. En este caso deberá tomarse en consideración la representatividad de los grupos consultados, que el cuestionario sea realístico, y que la muestra seleccionada sea significativa. Otro mecanismo complementario puede ser consultar con expertos o desarrollar audiencias públicas. Mientras mayor sea la participación se podrán prever mejor los impactos en los grupos afectados por la regulación¹¹⁵.

Por último, la mejora de la calidad de la regulación en un beneficio de la aplicación del RIA. Esto abarca el poder utilizar una herramienta que ayude a los tomadores de decisiones a prever los impactos de la normativa y elegir la opción más viable para

¹¹⁴ Organisation de Coopération et de Développement Économiques. Op cit. Pág.20.

¹¹⁵ Ibíd. Pág. 19 – 20.

resolver un problema determinado mediante un análisis coste-beneficio de distintas alternativas. El gran reto del RIA es lograr integrar este razonamiento en los tomadores de decisiones de la administración pública¹¹⁶. Por ello los resultados del RIA deben ser públicos y comunicados a tiempo¹¹⁷.

Otro beneficio de la aplicación del RIA es la optimización de los recursos del Estado lo que impulsa el desarrollo económico y social del país¹¹⁸. Toda aplicación de una norma genera cargas en su implementación, de manera que al seleccionar la opción legislativa que genere menores costes y mayores beneficios, se evitan ineficiencias que resulten en un gasto perdido del Estado. Además, si se desarrolla una regulación ineficaz e ineficiente ello puede tener implicancias en las inversiones del país y generar una barrera económica a las transacciones que desalienten el crecimiento económico.

Por último, también están entre los beneficios del RIA la transparencia y legitimidad de las normas que se producen por el Gobierno¹¹⁹. Sin embargo es importante tener en cuenta que el proceso de implementación del RIA es a largo plazo y se debe aplicar progresivamente en los países¹²⁰.

3.2. Evaluación de Impacto Regulatorio

A continuación se desarrollará el RIA para evaluar la posibilidad de incluir una variable ambiental en la regulación del canon minero. Con ello se analizará los impactos de una propuesta normativa que vincule los recursos económicos de la minería con el medio ambiente. El objetivo de esta propuesta es disminuir la percepción de incompatibilidad que tiene la población entorno al medio ambiente y la minería que es base de muchos conflictos socio-ambientales en los principales departamentos del Perú que reciben recursos económicos de la industria en mención.

Para el desarrollo del RIA, se seguirán los pasos planteados para su aplicación: (i) se definirá el problema; (ii) se concretarán los objetivos que se pretenden alcanzar; (iii) se desarrollarán las opciones disponibles; (iv) se determinará el impacto de cada una

¹¹⁶ Ibíd. Pág. 23.

¹¹⁷ Ibíd. Pág. 22.

¹¹⁸ Ibíd. Pág. 4.

¹¹⁹ Auby y Perroud. Op cit. Pág. 262.

¹²⁰ Organisation de Coopération et de Développement Économiques. Op cit. Pág. 24.

de las opciones según sus costes y beneficios; y (v) se realizará la selección de la opción más adecuada y se desarrollará la justificación de la misma.

3.2.1. Definición del problema

Como se ha mencionado el RIA puede ser una herramienta muy útil para que los tomadores de decisiones elijan la mejor alternativa regulatoria. En ese sentido, resulta pertinente preguntarse ¿cuál es el problema a ser resuelto? Después de haber identificado el problema debe medirse la magnitud de la política o norma considerando criterios como: ¿Que grupos en la sociedad se están viendo afectados? ¿Cuál es la magnitud de cada grupo? ¿Cuál es la naturaleza del impacto de cada grupo? ¿Qué tan grandes son los impactos en los grupos? ¿Cuánto duraran los efectos en un largo plazo para estos grupos? ¹²¹.

Antes de analizar el problema del presente trabajo, resulta oportuno mencionar que para el Proyecto de la Ley de Canon intenta incluir un ACB en los siguientes términos¹²²:

“El Proyecto propuesto no constituye iniciativa de gasto, ni la creación de nuevos tributos, lo que se pretende con el presente es aprobar una norma marco que regule el derecho de canon, establecido en los artículos 66°, 77° y 193° de la Constitución Política, es decir lo que se pretende es regular el derecho otorgado a favor de los Gobierno Regionales y Gobiernos Locales, lo cual coadyuvará a la descentralización de nuestro país, lo que también es un mandato constitucional, establecido en el artículo 188° de la Constitución. Así mismo se beneficiará a los pobladores de zonas donde se efectúan o efectuarán explotación de recursos naturales, los cuales hasta la fecha son olvidados, pese a que los recursos naturales de su zona dan ingresos considerables al Gobierno Central lo que no se refleja a dichas zonas.”

Como se puede apreciar realmente no se lleva a cabo un verdadero análisis coste-beneficio donde se identifiquen los impactos y los grupos de actores. Ello muestra un claro problema desde la creación de la misma norma de evaluación de los costes y beneficios de la medida.

¹²¹ *Ibíd.* Pág. 5.

¹²² Congreso de la República del Perú. Proyecto de Ley 625/2000.CR. Pág. 19. Disponible en: <file:///C:/Users/Usuario/Downloads/00625%2019%20OCT%202000.pdf>

El principal problema del canon minero es que los recursos económicos de la minería correspondientes al Impuesto a la Renta que pagan las empresas mineras no son aprovechados de forma óptima y eficiente por los Gobiernos Regionales y Locales. Ello se ve reflejado en los índices de ejecución de gasto de los Gobiernos Regionales y Locales, donde se puede ver que sólo se ejecuta en promedio el 50%. Este es un problema propio de la norma de canon minero puesto que no establece ninguna condición para incentivar a los Gobiernos Regionales y Locales para que ejecuten el canon minero recibido. El monto que no es ejecutado se queda en las cuentas del Banco de la Nación y todavía hasta el día de hoy se discute qué hacer con dicho dinero¹²³.

La no ejecución del gasto genera claros reclamos y protestas de la población local dirigidas hacia las empresas mineras en vez de a sus autoridades locales o regionales. Estas protestas se incrementan debido a la percepción que tiene la población hacia la actividad minera, la que es considerada como una actividad muy dañina para el medio ambiente. Se cuentan con lamentables experiencias de contaminación ambiental por parte de empresas mineras que sirven para afirmar estas percepciones¹²⁴. Asimismo, la mayoría de las minas se encuentran ubicadas en lugares donde las principales actividades de la población son la agricultura y la ganadería, por lo tanto los impactos de la minería tienden afectar estas actividades productivas. En el capítulo 2 del presente trabajo se mostró que los conflictos sociales de los seis departamentos con mayor transferencia de canon minero corresponden principalmente a problemas socioambientales relacionados con minería y medio ambiente.

El problema es que mediante la regulación del canon minero no se incorpora ninguna variable ambiental que logre disminuir la percepción de incompatibilidad entre la actividad minera y el medio ambiente. Por tal motivo, se generan gran cantidad de conflictos socioambientales, los cuales pueden ser sumamente graves y llegar a paralizar obras millonarias de la minería, incluso a pesar que hayan sido aprobadas por el Gobierno Nacional y cumplido con la normativa respectiva¹²⁵.

¹²³ Perú 21 (29 de Mayo 2014). Disponible en: <http://peru21.pe/economia/gana-peru-plantea-que-canon-no-usado-vaya-fondo-social-2185397>.

¹²⁴ El Comercio (22 de Mayo 2011). Disponible en: <http://elcomercio.pe/ciencias/planeta/11-anos-derrame-mercurio-sintomas-persisten-choropampa-noticia-761410>

¹²⁵ El Comercio (01 de Diciembre 2011). Disponible en:

La magnitud del problema es relevante pues implica costos económicos, sociales y ambientales para todos los actores como empresas mineras, Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Local, pobladores y sociedad en general. Además, los problemas se han mantenido en el tiempo y los conflictos socioambientales respecto a la minería se siguen acrecentando precisamente por cuestiones medio ambientales.

3.2.2. Objetivos

En este punto lo relevante es evaluar cuál es el objetivo que debe alcanzar la política analizada o propuesta. Para ello se debe describir los objetivos y las metas. Explicar el propósito que tuvo la regulación y cuál sería el propósito de la regulación que se intenta incorporar¹²⁶.

El objetivo de la Ley de Canon está basado en los 1º, 66º y 77º de la Constitución Política del Perú que establecen que:

“La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”.

“Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento”.

“(…) Corresponden a las respectivas circunscripciones, conforme a ley, recibir una participación adecuada del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la explotación de los recursos naturales en cada zona en calidad de canon”.

En base a dichos artículos el canon materializa la necesidad que los recursos económicos de la minería sean trasladados a la sociedad, especialmente a aquellas zonas donde se encuentran las industrias extractivas¹²⁷. De manera que la regulación del canon minero responde a un objetivo de brindar bienestar a la población de forma descentralizada y especialmente sobre aquellas zonas donde se explotan los recursos minerales, por ser también lugares donde se convive especialmente con la naturaleza mediante actividades como la ganadería y la agricultura.

<http://elcomercio.pe/economia/peru/suspension-conga-impactara-nuestra-economia-efectos-se-sentiran-2012-noticia-1341929>

¹²⁶ Organisation de Coopération et de Développement Économiques. Op cit. Pág. 23.

¹²⁷ Sentencia del Tribunal Constitucional N 0048-2004-PI/TC, Fundamento 52.

Es importante destacar que el concepto de “bienestar”, bajo un enfoque de desarrollo humano, debe entenderse bajo la visión del Programa de Naciones Unidas que señala que no solamente está asociado a mayores niveles de ingresos, sino que incluye varios aspectos de la interacción humana como la participación, la equidad de género, la seguridad, la sostenibilidad, las garantías de los derechos humanos y otros que son reconocidos por la gente como necesarios para ser creativos y vivir en paz¹²⁸. De manera que el bienestar también debe entenderse en términos ambientales que suponen que el individuo y la sociedad se desarrollen en armonía con su entorno.

Las regulaciones medio ambientales en la actividad minera en el Perú únicamente tienen una lógica de comando-control que resultan ser ineficaces e insuficientes. Mediante el RIA se busca reducir la percepción de incompatibilidad entre la minería y medio ambiente a través de mecanismos eficaces y eficientes que vinculen a la actividad minera con el medio ambiente en una lógica de incentivos. Ante ello, los objetivos del presente trabajo son:

Objetivo General:
Disminuir la percepción de incompatibilidad para la población entre la minería y el medio ambiente en los departamentos con mayor transferencia de canon minero
Objetivos Específicos:
Disminuir los conflictos socioambientales en los lugares donde se transfiere mayor canon minero
Incentivar la ejecución del gasto del canon minero que reciben los Gobiernos Regionales y Locales
Proveer de mecanismos que lleguen a generar incentivos que logren relacionar los recursos económicos de la minería con el medio ambiente

3.2.3. Opciones Disponibles

¹²⁸ Portal Web del Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo.
Disponible en: <http://www.pnud.org.ni/noticias/564>

Respecto a las opciones disponibles la pregunta que se intenta responder en este punto es ¿Cuáles son las distintas formas para alcanzar el objetivo planteado anteriormente? En este acápite se desarrollarán cuatro posibles alternativas. Dentro de ellas se considera la opción de no hacer nada y dejar el canon minero tal como se encuentra actualmente regulado sin vincularlo con el medio ambiente.

3.2.3.1. *Regulación ambiental interna basada en incentivos económicos*

Esta opción se basa en el modelo de regulación según incentivos¹²⁹ donde se buscaría que la empresa minera que se encuentra operando en cualquiera de sus fases (exploración, explotación, beneficio, entre otras) pueda verse beneficiada tributariamente de mejorar sus procesos a favor del medio ambiente. Es decir, si la empresa minera demuestra que invierte en tecnología limpia, que mejora sus procesos de filtro o procesamiento de minerales, reduce la contaminación ambiental que generaba aun estando dentro de los Límites Máximos Permitidos (LMP¹³⁰), en consecuencia, se podría establecer un porcentaje de descuento en el Impuesto a la Renta.

De esta manera, la empresa se vería incentivada a invertir en mejorar, por ejemplo, sus filtros de aire o de agua para conseguir una reducción en la contaminación ambiental generada.

Cabe destacar que instrumentos de gestión como los LMP sirven justamente para establecer un rango para que la contaminación ambiental que generen las industrias pueda no excederse de un límite establecido que permita al medio ambiente regenerarse. Mediante el EIA y los reportes de monitoreo y fiscalización la autoridad competente verifica que las empresas no exceden el límite establecido en la normativa.

¹²⁹ Se busca incorporar incentivos a la reducción de costes por parte de las empresas, de forma que sea más eficiente.

¹³⁰ Los límites máximos permisibles es la medida de la concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente o una emisión, que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. Su cumplimiento es exigible legalmente por la respectiva autoridad competente. Según el parámetro en particular a que se refiera, la concentración o grado podrá ser expresada en máximos, mínimos o rangos. (Art. 32° Ley N° 28611, Ley General del Ambiente)

Es importante resaltar que el descuento tributario no se debería realizar sobre la base del coste de la inversión, sino sobre la reducción de la contaminación mediante el nuevo sistema. Por ejemplo, si la planta de concentración de minerales emitía 8 puntos en contaminación ambiental (siendo el límite permitido por el Estado 10), y mediante la nueva tecnología desarrollada ahora dicha planta solo emite 6 puntos. En ese sentido, se podría dar un descuento de por ejemplo un 0.2% en el Impuesto a la Renta que paga la empresa minera. Dicha reducción estaría sujeta a su continuación en el tiempo mediante los reportes de monitoreo y supervisiones de las entidades competentes. Asimismo, ese descuento no podría ser por un tiempo indeterminado sino que tendría que establecerse un periodo de tiempo razonable (máximo 7 años) y rangos en el descuento tributario que permitiría un máximo de 15% al año del Impuesto a la Renta.

Cabe recordar que el 50% del Impuesto a la Renta de las empresas mineras constituye el canon minero que es distribuido a los Gobiernos Regionales y Locales. Por ello, es importante que la aplicación de este descuento tenga rangos y que se aplique por un periodo de tiempo determinado. De forma que no sea posible que la empresa invierta en el cambio de sus tecnologías reduciendo su contaminación ambiental en un 80% y se beneficie de un descuento al Impuesto a la Renta de forma directa y en un solo momento.

Para implementar esta regulación sería necesario establecer un rango máximo de años con la condición de que continúe la reducción de la contaminación ambiental año a año. Igualmente sería pertinente un límite en el descuento tributario de un 5% para que la reducción que se haga de la contaminación no implique un descuento excesivo en perjuicio del Estado. Con el establecimiento de rangos se busca limitar que los efectos de la tecnología nueva se den en un solo momento, y a pesar de ello la empresa se beneficie de la reducción tributaria a lo largo de los años.

Esta propuesta tiene como objetivo incentivar a las empresas mineras a reducir su impacto ambiental, lo que implicaría un beneficio económico para las mismas. Asimismo, mediante el monitoreo y supervisión la entidad del Estado podrá verificar que se ha generado una reducción de la contaminación ambiental de forma que no

existan problemas de información asimétrica¹³¹. La eficiencia ambiental beneficiaría no sólo a la empresa sino al Estado y a la sociedad en su conjunto ya que al mejorar sus procesos el medio ambiente se encontrará en mejores condiciones para la calidad de vida de los pobladores de la zona. Asimismo, el Estado no solo estará aplicando medidas de comando y control para fiscalizar y sancionar a la empresa que excede los LMP, sino que también estaría generando un incentivo para que las empresas reduzcan la contaminación ambiental aun en el caso que se esté cumpliendo con dichos límites.

Para que esta regulación genere un verdadero incentivo la empresa deberá evaluar si la inversión en una tecnología más eficiente ambientalmente se ve compensada por la deducción tributaria. En ese sentido, la empresa considerará dentro de su análisis económico cuánto le cuesta la nueva inversión y si es el descuento tributario es significativo para sus intereses. A los beneficios económicos de la empresa también hay que considerar la mejora en la reputación de la empresa lo que puede ayudar a disminuir los conflictos socio-ambientales, considerando que la mayoría de ellos están basados en el temor a la posible contaminación ambiental. A ello también hay que sumarle la menor probabilidad de desastres ambientales o exceso de contaminación sobre los LMP que pudiese acarrear multas o financiamiento mayor al cierre de la mina por remediación de pasivos ambientales.

En conclusión, esta medida podría aplicarse para incentivar internamente la eficiencia ambiental de la empresa y la inversión en tecnológicas limpias, pues ello redundaría en un beneficio económico para la empresa mediante un descuento en el Impuesto a la Renta. Para su aplicación se deberán considerar una serie de condiciones como el establecer un rango de mínimos y máximos para el descuento tributario. Asimismo, un espacio de tiempo donde se aplique la reducción tributaria. Por último, se tendría que considerar el costo que implica para el Estado la implementación de esta alternativa de regulación en términos de menor recaudación tributaria y de menor cuantía en la redistribución vía canon.

¹³¹ La información asimétrica es aquella donde una de las partes tiene mayor información que la otra y ello puede ser utilizado para el beneficio de una y perjuicio de la otra.

3.2.3.2. Regulación ambiental externa basada en deducción fiscal

Esta alternativa se basa en la regulación de obras por impuestos¹³². Esta regulación consiste en reemplazar el pago en efectivo de hasta un 50% del Impuesto a la Renta de las empresas privadas por la ejecución de una obra pública a nivel regional o local. De forma que dichas entidades del Estado no tengan que movilizar en la práctica fondos públicos. En ese sentido, la empresa privada paga la realización de la obra pública que es seleccionada por ella misma en base a una lista prioritaria del Gobierno Regional o Local. Es decir, los Gobiernos Regionales y Locales logran financiar sus obras públicas y tienen hasta 10 años para pagar al Gobierno Nacional con cargo a los recursos del canon que reciben si la obra pública supera el canon recibido en determinado año. Lo que se quiere es que el Gobierno Regional o Local no se quede sin recursos en un determinado año y pueda seguir destinando parte de los mismos a otras obras o servicios que también sean de necesidad de la zona.

Utilizando este modelo de regulación la alternativa plantea que la empresa minera financie proyectos en materia ambiental priorizados por los Gobiernos Regionales o Locales. Estos proyectos podrían ser: creación de áreas verdes, expedientes técnicos para la creación de áreas de conservación regional, remediación de pasivos ambientales, reforestación, mantenimiento de áreas naturales protegidas a cargo del Gobierno Regional, proyectos de mejora en la gestión ambiental como residuos sólidos, entre otros.

Este mecanismo generaría tres relaciones:

- (i) La primera es entre la empresa minera y el Gobierno Nacional que actúa a través del MEF y de la SUNAT. La empresa minera invierte en un proyecto ambiental y tiene una deducción fiscal.
- (ii) La segunda relación es entre la empresa minera y el Gobierno Regional o Local. Esta relación se centra en la elección del proyecto ambiental,

¹³² Ley 29230 y Decreto Supremo N° 005-2014-EF. Ley y reglamento que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado.

Disponible en:

<http://www.obrasporimpuestos.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?are=0&prf=0&jer=5&sec=0>

pues debe basarse en la lista de proyectos ambientales priorizados por el Gobierno Regional y Local en determinado año.

- (iii) La tercera relación es entre el Gobierno Regional o Local y Gobierno Nacional. Este último transfiere los recursos económicos del canon minero a los Gobiernos Regionales y Locales. Si una empresa minera ha realizado un proyecto ambiental que se encontraba priorizado en la lista del Gobierno Regional o Local, este tendrá 10 años como máximo para compensar el valor de dicho proyecto mediante los recursos del canon minero. De esta forma, si el proyecto ambiental excede el monto que iba a recibir un Gobierno Regional o Local en determinado año por concepto de canon minero, ello no implicaría que no reciba monto alguno. Lo que sucedería es que podría colocarlo como un descuento en una partida que se vea distribuida a lo largo de los años en su planificación presupuestal.

Las empresas mineras podrán escoger unilateralmente financiar aquellos proyectos ambientales que se encuentren en la lista. Mediante esta alternativa se garantiza la ejecución del gasto y al mismo tiempo la ejecución de proyectos que, por temas burocráticos, poca transparencia, ineficiencia o corrupción las entidades del Estado no pueden llevar a cabo en plazos razonables.

Esta alternativa implicaría, además, una modificación a la Ley y reglamento de Obras por Impuestos. Dicha modificación consistiría en incluir un 25% de proyectos ambientales dentro de la lista de obras de los Gobiernos Regionales y Locales. En esta alternativa de regulación no se le obliga a la empresa a tener que financiar dichos proyectos o elegir los ambientales, lo que queda a discrecionalidad de la empresa. Sin embargo, resulta óptimo que tenga la opción de hacerlo sobre todo en un contexto donde la mayoría de departamentos con empresas mineras tienen grandes conflictos socioambientales relacionados a minería y medio ambiente.

Cabe recalcar que el descuento se aplicaría al Impuesto a la Renta y ello también modificaría el canon minero que recibiría determinado Gobierno Regional o Local en un periodo de tiempo. Los límites del 50% del Impuesto a la Renta para la ejecución de las obras y de los 10 años de periodo para que el Gobierno Regional y Local pueda

compensar mediante el canon recibido al Gobierno Nacional, se seguirían manteniendo pues resultan condiciones que buscan que los actores puedan desenvolverse en esta alternativa de regulación en escenarios de eficiencia y eficacia. Por ejemplo, si al Gobierno Regional o Local le corresponde determinado año recibir por concepto de canon minero 100 mil soles¹³³ y durante dicho año la empresa minera ha realizado un proyecto ambiental priorizado por el Gobierno Regional o Local que ha costado 20 mil soles, entonces el Gobierno Regional o Local deberá comunicarle al Gobierno Nacional que de acuerdo a su planificación presupuestaria dicho proyecto será compensado en unos 5 años y por ende de los 100 mil soles que iba a recibir el Gobierno Regional o Local solo recibirá dicho año 96 mil soles, ya que cada año en un periodo de 5 años se le descontará 4 soles correspondiente del canon minero. Por otra parte, si la empresa debía pagar por Impuesto a la Renta 200 mil soles y el proyecto le costó 20 mil soles, entonces pagará ese año 180 mil soles.

Resulta importante que el listado de obras donde se incluyen los proyectos ambientales sean fruto del plan de desarrollo concertado de la localidad y cuenten con el visto bueno del MEF, de modo que los proyectos no sean “elefantes blancos” que sólo se realicen con el objetivo de cumplir con objetivos políticos electorales. La ineficiente ejecución del gasto del canon minero resulta perjudicial no sólo para el Estado sino también para las empresas mineras, pues no se percibe tangiblemente su aporte económico y por el contrario se les considera contaminadoras del ambiente generando externalidades negativas a la población que no son internalizadas. En ese sentido, para la empresa minera resulta beneficioso tener un mecanismo donde no dependa del Estado la ejecución del gasto del canon minero sino que ellas también puedan hacerlo efectivo y su inversión sea descontada de su Impuesto a la Renta.

En conclusión, mediante esta alternativa se busca que la empresa minera tenga la opción de encargarse parcialmente de la ejecución del gasto correspondiente al canon minero y que dentro de los proyectos de la lista del Gobierno Regional o Local también tenga la opción de seleccionar proyectos ambientales. En ese sentido, se estarían utilizando parte de los recursos económicos de la minería para invertir en medio ambiente liderando la gestión de los proyectos por las propias empresas.

¹³³ Monto únicamente a efectos de ejemplificar.

3.2.3.3. *Inclusión de una variable ambiental para la distribución del canon minero*

Esta alternativa de regulación se basa en el modelo del ICMS Ecológico Brasileiro¹³⁴. El ICMS es un impuesto en Brasil sobre el Movimiento de Productos y Servicios, dentro de su sistema tributario que articula los tres niveles de gobierno¹³⁵. Cada Estado tiene la autoridad legal para determinar cuál es la proporción de los ICMS en sus territorios. Es decir, la recaudación de dicho impuesto la realiza el municipio y es entregada al Estado Federal para su posterior distribución. El Estado Federal tiene la posibilidad y autonomía para fijar criterios que determinen la proporción de ingresos por el ICMS que otorgará a cada municipio¹³⁶. Como parte de los criterios para determinar la cantidad de ingresos que se distribuyen a las municipalidades esta el criterio ecológico. Todo el procedimiento es supervisado y controlado por la Municipalidad y por la Contraloría del Estado¹³⁷.

La alternativa de regulación propuesta se basa en este modelo adaptándolo a la figura de canon minero en el Perú. El canon minero como se ha mencionado viene a ser el 50% del Impuesto a la Renta que pagan las empresas mineras y es distribuido a nivel Regional y Local bajo ciertos criterios de distribución. Como se ha mencionado, únicamente se distribuye a aquellos lugares donde se extraen recursos minerales. Para la distribución del canon, de acuerdo a lo explicado anteriormente, se consideran criterios como población y pobreza, carencia de necesidades básicas y déficit de infraestructura, entre otros. Esta propuesta añadiría el criterio ecológico. De manera que dentro de los criterios para distribuir determinados ingresos del canon a los Gobiernos Regionales y Locales, también se considere el nivel de inversión de estos respecto al medio ambiente.

De este modo se aplicaría un círculo virtuoso donde los Gobiernos Regionales y Locales invierten en áreas naturales protegidas y en la gestión sostenible del ambiente

¹³⁴ Portal web ICMS Ecológico. Disponible en: <http://www.icmsecológico.org.br/>.

¹³⁵ Brasil está organizado por la Unión, Estados Federados y Municipios.

¹³⁶ Artículo 158°, párrafo IV de la Constitución Brasileira que desarrolla que el Estado Federal tiene la posibilidad y autonomía para fijar criterios que determinen la proporción de ingresos por el ICMS que otorgará a cada municipio. Sin embargo, los estados si tienen la obligación de considerar un 25% de los ingresos recaudados del impuesto estatal sobre las operaciones relativas a la circulación de bienes y prestación de servicios de transporte y la interestatal y comunicación.

¹³⁷ Portal web ICMS Ecológico. Op. cit.

dentro de su jurisdicción, de acuerdo a las competencias ambientales establecidas en la normativa¹³⁸. En base a dicha inversión se distribuiría mayor porcentaje de canon minero a dichas entidades del Estado. Es decir, en primer lugar la SUNAT recaudaría el Impuesto a la Renta de las empresas mineras. El 50% de dicho impuesto sería transferido por el MEF a los Gobiernos Regionales y Locales donde operan las empresas mineras de acuerdo a diversos criterios. Se transferiría un mayor porcentaje del canon minero a aquellos Gobiernos Regionales y Locales que invierten en medio ambiente. El porcentaje ambiental considerado podría estar en un rango máximo de 5% del 50% del canon minero transferido, ello resulta significativo para ser un verdadero incentivo para los Gobiernos Regionales y Locales a invertir en medio ambiente y gestión ambiental, y al mismo tiempo no alterar de forma sustancial los criterios de distribución.

Mediante esta regulación se condiciona a los Gobiernos Regionales y Locales que deseen recibir mayor porcentaje de canon minero año a año (correspondiente al Impuesto a la Renta) a invertir en medio ambiente y gestión ambiental dentro de su ámbito y de acuerdo a sus competencias. El ingreso correspondiente al rubro ambiental del canon no limita los rubros de gasto de los Gobiernos Regionales y Locales. Es decir, no los obliga únicamente a utilizar lo recibido para el medio ambiente. Pero, considerando que dichas entidades el año siguiente querrán recibir nuevamente más canon, resulta razonable inferir que van a querer destinar una parte del monto recibido al rubro de medio ambiente.

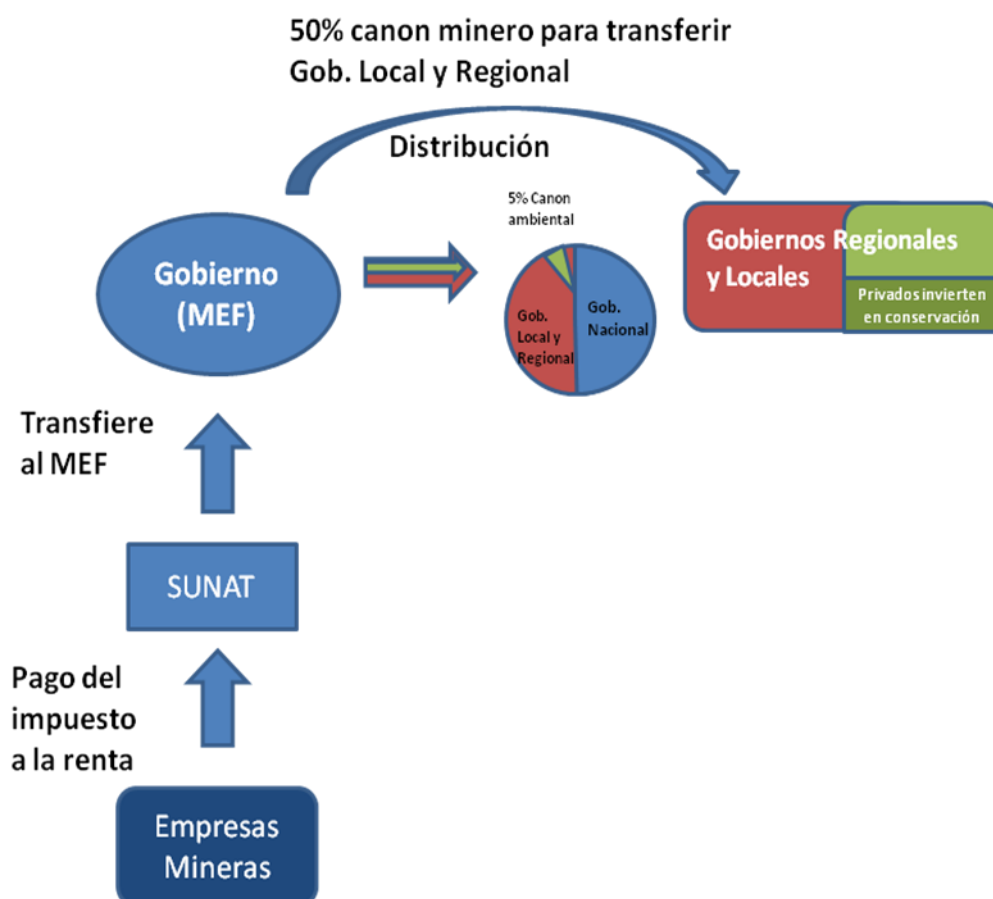
El siguiente gráfico muestra el desarrollo de la regulación propuesta y la relación entre las entidades que participan en dicho sistema. Asimismo, cabe resaltar que mediante esta regulación también podría considerarse a aquellos privados que invierten en áreas de conservación privada¹³⁹.

¹³⁸ Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 27867 y Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972.

¹³⁹ Son áreas de conservación creadas en parte o en la totalidad de predios de propiedad privada cuyas características ambientales, biológicas, paisajísticas u otras análogas, aportando a la conservación de la diversidad biológica e incrementando la oferta de oportunidades para la investigación científica, la educación y el turismo especializado. Definición extraída del Portal Web del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Perú.

Disponible en: <http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/contenido.jsp?ID=11>

Grafico 3: Propuesta de distribución bajo la variable ambiental

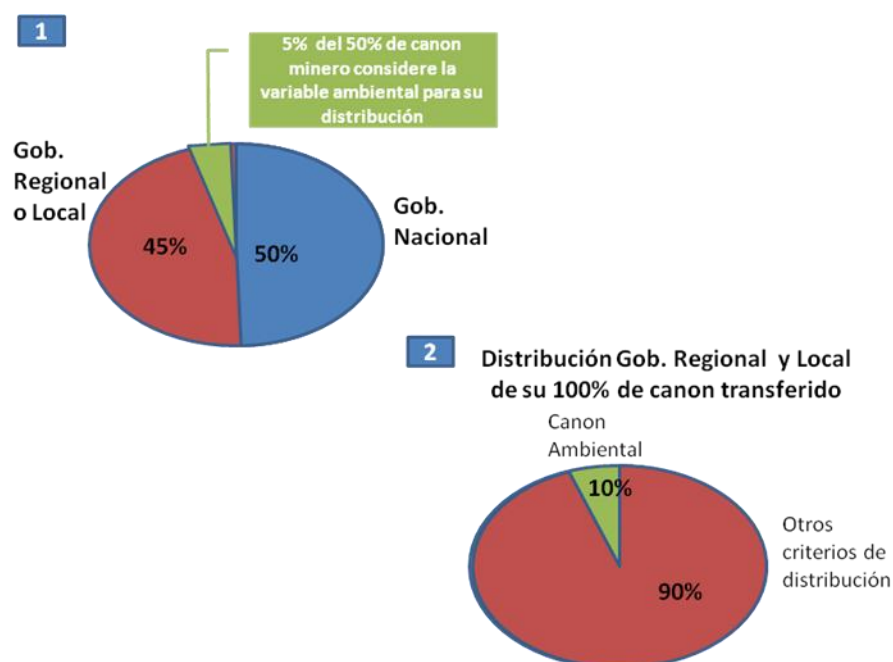


Fuente: Elaboración propia

La distribución del canon minero bajo una variable ambiental cumple la función de ser un instrumento económico de compensación fiscal que tiene como objetivo promover la conservación de la diversidad biológica. Esta regulación vendría a ser un mecanismo de compensación para el Gobierno Regional o Local que invierte en medio ambiente, ya sea al crear, poseer o mantener áreas protegidas y tiene o desarrolla una buena gestión ambiental.

Actualmente el Gobierno Regional o Local recibe el canon minero, que es el 50% del Impuesto a la renta recaudado por el Gobierno Nacional. Lo que se propone es que el 5% de ese monto recibido (que es el canon minero) este condicionado a la inversión en medio ambiente y gestión ambiental eficiente por parte del Gobierno Regional o Local. El grafico 4 muestra la distribución desarrollada en porcentajes.

Grafico 4: Porcentajes de distribución bajo la variable ambiental



Fuente: Elaboración propia

El MINAM debería ser la entidad encargada de determinar a qué Gobierno Regional y Local le corresponde el 5% del canon minero que estaría condicionado a la variable ambiental. Por ello para la aplicación de esta regulación se deberá construir una serie de indicadores entorno a las competencias establecidas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y de Gobiernos Municipales en materia ambiental. Los indicadores podrían ser el número de hectáreas verdes, el porcentaje de la población satisfecha con la gestión ambiental de su localidad, un programa de residuos sólidos eficiente, entre otros. Dentro de este esquema el MINAM deberá contar con suficiente información sobre el estado actual de los Gobiernos Regionales y Locales.

La aplicación de esta regulación debería ser de forma progresiva. Se propone, que se realice un piloto dentro de un departamento para conocer cómo se desarrolla esta herramienta y cuáles son sus debilidades, fortalezas, oportunidades, amenazas; así como sus costos y beneficios en la realidad.

En conclusión mediante esta alternativa de regulación es posible realizar una gestión eficiente del medio ambiente con la participación de tres niveles de gobierno, así como con la participación de privados en la conservación del ecosistema, de forma

articulada y en donde todos se benefician. Se busca incorporar una perspectiva en la inversión pública que demuestra que no solo es justificable utilizar los recursos económicos de la minería para infraestructura, sino que resulta más ventajoso y eficiente también destinarlos a la gestión medio ambiental¹⁴⁰.

De esta forma se generan incentivos económicos que llegan a operar y modificar todo un sistema económico y el comportamiento de los agentes insertos en el mismo. Las entidades del Estado comienzan a considerar sus áreas verdes y la eficiente gestión ambiental como activos sujetos a valoración económica. Este es un mecanismo que crea una gran oportunidad para el Estado de influir en el desarrollo sostenible de las zonas bajo la figura de incentivo¹⁴¹ y condicionar parte de la ejecución del gasto. Con ello se reduce la percepción de incompatibilidad entre la minería y el medio ambiente por parte de la población al constatar que los recursos económicos de la minería se están destinando al medio ambiente. Disminuyendo así los conflictos socioambientales en la zona.

3.2.3.4. *La alternativa de no regular*

Esta opción consiste en dejar la regulación existente sin modificarla, adaptarla o eliminarla. Es decir, la regulación del canon minero se mantendría sin estar vinculada al medio ambiente. Esta opción resulta válida sobre todo para analizar si es eficiente regular o es mejor no hacerlo. Cabe destacar que de acuerdo a la OCDE¹⁴² las opciones regulatorias no siempre llevan a la eficiencia o eficacia del mercado, por ello es importante considerar también la opción de no regular analizando los costes y beneficios que ello implica.

La OCDE¹⁴³ señala que se puede llegar a optar por no regular cuando el problema sea demasiado pequeño y no justifique la intervención del Estado, o en el caso que ninguna de las alternativas propuestas pueda cumplir con el objetivo esperado a un costo razonable y con beneficios que compensen los costos de la medida.

¹⁴⁰ Portal web ICMS Ecológico. Disponible en:
http://www.icmsecológico.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=66

¹⁴¹ Portal web ICMS Ecológico. Disponible en:
http://www.icmsecológico.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=82

¹⁴² Organisation de Coopération et de Développement Économiques. Op cit. Pág. 5.

¹⁴³ Ibíd. Pág. 5.

Muchas veces la intervención del Estado buscando una solución termina aumentando el problema o generando uno distinto y de mayor gravedad. Mediante la alternativa de no regular se intenta evaluar si se justifica la regulación o no. Los criterios que se pueden tomar en cuenta para decidir si conviene regular¹⁴⁴:

- (i) La capacidad del Estado para hacer efectiva una regulación dependiendo del país y del contexto.
- (ii) El tamaño del problema identificado comparándolo con otros que también pueden necesitar regulación, ya que en algunos casos será necesario priorizar unos problemas antes que otros.
- (iii) La habilidad de los actores involucrados en la problemática para resolver sus propios problemas sin la necesidad de la intervención estatal. De poder los agentes llegar acuerdos sin mayores costes de transacción y teniendo claridad sobre los derechos, no será necesaria la intervención del Estado.
- (iv) La temporalidad de los problemas. Dependiendo si son de larga o corta duración pueden influir efectos externos sobre ellos independientemente del rol que el Estado ejerza.

La OCDE¹⁴⁵ señala que si después de haber considerado estos puntos se ve justificada la regulación para resolver el problema a un costo razonable comparando las distintas alternativas, es que resulta óptima su aplicación.

Para el caso concreto esta opción supondría dejar no introducir ninguna modificación en el canon minero o descuentos respecto al Impuesto a la Renta vinculando los recursos económicos de la minería con el medio ambiente.

En el siguiente cuadro se puede visualizar el análisis respecto a los criterios a considerar antes de determinar regular y su desarrollo.

¹⁴⁴ Ibid. Pág. 5.

¹⁴⁵ Ibid. Pág. 6

Criterios para el análisis sobre regular	Desarrollo
Dimensión del problema que justifique la intervención del Estado.	La minería en el Perú es una de las actividades que genera mayor crecimiento del PIB. Su paralización por conflictos socioambientales puede implicar grandes pérdidas para el Estado. Asimismo, los recursos naturales son un medio de subsistencia de muchas poblaciones en el Perú que se dedican sobre todo a la agricultura o a la ganadería. Si las fuentes como el agua o el aire se encuentran en un mal estado ello afecta drásticamente a estos pueblos y, en el caso de pueblos indígenas, a su propia supervivencia. El Estado tiene como función promover el crecimiento económico sostenible y para ello debe armonizar y compatibilizar minería y medio ambiente. En ese sentido, el problema de los conflictos socioambientales y la minería es de gran magnitud y el Estado debe intervenir pues no abarca una dimensión pequeña.
Capacidad del Estado para hacer efectiva la regulación.	Se cuestiona mucho la capacidad del Estado para hacer efectiva la regulación, sobre todo en los casos de políticas de comando-control. Sin embargo, si la regulación se basa en incentivos (ya sea para los privados o las propias entidades del Estado) la capacidad para que estas políticas sean efectivas depende de los actores. Considerando que los individuos o entidades buscan maximizar sus beneficios y reducir sus costos, la política de incentivos se vuelve efectiva por se desde su estructura. De manera que el trabajo desde el Estado consistirá en eliminar los incentivos perversos en la regulación creada. Los casos de regulación propuestos se basan en políticas de incentivos. La capacidad del Estado estará sobre todo en el diseño de la regulación, para lo cual el Estado ha demostrado en varias ocasiones su capacidad. Mientras que la incapacidad se muestra en las políticas donde se debe buscar fiscalizar y sancionar por incumplimiento de normas.
Priorización del problema identificado	Como se ha mencionado, la minería es una de las actividades más importantes en el Perú y su posible paralización por protestas sociales puede implicar un grave perjuicio para el Estado, así como ahuyentar inversionistas. Asimismo, la seguridad y estabilidad en el país son supuestos relevantes para su crecimiento. Si hay protestas estas bases no se cumplen y por ende se puede afectar otros sectores como el turismo o el comercio. Por lo tanto el problema de la incompatibilidad entre la minería y el medio ambiente resulta un problema que debe de ser priorizado por el Estado.
Habilidad de los actores involucrados de resolver sus propios problemas.	Siempre han existido siempre acuerdos entre la empresa minera, la población y los Gobiernos Regionales y Locales. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que la población percibe que la empresa se aprovecha de su condición. Asimismo, las empresas perciben que, al hacer proyectos por demanda de la población y a los que no están obligados legalmente, están cumpliendo con obligaciones del Estado que no les corresponden a ellas. Sin embargo, bajo el escenario de conflictos sociales no tienen más remedio que ceder ante la población. En el caso de los Gobiernos Regionales y Locales en muchos casos estos apoyan a la población

	en las protestas por motivos electorales. De forma que los agentes no pueden resolver de forma efectiva y eficiente sus problemas y hay muchos costos de transacción dentro de dichas negociaciones. Por lo que la intervención del Estado como garante es necesaria y oportuna.
Temporalidad del problema y la influencia de los efectos exógenos.	Este problema viene de varios años y décadas atrás, por lo que es de mediana o larga duración. Surge a partir que la población comienza a tomar en cuenta de sus derechos en materia ambiental y la necesidad que el crecimiento económico incorpore criterios de sostenibilidad. Antes de la regulación ambiental las empresas mineras se han caracterizado por generar externalidades negativas al medio ambiente sin mayor compensación. Los efectos exógenos como la disminución en el precio de los metales, que es fijado por el mercado internacional, no influye en los conflictos socioambientales. Si por dichas razones disminuye la cantidad de canon minero recaudado, ello no ocasionaría conflictos socioambientales ya que sea visto que, independientemente del canon minero recibido, en la mayoría de casos hay un 50% del canon no ejecutado por los Gobiernos Regionales y Locales. Es decir, los problemas exógenos no influyen en este caso, ni son causa de los conflictos socioambientales.

Fuente: Elaboración propia

En conclusión, se puede apreciar que este primer análisis muestra que sí existe una necesidad de regulación. Sin embargo, para poder realizar una evaluación más completa se va a utilizar el ACB.

3.2.4. Determinación de impactos según costes y beneficios

El ACB de las alternativas sirve para poder visualizar los impactos de cada una de las medidas en los distintos actores e identificar la mejor opción¹⁴⁶. Mediante este análisis se logra transparentar quién realmente se beneficia por una regulación y quien paga los costos de la implementación. Ello ayuda a evaluar la viabilidad de determinada norma o política. De esta manera los beneficios que genera a todos los actores en los que la regulación pueda tener un impacto puedan verse compensados por los costes de su aplicación.

Para el caso concreto en este punto se utilizará el ACB cualitativo para evaluar las alternativas desarrolladas en el presente documento. Para ello se han desarrollado varios cuadros basados en el texto de la OCDE¹⁴⁷. El objetivo de esta evaluación es identificar los costes y beneficios que representa cada una de estas medidas de

¹⁴⁶ *Ibíd.* Pág. 10.

¹⁴⁷ *Ibíd.* Pág. 10-11.

acuerdo a sus impactos en los diferentes grupos afectados en base a tres efectos: ambiental, económico y político-social. Cabe resaltar que al realizar el ACB en algunos casos se suele repetir los beneficios y costes de los diferentes grupos involucrados. Asimismo, es importante destacar que los efectos de estas regulaciones se pueden medir en periodos de tiempo distintos: corto, mediano y largo plazo.

- **Regulación ambiental interna basada en incentivos económicos**

Grupo Afectado	Efectos	Costos	Beneficios
Empresas Mineras	Ambiental	No hay costos ambientales.	Un ambiente más saludable para sus trabajadores.
	Político-social	Percepción de la población que la tecnología de la empresa antes no era la adecuada y por ello ahora está cambiando a una mejor.	Percepción positiva de la población al ver que la empresa invierte en tecnología más limpia para mejorar sus procesos ambientales.
		Percepción social de trato fiscal favorable para las empresas.	Disminución de los conflictos socioambientales y por ello se genera un espacio de tranquilidad, seguridad y estabilidad.
			Mejora en la reputación de la empresa.
	Económico	Inversión económica en la nueva tecnología.	Beneficio económico mediante un descuento tributario.
		Gasto de la empresa para informar a la población sobre sus mejoras para que su percepción cambie.	A largo plazo la empresa no tendrá que invertir demasiado en los procesos de cierre de mina o de compensación pues la contaminación generada será menor.
		Costes logísticos de involucrarse en la nueva regulación.	Futuras concesiones se verían beneficiadas ya que habría mayor aceptación social y ambiental de la actividad.
		Proporcionar la información relevante para poder acogerse al beneficio fiscal y esa sistematización de información tiene un costo.	

		La ventaja fiscal recién se realiza después que la empresa ha realizado la inversión en tecnología limpia, de forma que hay una incertidumbre basada en el problema de la inconsistencia temporal ¹⁴⁸ .	
Población local	Ambiental	El traslado de la maquinaria nueva o el desarrollo de la tecnología limpia podrían generar un impacto ambiental desfavorable.	Un ambiente más sano y fuentes más limpias de aire y agua.
	Político-social	Invertir tiempo en conocer e informarse sobre la regulación propuesta y sus beneficios.	Disminución de los conflictos socioambientales y por ello se genera un espacio de tranquilidad, seguridad y estabilidad.
		Trato fiscal discriminatorio que se vea como injusto por parte de empresas locales de otros sectores económicos o por parte de los ciudadanos	
	Económico	Los recursos económicos en su zona se podrían ver disminuidos.	Los beneficios económicos pueden traducirse en mejor desarrollo de los cultivos por tener un aire o agua más limpia; y más dinamismo en el comercio pues hay mayores turistas en la zona ya que es un espacio de tranquilidad y seguridad.
		Las empresas proveedoras de material y servicios para el funcionamiento de las tecnologías anteriores se verían perjudicadas al disminuir su negocio tras la sustitución de tecnología.	Beneficios económicos de la transferencia de recursos de nuevas explotaciones mineras productivas que se inicien en la zona una vez se reduzca el descontento social. Nuevas empresas (locales o nacionales) se verían beneficiadas al ser contratadas como proveedoras de bienes o servicios para instalar y mantener las nuevas tecnologías
Gobierno	Ambiental	No hay costo ambiental.	No hay beneficio ambiental.

¹⁴⁸ El problema de la inconsistencia temporal puede darse cuando el regular en determinado contexto puede comprometerse a un tipo de regulación con ciertas condiciones. Sin embargo, posteriormente, cuando la empresa ya ha realizado su inversión, ya no resulta óptimo cumplir con lo prometido. Este problema crea grandes incertidumbres para las empresas que son reguladas. Por ello es importante también crear mecanismos para que el regulador pueda cumplir con sus compromisos.

Regional y Local	Político-social	Problemas con la población pues tienen menores recursos para desarrollar obras o servicios públicos.	Se desarrolla un clima de seguridad, confianza y estabilidad en su localidad y departamento.
			La percepción de la población que la minería solo contamina y no genera ningún beneficio para el ambiente cambia, por ello disminuyen los conflictos socioambientales y se genera un espacio de tranquilidad, seguridad y estabilidad en la zona.
	Económico	Menor transferencia de ingresos económicos.	El ahorro de gastos para limpiar o depurar recursos medioambientales dañados es un beneficio económico para el Gobierno Regional o Local.
		Posibles costes derivados de la menor actividad económica por tanto menor recaudación fiscal de empresas proveedoras adyacentes.	Menor inversión en seguridad policial para apaciguar los conflictos sociales. Posibles beneficios derivados de la mayor actividad económica por tanto mayor recaudación fiscal de empresas proveedoras adyacentes.
Gobierno Nacional	Ambiental	No hay un costo ambiental.	No hay beneficio ambiental.
	Político-social	Siempre pueden surgir nuevos conflictos sociales o políticos por una nueva regulación.	Clima de confianza, seguridad, estabilidad y crecimiento armónico entre las industrias extractivas y la población resulta beneficioso para el crecimiento sostenible del país.
		Costes políticos y sociales de crear beneficios fiscales y deducciones a un sector de actividad concreto y por tanto no generalizado.	Beneficio político y electoral para el Gobierno ya que el Estado es garante del medio ambiente, una mejora en las condiciones de agua y aire redundan en un beneficio para la población y por ende en el cumplimiento de las funciones del Gobierno
	Económico	Gastos administrativos en su implementación.	El gobierno incentiva a la empresa a ser más eficiente ambientalmente mediante esta regulación por ello podrían disminuir los conflictos sociales y por ende el gasto del Estado respecto a este rubro se reduciría.
		Pérdida de ingresos fiscales debido a la deducción.	

		Al ser el Gobierno Nacional el encargado de monitorizar la reducción de contaminación o de la implantación de tecnologías limpias se generará un costo económico por la implementación de un nuevo proceso de supervisión y desarrollo de la medida regulatoria, capacitación al personal, entre otros.	<p>El Estado mueve todo su aparato para la supervisión y fiscalización considerando que el ánimo de la empresa es ocultar información y generar externalidades, el gasto correspondiente a este rubro se vería disminuido al saber que las empresas tienen el incentivo de mejorar su gestión ambiental.</p> <p>El ahorro de gastos para limpiar o depurar recursos medioambientales dañados también es un beneficio económico para el Gobierno Nacional.</p>
Sociedad	Ambiental	Las nuevas tecnologías pueden contaminar. A pesar que posiblemente sea en menor medida, ello no quiere decir que no puedan generar un impacto negativo en el ambiente. Por ejemplo, en el lugar donde son producidas.	Tener un ambiente más sano y con menores índices de contaminación.
	Político-social	No habría un costo social para la sociedad.	Reducción de los conflictos socioambientales basados en el temor a la contaminación ambiental pues la propia empresa no tiene incentivos para generar externalidades negativas respecto al ambiente.
			Clima de estabilidad y paz es beneficioso para la sociedad en su conjunto.
			Percepción social que el Estado es verdaderamente garante del medio ambiente, una mejora en las condiciones de agua y aire redundan en un beneficio para la población.
	Económico	El costo económico para la sociedad podría darse en un inicio ya que para la implementación de la regulación habría gastos del Estado que estaría reduciendo en otros aspectos públicos.	La sociedad se ve beneficiada económicamente ya que sus impuestos pueden destinarse a otros aspectos como obras o servicios públicos.
			Los esfuerzos por parte del Estado de reducir la contaminación ambiental serían menores.

Fuente: Elaboración propia

- **Regulación ambiental externa basada en deducción fiscal**

Grupo Afectado	Efectos	Costos	Beneficios
Empresas Mineras	Ambiental	No implica costo ambiental.	Desarrollo de la mina y sus trabajadores en un entorno más óptimo ambientalmente.
	Político-social	Problemas sociales en torno a la elección del proyecto ambiental por la empresa cuando la población considera que se debería priorizar otros proyectos.	La población percibiría tangiblemente y de forma directa que la minera desea invertir en el medio ambiente y sus recursos económicos están siendo utilizados para su mejora.
		Percepción social de trato fiscal favorable a las empresas	Mejora en su reputación. Reducción de los conflictos socioambientales.
	Económico	La inversión actual en los proyectos ambientales seleccionados.	Disminución del costo económico por los conflictos socioambientales. La empresa sabe que una potencial protesta puede hasta paralizar la mina. Si mediante esta regulación disminuyen los conflictos socioambientales ello es un beneficio económico para la empresa pues ahorra gastos en seguridad o planes de relaciones comunitaria, espacios de diálogo, entre otros.
		La ventaja fiscal recién se realiza después que la empresa ha realizado la inversión en el proyecto ambiental, de forma que hay una incertidumbre basada en el problema de la inconsistencia temporal.	Beneficio económico mediante un descuento tributario.
		Costes logísticos en la empresa de acogerse a la deducción fiscal.	Beneficio de futuras concesiones dada la aceptación social y ambiental de la actividad.
Población local	Ambiental	Los proyectos ambientales pueden generar impactos ambientales desfavorables en su desarrollo, por ejemplo movimiento de tierra.	El entorno de desarrollo de la población será un medio ambiente en mejores condiciones si los proyectos elegidos son justamente de mejora medioambiental.
	Político-social	Conflictos sociales si la población no está de acuerdo con la empresa en el proyecto ambiental seleccionado para realizarse.	Si los proyectos elegidos por la empresa son de carácter social se obtendrán mejoras sociales asociadas

		Invertir tiempo en conocer e informarse sobre la regulación propuesta y sus beneficios.	Disminución de los conflictos socioambientales en la zona al percibirse que se invierte en medio ambiente y por ende se genera un clima de mayor seguridad, paz y tranquilidad.
		Trato fiscal discriminatorio que se vea como injusto por parte de empresas locales de otros sectores económicos o de los ciudadanos.	
	Económico	Habría una disminución en la transferencia del canon asignado.	Un entorno ambiental más adecuado puede ayudar al desarrollo de otras actividades económicas como la agricultura, el comercio, la ganadería o el turismo.
			Beneficios económicos de la transferencia de recursos de nuevas explotaciones mineras productivas que se inicien en la zona una vez se reduzca el descontento social.
			Nuevas empresas (locales o nacionales) se verían beneficiadas al ser contratadas como proveedoras de bienes o servicios para instalar y mantener los nuevos proyectos ambientales
Gobierno Regional y Local	Ambiental	No hay costo ambiental.	No hay beneficio ambiental.
	Político-social	Como la elección del proyecto ambiental seleccionado es prerrogativa de la empresa, podría ser que el Gobierno Regional o Local considere que se deben priorizar unos proyectos más que otros en su lista y ello podría traer conflictos.	La ejecución del gasto del canon minero genera un mejor clima con la población que ya no percibe a su Gobierno Regional o Local como ineficiente, corrupto o poco transparente.
			Disminución de los conflictos socioambientales.
			Clima de estabilidad y confianza entre los actores que habitan en el departamento o localidad.
			Crédito político o electoral puesto que se mejora el medio ambiente mediante los proyectos ambientales.

	Económico	Disminución en la transferencia del canon recibido.	Los Gobiernos Regionales o Locales tienen funciones respecto a la gestión ambiental, buen manejo de residuos sólidos, creación de áreas verdes, entre otras. Si los proyectos ambientales ejecutados por la empresa logran contribuir respecto a estos rubros, las entidades del Estado no tendrían que realizar fuertes gastos sobre estos aspectos.
			Menor inversión en seguridad para apaciguar los conflictos sociales.
Gobierno Nacional	Ambiental	No hay un costo ambiental.	No hay beneficio ambiental.
	Político-social	Implicaciones políticas que puede traer pues la población podría no estar de acuerdo con el proyecto ambiental seleccionado por la empresa o con la implementación de esta regulación.	Disminución de los conflictos socioambientales al ver la población que se está invirtiendo en proyectos ambientales puesto que el medio ambiente es su principal reclamo.
		Costes político-sociales de crear beneficios fiscales y deducciones a un sector de actividad concreto.	Clima de seguridad, tranquilidad y estabilidad óptimo para las inversiones en el país.
	Económico	El riesgo de que los proyectos que se realicen no se concluyan y tenga que darse ayuda adicional o “rescatar” los mismos.	Disminución de los conflictos sociales y por ende el gasto del Estado respecto a este rubro se reduciría.
		Costes de control o monitoreo de la ejecución de los proyectos.	El Estado debe supervisar la ejecución del gasto de los otros niveles de Gobierno, si este gasto ya es ejecutado por la empresa se ven reducidos los esfuerzos del Gobierno por supervisar y fiscalizar a dichas entidades del Estado.
		Disminución del Impuesto a la Renta recaudado.	El ahorro de gastos entorno al medio ambiente y crecimiento de áreas verdes para el Gobierno

		Gastos de implementación de la medida.	disminuiría.
Sociedad	Ambiental	El desarrollo de proyectos medioambientales puede involucrar impactos ambientales negativos que repercutan en otras zonas.	Tener un ambiente más sano y menores índices de contaminación.
	Político-social	La posibilidad de un conflicto social por priorizarse unos proyectos ambientales respecto a otros.	Departamentos o localidades con tranquilidad y estabilidad.
		Clima de inestabilidad e inseguridad en el país.	Percepción social que el Estado es garante del medio ambiente y se preocupa por la ejecución de proyectos ambientales.
	Económico	La deducción fiscal supone un menor nivel de ingresos fiscales que pueden reducir presupuesto en otras partidas del gasto público o aumentar el déficit público.	El pago de impuestos ya no sería destinado a proyectos ambientales sino a otros rubros que también resultan prioritarios para la población.
		La implementación de la regulación generaría gastos fiscales para el Estado que estaría reduciendo gastos en otros aspectos públicos.	

Fuente: Elaboración propia

- Inclusión de una variable ambiental para la distribución del canon minero

Grupo Afectado	Efectos	Costos	Beneficios
Empresas Mineras	Ambiental	No implica un costo ambiental.	La mejora en el medio ambiente beneficia también a la propia empresa y sus trabajadores que pueden desenvolverse en un espacio con mejores condiciones ambientales.
	Político-social	No implica un costo social.	Disminución de conflictos socioambientales.
			Mejora en su reputación al ver que sus recursos económicos son destinados a la mejora del ambiente.
			Clima de estabilidad, seguridad y tranquilidad en la zona respecto a

			la población local.
			Clima de inversión con mayor seguridad y mejores relaciones con el Gobierno Regional y Local al ver parte de sus recursos económicos invertido.
	Económico	Al ser los Gobiernos Regionales o Locales quienes ejecutan y seleccionan las inversiones medioambientales se puede generar un coste para las empresas. Por ejemplo, crear un área de conservación regional en espacios potenciales de prospección para nuevos yacimientos mineros.	Disminución en su gasto para mejorar las relaciones con la población.
			Disminución en su gasto en proyectos ambientales demandados por la población ante la ineficiencia en la ejecución del gasto del Gobierno Regional o Local.
Población local	Ambiental	Podría generarse un impacto respecto del proyecto ambiental, por ejemplo movimiento de tierra o traslado de árboles para la creación de un área verde.	Beneficio de futuras concesiones otorgadas dada la mejor aceptación social y ambiental de la actividad.
			Mayores áreas verdes y una gestión ambiental eficiente, disminuye los efectos del cambio climático y genera un espacio para el mejor desarrollo de la población en un ambiente sano.
	Político-social	Puede haber colectivos locales afectados de forma negativa y crear grupos de presión si los proyectos, por ejemplo, implican reducción de zonas de cultivo o disminución de espacios urbanos.	Menores conflictos socioambientales que ayudan a generar un clima de estabilidad, seguridad y tranquilidad de la localidad.
		Invertir tiempo en informarse sobre la regulación propuesta y sus beneficios.	Inclusión de actores locales en el mecanismo mediante las áreas de conservación privada.
	Económico	Reducción de un 5% de canon transferido a su localidad. .	La ejecución del gasto se ve asegurada respecto al medio ambiente, pues es condición para que se le otorgue mayores recursos al Gobierno Regional y Local.
			Los gastos y esfuerzos ahorrados se pueden destinar para priorizar otras obras de necesidad de la localidad.

			Mejor desarrollo de otras industrias como el comercio, turismo, agricultura y ganadería.
			Nuevas empresas locales y trabajadores se podrían ver beneficiados con los proyectos ambientales desarrollados.
			Beneficio de nuevas explotaciones mineras que se inicien en la zona al reducirse el descontento social.
Gobierno Regional y Local	Ambiental	No hay un costo ambiental.	No hay un beneficio ambiental.
	Político-social	Un coste político-social es el descontento de algunos colectivos afectados por los proyectos emprendidos.	Disminución de los problemas sociales o protestas entorno a la ineficiencia del Gobierno Regional o Local a ejecutar el gasto del canon minero y
		Problemas con la población pues tienen menos recursos para desarrollar obras o servicios públicos.	
		Podrían surgir conflictos entre el Gobierno Regional o Local con el Nacional por la disparidad de opiniones sobre las mediciones o diseño del proyecto ambiental. Especialmente si un Gobierno Regional o Local crea tener derecho al incentivo y el Gobierno Nacional lo deniegue.	Percepción de la población que sus Gobiernos Regionales y Locales sí cumplen con sus funciones medio ambientales puede generar crédito político o electoral.
		Pueden surgir conflictos político-sociales entre gobiernos de distintas zonas (sensación de trato discriminatorio, politización de los logros o de los fracasos, etc.)	Disminución de conflictos socioambientales con la empresa minera genera un clima de estabilidad en la localidad.
			Mejores relaciones con la empresa y el Gobierno Nacional al ejecutarse el gasto
	Económico	El Gobierno Regional y Local tendría que invertir en la realización de áreas verdes y desarrollo de una gestión ambiental eficiente.	Consideración del medio ambiente y las áreas verdes como un activo económico sujeto a valoración.
		Capacitación de personal técnico y planificación de su presupuesto para el desarrollo de proyectos medio ambientales.	Eficiencia en el gasto del canon respecto al medio ambiente.

		La transferencia del 5% estaría condicionada.	Disminución del gasto de conflictos socioambientales.
			Obtener un mayor porcentaje del canon es un beneficio económico.
Gobierno Nacional	Ambiental	No hay un costo ambiental.	No hay un beneficio ambiental.
	Político-social	Problemas entre el Gobierno Nacional con los Gobiernos Regionales o Locales por el diseño de la medida en base a los indicadores para el monitoreo y supervisión de los proyectos ambientales. En especial si los Gobiernos Regionales o Locales se creen merecedores del 5% y el Gobierno Nacional no lo considera así.	Compatibiliza el medio ambiente y los recursos económicos de la minería, disminuyendo los conflictos socioambientales
			Percepción de estabilidad y tranquilidad en el país que genera un ambiente óptimo para el crecimiento sostenible.
		Siempre pueden surgir nuevos conflictos sociales o políticos por una nueva regulación.	Mejor nivel de relación y coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales.
			Créditos político-electorales ya que el Estado es garante del medio ambiente y una mejora en las condiciones de agua y aire genera un beneficio para la población y por ende en el cumplimiento de las funciones del Gobierno.
	Económico	Los costos de la implementación de la medida.	El beneficio sería la posibilidad de liberar recursos públicos que antes se destinaban a proteger o limpiar el medioambiente.
Creación de indicadores ambientales y establecimiento de una línea de base ambiental por localidad.			
Costos en la supervisión y monitoreo por parte de las entidades competentes.			
Sociedad	Ambiental	Podría generarse un impacto ambiental en el momento de desarrollo del proyecto ambiental. Por ejemplo, movimiento de tierra o traslado de árboles para la creación de un área verde. El costo ambiental puede ser en esa zona o en otra.	Mayores áreas verdes y una gestión ambiental eficiente.
			Disminuir los efectos del cambio climático y genera un espacio para el mejor desarrollo de la sociedad en un ambiente sano.

	Político-social	Potencialmente pueden surgir conflictos entre las zonas sin yacimientos (y por tanto no susceptibles de obtener este incentivo) y las zonas que sí los perciben.	Puesto que los recursos económicos de la minería están siendo destinados en parte al medio ambiente, se logra visualizar su aporte y por ello los conflictos socioambientales se ven disminuidos.
			Clima de estabilidad y paz es beneficioso para la sociedad en su conjunto.
		Puede crearse una sensación de trato desigual en el conjunto de la sociedad.	Percepción social que el Estado es verdaderamente garante del medio ambiente y por ende cumple con sus funciones.
	Económico	No hay costo económico para la sociedad.	La inversión en medio ambiente se ve garantizada.
			Al condicionar en parte la distribución económica del canon, lo que genera es mayor eficiencia en los recursos del Estado.
			Los impuestos recaudados ya no serían destinados en gran medida al tema ambiental, pues mediante esta medida ya están siendo abarcados. Ahorro en la partida ambiental.
			Destinar los fondos que antes eran dirigidos al ambiente a otros bienes y servicios.

Fuente: Elaboración propia

- La alternativa de no regular

Grupo Afectado	Efecto	Costos	Beneficios
Empresas Mineras	Ambiental	Podría haber problemas en la salud de sus trabajadores puesto que el entorno no se encontraría bien ambientalmente.	No habría beneficio ambiental
	Político-social	Aumento de conflictos socioambientales, pudiendo paralizar obras, pues la percepción entre minería y medio ambiente es incompatible para la población.	No habría beneficio social.
		Mala reputación para la empresa.	
	Económico	El costo económico podría suponer que la población le	La empresa tiene total libertad y flexibilidad para tratar de resolver

		demande a la empresa proyectos ambientales como reforestación de zonas o de lo contrario se opondan a la obra, pues consideran que la empresa no tiene incentivos para ser responsable ambientalmente y el Estado es incapaz de fiscalizar eficientemente.	los conflictos sociales que le afecten negativamente.
		Mayor gasto en personal para resolver conflictos socioambientales.	La empresa no tiene que adaptarse a ninguna nueva regulación e incurrir en gastos por ello.
		Costos para las futuras concesiones otorgadas pues no tendrán aceptación social y ambiental en el desarrollo de su actividad.	
Población local	Ambiental	El costo ambiental podría darse al incrementarse los efectos del cambio climático.	No hay un beneficio ambiental.
	Político-social	La población se encontraría en un ambiente de inconformidad y conflicto social.	No tendrían que invertir tiempo en conocer e informarse sobre la regulación propuesta y sus beneficios.
		Ambiente intranquilo e inadecuado para el desarrollo de las personas.	
	Económico	En un mediano o corto plazo ante la degradación ambiental la población tendría que invertir de sus propios recursos para la mejora o conservación del medio ambiente para el desarrollo óptimo de otras actividades como agricultura, ganadería, turismo, etc.	El beneficio de no modificar la regulación sería que el Estado no tendría que invertir en la implementación de la medida.
		El gasto en torno a la salud de los pobladores se podría ver incrementado.	Utilizar mayores recursos económicos para otras obras prioritarias para la población.
		Podría haber menos inversión minera en la zona por el descontento social.	
Gobierno Regional y Local	Ambiental	No hay un coste ambiental.	No hay un beneficio ambiental.
	Político-social	Inestabilidad y protestas socioambientales que generan un ambiente de poca seguridad y tranquilidad en la zona.	La ejecución de elefantes blancos a discrecionalidad genera supuestos beneficios políticos a algunos gobernantes locales.
	Económico	Dentro de los costos podría estar la necesidad de gastar en	No estaría condicionado una parte del canon minero a una ejecución

		seguridad para aminorar los conflictos.	de proyectos en medio ambiente. Ni se vería disminuido el canon minero que se transfiere a los Gobiernos Regionales y Locales.
		Se podría ahuyentar inversiones en la localidad y otras actividades como el comercio o turismo podrían verse perjudicadas.	No tendrían que destinar recursos económicos y personal para la ejecución de proyectos medioambientales.
		Los Gobiernos Regionales y Locales están obligados a cumplir con sus funciones en materia ambiental.	
Gobierno Nacional	Ambiental	No hay un coste ambiental.	No hay un beneficio ambiental.
	Político-social	Inestabilidad y protestas socioambientales en el país que pueden generar paralización de proyectos mineros y una imagen de poca seguridad y tranquilidad en el país.	No hay un beneficio político - social.
		Los efectos del mal manejo ambiental pueden traer repercusiones graves al ambiente e incrementar el cambio climático generando protestas por parte de la población.	
	Económico	La necesidad de gastar en seguridad durante los conflictos, desarrollar mesas de diálogo, etc.	No tendría que incurrirse en gastos para implementar la medida regulatoria.
		Reducción de la inversión en el país por inseguridad de los proyectos mineros ante los conflictos.	
		Gastos en torno al medio ambiente, pues estaría dañado.	
Sociedad	Ambiental	El costo ambiental podría darse a mediano o largo plazo pues se incrementarían los efectos del cambio climático.	Se ahorrarían los costos ambientales del desarrollo de proyectos ambientales ya sean generados en la misma zona o en otra.
	Político-social	El clima de conflicto e inestabilidad, aumenta la sensación de inseguridad y disminuye la tranquilidad de las personas por el incremento de	El beneficio para la sociedad es el no-coste social de las alternativas previas como las situaciones de posible agravio comparativo entre regiones mineras y no mineras.

		conflictos sociales.	
	Económico	Los impuestos de la sociedad son destinados a reducir los conflictos sociales y crear mesas de diálogo.	No habría beneficio económico para la sociedad.
		Las inversiones que producen crecimiento en el país se ven paralizadas y hay mayor inestabilidad social.	
		Otras actividades como el comercio o turismo también se ven afectadas por los conflictos sociales y protestas.	

Fuente: Elaboración propia

3.2.5. Opción adecuada y justificación

Después de haber evaluado las alternativas elegirá la mejor opción. Para ello se va a desarrollar un cuadro de sistematización del ACB cualitativo de las cuatro alternativas centrándonos en la población local puesto que es el actor principal para el objetivo del presente trabajo. En el cuadro se consolidará los principales efectos ambientales, político-sociales y económicos tanto de la perspectiva de costo como de beneficio para las poblaciones locales en cada una de las alternativas desarrolladas. De esta manera, se logrará visualizar cuál de las alternativas desarrolladas resulta la más óptima. Cabe resaltar que se priorizarán determinados costos y beneficios en el cuadro, por lo que no se colocarán todos los desarrollados líneas arriba por cada alternativa.

3.2.5.1. *Análisis Costo- Beneficio Población Local*

	Costo			Beneficio		
	Ambiental	Político-Social	Económico	Ambiental	Político-Social	Económico
Regulación ambiental interna basada en incentivos económicos	El traslado de la maquinaria nueva o el desarrollo de la tecnología limpia podrían generar un impacto ambiental desfavorable.	Trato fiscal discriminatorio que se perciba como injusto por parte de empresas locales, de otros sectores económicos, o por parte de los ciudadanos.	Los recursos económicos en su zona se podrían ver disminuidos dependiendo de la disminución de contaminación por medio de tecnología limpia que realicen las empresas.	Un ambiente más sano y fuentes más limpias de aire y agua.	Disminución de los conflictos socioambientales y por ello mayor tranquilidad y estabilidad en la zona.	Los beneficios económicos pueden traducirse en mejor desarrollo de los cultivos por tener un aire o agua más limpios. Existiría más dinamismo en el comercio con más turistas en la zona ya que es un espacio de tranquilidad y seguridad.
Regulación ambiental externa basada en deducción fiscal	Los proyectos ambientales pueden generar impactos ambientales desfavorables en su desarrollo, por ejemplo movimiento de tierra.	Trato fiscal discriminatorio que se perciba como injusto por parte de empresas locales, de otros sectores económicos, o de los ciudadanos.	Habría una disminución en la transferencia del canon asignado dependiendo de los proyectos desarrollados.	El entorno de desarrollo de la población será un medio ambiente en mejores condiciones si los proyectos elegidos son justamente de mejora medioambiental.	Disminución de los conflictos socioambientales en la zona al percibirse que se invierte en medio ambiente.	Un entorno ambiental más adecuado puede ayudar al desarrollo de otras actividades económicas como la agricultura, el comercio, la ganadería o el turismo.
Inclusión de una variable ambiental	Podría generarse un impacto respecto del	Puede haber colectivos locales	Reducción de un 5% de canon	Mayores áreas verdes y una gestión	Disminución de los conflictos	La ejecución del gasto se ve asegurada

para la distribución del canon minero	proyecto ambiental, por ejemplo movimiento de tierra o traslado de árboles para la creación de un área verde	afectados de forma negativa y crear grupos de presión si los proyectos, por ejemplo, implican reducción de zonas de cultivo o disminución de espacios urbanos.	transferido a su localidad.	ambiental eficiente, disminuye los efectos del cambio climático y genera un espacio para el mejor desarrollo de la población en un ambiente sano.	socioambientales en la zona al percibirse que el Gobierno Regional o Local invierte en medio ambiente con los recursos económicos de la minería.	respecto al medio ambiente, pues es condición para que se le otorgue mayores recursos al Gobierno Regional y Local. Se aprovechan los recursos más eficientemente en la zona.
La alternativa de no regular	El costo ambiental podría darse al incrementarse los efectos del cambio climático.	La población se desarrollaría en un ambiente de inconformidad y conflicto social.	El gasto en torno a la salud de los pobladores se incrementaría.	No habría beneficio ambiental.	No tendrían que invertir tiempo en conocer e informarse sobre la regulación propuesta y sus beneficios.	El beneficio de no modificar la regulación podría ser que el Estado no tendría que invertir en la implementación de la medida.

Fuente: Elaboración propia

De este cuadro se puede apreciar que la alternativa de no regular, en ningún caso, resulta ser la óptima puesto que los costes son mayores que sus beneficios. En cuanto a las demás alternativas se aprecia que la que genera menos costos y mayores beneficios es la tercera alternativa que consiste en incluir una variable ambiental para la distribución del canon minero.

En las dos primeras alternativas las acciones de la empresa son determinantes para cumplir con el objetivo de las medidas. Si las empresas no se ven incentivadas por la deducción fiscal propuesta, no van a invertir en nuevas tecnologías limpias (primera alternativa) ni van a desarrollar los proyectos ambientales de los Gobiernos Regionales o Locales (segunda alternativa). Asimismo, el Estado no podrá estimar año a año el porcentaje exacto de descuento al Impuesto a la Renta que se aplicará a la empresa puesto que ello dependerá de las acciones de esta misma.

En cambio, en la tercera alternativa la decisión recae principalmente en los Gobiernos Regionales y Locales. Los mismos que, además de verse influidos por la población y presiones políticas, deben cumplir con las funciones medioambientales que la normativa establece. Así como también ejecutar los recursos económicos que se les transfieren.

Sin embargo, como este es un ACB cualitativo, puesto que no se ha podido obtener mayores datos para el análisis cuantitativo, se ha visto necesario utilizar otra herramienta complementaria que pueda ayudar a la elección de la mejor alternativa para este caso. En ese sentido, se ha visto necesario realizar un análisis multicriterio. De acuerdo a la OCDE¹⁴⁹ el análisis multicriterio es una metodología que se utiliza para comparar las alternativas de regulación, de forma transparente, aun sin contar con datos cuantitativos. Se identifica los objetivos desarrollados en el RIA y se compara las alternativas para saber cuáles de ellas cumple mejor dichos objetivos. Para su desarrollo se establece un rango y se evalúa el cumplimiento de los objetivos con determinado puntaje (puede ser cualquier numeración, por ejemplo del 0 al 5 o el 0 al 10). Asimismo, se puede colocar un peso a cada uno de los objetivos si se considera que uno es más importante que otro. Al final la mejor alternativa resulta de la de mayor puntaje.

¹⁴⁹ Organisation de Coopération et de Développement Économiques. Op cit. Pág. 15.

En el siguiente cuadro se puede apreciar el análisis multicriterio sobre la propuesta del presente trabajo. Se ha decidido trabajar sobre un puntaje del 0 al 4, donde 4 significa que la alternativa cumple totalmente el objetivo analizado y 0 quiere decir que no lo cumple. Además se ha decidido colocar un peso a cada uno de los tres objetivos de acuerdo a su priorización para efectos del presente trabajo, donde el número con mayor peso representa el objetivo con mayor prioridad. Para otorgar cada puntaje se ha utilizado la herramienta del ACB cualitativo para evaluar en qué medida la alternativa cumple con los objetivos. De esta manera se quiere reducir la subjetividad al momento de colocar el puntaje.

El análisis multicriterio elaborado evalúa en qué medida las tres alternativas de regulación desarrolladas cumplen con los tres objetivos indicados en el RIA, otorgándoles un puntaje y sustentando dicho puntaje en cada alternativa y objetivo. Cabe destacar que no se está incluyendo la alternativa de no regular pues no cumple con ninguno de los objetivos y por tanto su puntaje sería 0.

3.2.5.2. Análisis Multicriterio

Objetivos Propuestas	Proveer mecanismos que lleguen a generar incentivos que logren relacionar los recursos económicos de la minería con el medio ambiente (Peso 1)		Incentivar la ejecución del gasto del canon minero que reciben los Gobiernos Regionales y Locales (Peso 2)		Disminuir los conflictos socioambientales en los lugares donde se transfiere mayor canon minero (Peso 3)		Puntaje Total
	Sustento	Puntaje	Sustento	Puntaje	Sustento	Puntaje	
Regulación ambiental interna basada en incentivos económicos	Esta regulación solo incentiva a la empresa a que mejore ambientalmente su tecnología para que tenga beneficios fiscales. Es discrecionalidad de la empresa si quiere cambiar su tecnología a una más limpia.	1x1= 1	No incentiva a que se ejecute el gasto por parte de los Gobiernos Regionales y Locales, estos actores no participan directamente en la regulación propuesta.	2x0= 0	La regulación se aplica a un proceso interno de la empresa, por ello es poco percibido por la población. Es necesario que la empresa y el Estado tengan que invertir en brindar información suficiente. Además los pobladores pueden percibir que se están generando beneficios tributarios a la empresa, cuando esta debería por un sentido de responsabilidad social tener la mejor tecnología limpia.	3x2= 6	7
Regulación ambiental externa basada en deducción fiscal	Esta regulación si logra vincular los recursos económicos de la minería con el medio ambiente ya que las empresas invierten en proyectos ambientales en los Gobiernos Regionales o Locales y	1x2= 2	Esta medida logra cumplir en parte este objetivo porque la ejecución del gasto del Gobierno Regional o Local respecto al medio ambiente depende que la empresa quiera invertir en los proyectos listados puesto que quiere obtener el descuento fiscal.	2x2= 4	Mediante esta medida se logra disminuir los conflictos socioambientales ya que la población percibe que la empresa invierte en proyectos medioambientales de los Gobiernos Regionales y Locales. Sin embargo para que esta medida se haga efectiva	3x3=9	15

	tienen un incentivo de deducción fiscal.				depende de la empresa privada únicamente por tanto será discrecionalidad de cada empresa y de los incentivos fiscales que pueda obtener. Por tanto podría generarse presiones sociales de la población con la empresa.		
Inclusión de una variable ambiental para la distribución del canon minero	Esta medida cumple con el objetivo ya que transfiere 5% de los recursos de canon minero en base a la inversión en medio ambiente que haya realizado los Gobiernos Regionales o Locales.	1x2= 2	Esta alternativa está centrada en condicionar la transferencia del 5% del canon minero de los Gobiernos Regionales o Locales a la ejecución de su gasto en el medio ambiente.	2x3= 6	Mediante esta regulación se logra disminuir los conflictos socioambientales ya que son los Gobiernos Regionales y Locales quienes invierten en el medio ambiente y la población percibe que la transferencia de los recursos económicos del canon minero incentiva la inversión en el medio ambiente. De manera que la minería también tiene externalidades positivas y sus recursos son ejecutados en prioridades ambientales por las que la propia población reclama y no en elefantes blancos.	3x4=12	20

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo al análisis multicriterio se puede apreciar que la alternativa con mayor puntaje es la de inclusión de una variable ambiental para la distribución del canon minero. Asimismo ello se ve complementado con la evaluación arrojada por el ACB cualitativo donde la alternativa basada en el ICMS Ecológico Brasileiro muestra destacables beneficios y menores costes para los distintos actores en los rubros ambientales, sociales y económicos, en comparación con las otras tres alternativas. Precisamente esta propuesta sugiere la incorporación de una variable ambiental para la transferencia de canon minero a nivel regional y local que condicione su transferencia al nivel de gasto efectuado por las entidades del Estado.

Así se buscaría que parte de los recursos del canon minero destinados a los Gobiernos Regionales y Locales sean utilizados por los mismos para cuestiones medio ambientales y, en base a dicha inversión, le sea transferido a dichas entidades públicas mayores recursos económicos. Con ello se lograría reducir la percepción de incompatibilidad entre minería y medio ambiente que es base de los conflictos socioambientales. Al mismo tiempo las entidades del Estado estarían condicionadas en parte a su nivel de ejecución de gasto en medio ambiente para recibir mayor proporción de ingresos correspondientes al canon minero.

De este modo se verían resueltos los problemas y cumplidos los objetivos desarrollados en el presente RIA respecto a vincular los recursos económicos de la minería para el medio ambiente. La percepción de incompatibilidad de la población entre minería y medio ambiente en gran medida se encuentra determinada por la regulación y el rol del Estado. Por ende, depende de su actuación que esta percepción disminuya o aumente. Si bien este es un análisis preliminar, puede servir de base para una evaluación integral de la regulación necesaria para resolver el problema planteado en el presente informe.

III. Conclusiones

En primer lugar, la actividad minera en el Perú se desarrolla desde la época pre Incaica y ha continuado hasta el día de hoy. Su regulación se basa en fundamentos jurídicos, económicos y socioambientales; y es recién en el siglo pasado que se inicia una regulación minera formal desde la lógica de los principios de legalidad y tipicidad para brindar seguridad jurídica tanto a la sociedad como a los inversionistas. La minería involucra recursos económicos importantes para el crecimiento del país. De forma que mediante la regulación minera se determina mecanismos de pago y retribución que la empresa minera debe realizar al Estado Peruano por la extracción de los recursos naturales que son patrimonio de la Nación. El canon es una de estas formas de retribución y consiste en la participación de la renta económica ya recaudada dispuesta por el Estado a favor de los Gobiernos Regionales y Locales de las zonas de explotación de recursos. Su distribución depende de una serie de factores que establecen cuánto dinero ingresará por canon minero a cada uno de los departamentos donde se extraen minerales.

Los departamentos con mayor transferencia de canon minero del 2005 hasta el 2013 han sido principalmente Ancash, Cajamarca, La Libertad, Arequipa, Tacna y Moquegua. Respecto al nivel de ejecución del gasto correspondiente al canon minero en casi todos los departamentos se ejecuta aproximadamente el 50% de canon minero transferido. Esta situación es sumamente preocupante al quedar importantes recursos económicos sin utilizarse.

En segundo lugar, los conflictos sociales en el Perú son mayormente de tipo socioambiental y estos han venido incrementándose desde el 2008 hasta el 2013. Se destaca que los seis departamentos con mayor transferencia de canon minero también son los principales departamentos con mayor conflictividad social y mayores conflictos socioambientales específicamente. De acuerdo a la sistematización de los conflictos realizada en los anexos del presente trabajo se puede ver que la gran mayoría de los conflictos socioambientales identificados en los seis departamentos responden a conflictos relacionados con minería y medio ambiente, donde se teme a la posible contaminación ambiental que puede realizar la empresa en la zona y los impactos medio ambientales que puede generar la actividad. Por lo que hay una

percepción de incompatibilidad entre la minería y el medio ambiente por parte de la población.

En tercer lugar, el RIA se ha elaborado sobre la base de comprobar que los departamentos con mayor transferencia de canon minero son los que tienen mayor conflictividad social relacionada con minería y medio ambiente. Esto se debe a que existe un problema de percepción de incompatibilidad entre minería y medio ambiente por parte de la población. En ese sentido, se desarrolla un RIA con la finalidad de buscar vincular los recursos económicos de la minería con el medio ambiente por medio de la regulación del canon minero. De manera que para la aplicación del RIA se ha utilizado dicha herramienta de forma flexible y no rígida, respondiendo así a los fines para los cuales se está aplicando. De esta forma se considera la posibilidad que un RIA pueda ser desarrollado para una propuesta de modificación normativa sustancial y no únicamente sobre una norma existente o una futura.

El objetivo principal del trabajo es disminuir la percepción de incompatibilidad entre la actividad de minería y el medio ambiente. En ese sentido, las regulaciones propuestas buscarán disminuir los conflictos socioambientales en los lugares donde hay mayor explotación minera y por ende mayor transferencia de canon minero. También tienen por objetivo incentivar la ejecución del gasto del canon minero que reciben los Gobiernos Regionales y Locales. Finalmente, se pretende provean mecanismos que generen incentivos para relacionar los recursos económicos de la minería con el medio ambiente.

El ACB cualitativo de las cuatro alternativas desarrolladas resultó insuficiente por no contener datos cuantitativos. En ese sentido fue necesario priorizar el análisis sobre los pobladores locales y utilizar una herramienta complementaria como el análisis multicriterio. En relación al ACB cualitativo se constató que dos de las alternativas desarrolladas dependen principalmente de la discrecionalidad de la empresa minera y su evaluación interna para determinar si se adopta o no la medida. A diferencia del caso de la alternativa seleccionada que se centra en los Gobiernos Regionales y Locales y no involucra a la empresa directamente.

Además, el análisis multicriterio mostró que una alternativa lograba cumplir en mayor medida los objetivos pretendidos en el presente trabajo. De esa forma se determinó que la opción más adecuada es la de inclusión de una variable ambiental para la distribución del canon minero. Esta opción busca que parte de los recursos destinados de la minería a los Gobiernos Regionales y Locales sean utilizados por los mismos para cuestiones medio ambientales y en base a dicha inversión le sea transferido a dichas entidades públicas mayores recursos económicos. Con ello se lograría reducir la percepción de incompatibilidad entre minería y medio ambiente que es la base de los conflictos socioambientales. Al mismo tiempo las entidades del Estado estarían condicionando parte de la ejecución del gasto en medio ambiente para recibir mayor proporción de ingresos correspondientes al canon minero.

Finalmente, de la aplicación del RIA desarrollada se puede hacer las siguientes reflexiones:

- Para el desarrollo de una regulación o normativa es necesario un análisis integral que logre articular desde diferentes enfoques interdisciplinarios las posibles respuestas a un problema determinado. Asimismo, es fundamental que desde el Estado se establezca cual es el objetivo que se quiere conseguir para dar solución al problema, considerando que dependiendo del objetivo se trazarán las posibles alternativas. Por ello, si no se logra definir y limitar bien el objetivo y el problema la regulación propuesta desde su base tendrá problemas en su diseño e implementación. En ese sentido, nunca se debe establecer a priori que solo existe una alternativa para solucionar un problema o alcanzar un objetivo. Del desarrollo del RIA puede surgir que sea necesario complementar las distintas alternativas o implementar otras que no estaban consideradas en un inicio, pues los costos de la aplicación de la medida no son compensados por los beneficios.
- No se debe considerar solo una alternativa basándose en la aplicación exitosa en otro país. Si bien los casos positivos en otros países pueden servir para el desarrollo de determinada política, este debe de ser un paso posterior a la identificación del problema, objetivos, alternativas y ACB de ellas. Sobre todo porque se debe tomar en cuenta que pueden influir muchos factores exógenos

en las distintas realidades desde planos institucionales, políticos, económicos y sociales.

- Un ACB cualitativo resulta insuficiente en términos de valorar la mejor alternativa. Por ello es necesario nutrirse de otras herramientas que puedan colaborar para que la decisión de la alternativa a adoptarse sea menos subjetiva y discrecional, como en este caso ha sido el análisis multicriterio. Sin embargo, en cualquier caso lo óptimo es contar con los datos cuantitativos.
- Con el fin de transparentar la regulación escogida el ACB debe realizarse considerando todos los actores que podrían verse afectados por la medida y desde los distintos aspectos jurídicos, sociales, económicos, ambientales, entre otros. De este modo, se puede evaluar si hay actores que tendrán que cargar mayores costos y serán otros los que obtendrán mayores beneficios con la medida adoptada. De esta forma, se podrá analizar si la alternativa propuesta puede ser justificada y los costes de un lado pueden compensar los beneficios del otro respondiendo claramente al objetivo que se quiere obtener.
- Para el diseño de una nueva regulación resulta relevante incluir mecanismos de participación y de consulta en la población pues de esa manera se puede visualizar mejor los impactos de la regulación que se quiere implementar en los distintos actores. Asimismo, se establecen escenarios de mayor legitimidad y transparencia que hacen posible una mejor rendición de cuentas desde los tomadores de decisiones del Estado hacia la población.
- Resulta recomendable para el desarrollo de una nueva regulación que se implemente un piloto a modo de ejemplo para conocer mejor los impactos directos e indirectos que puede ocasionar la medida. De esta forma, se puede desarrollar una línea base respecto a la situación anterior a la regulación y compararla después de haber implementado la medida para saber sus reales impactos.
- Toda eficaz regulación necesita de indicadores que sean medibles y muestren la efectividad y eficiencia de la medida a corto, mediano y largo plazo y sobre los distintos actores. De manera que también se debe prever mecanismos para

la recolección de datos e información relevante que ayude a construir una medida desde su diseño, implementación y evaluación.

- La regulación implica costos para el Estado. Regular no es la única forma que el Estado tiene para resolver los problemas y cumplir con los objetivos propuestos. Por ende, se debe entender que no es obligación del Estado resolver los problemas únicamente regulando. Por lo tanto no puede justificarse la decisión de regular únicamente considerando que se está dando cumplimiento a la normativa. La regulación debe de ser vista como la última ratio a escoger por el legislador y por ende debe realizarse en el caso de que esté justificada. Dicha justificación debe de ser desarrollada y analizada desde una lógica de costes y beneficios donde se muestre que la intervención por parte del Estado es la opción más eficiente.
- El RIA aún no se encuentra incorporado en el Perú y el ACB se desarrolla a un nivel muy incipiente en los proyectos de ley donde solo se limita a mencionar que la implementación de la medida no va a involucrar nuevos gastos para el Estado o la necesidad de recaudar más tributos. Buscar la calidad normativa es un reto en el país sobre todo considerando el alto grado de ineficiencia y burocracia por parte de la administración pública.

El presente trabajo constituye un análisis preliminar desde el plano cualitativo que pueda servir de base para una evaluación integral de la regulación que logre responder, mediante datos cuantitativos, cuál es la mejor alternativa para disminuir la percepción de incompatibilidad entre la minería y el medio ambiente por parte de la población.

IV. Bibliografía

- Auby J y Perroud T, *La Evaluación de Impacto Regulatorio* (Instituto Nacional de Administración Pública, 1º edición, 2013)
- Belaúnde Moreyra M. Derecho Minero y Concesión. Editorial: San Marcos. Lima 2011.
- Constitución Brasileira
- Comisión Europea, ‘Impact Assessment Guidelines’ (Diario Oficial de la Unión Europea, Bruselas, 2008- 2009)
- Congreso de la República del Perú. Proyecto de Ley N° 625/2000.CR. Disponible en:
<file:///C:/Users/Usuario/Downloads/00625%2019%20OCT%202000.pdf>
- Constitución Política del Perú.
- Cooter R y Ulen T. *Derecho y Economía*. (Fondo de Cultura Económica. México 2002).
- Defensoría del Pueblo – Dirección de la Unidad de Conflictos Sociales, ‘Reporte de Conflictos Sociales N° 60’ (Febrero 2009). Disponible en:
http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2009/conflictos_reporte_60_febrero2009-1.pdf
- Defensoría del Pueblo – Adjuntía Para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, ‘Reporte de Conflictos Sociales N° 74’ (Abril 2010). Disponible en:
<http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2010/Reporte-74.pdf>
- Defensoría del Pueblo – Adjuntía Para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, ‘Reporte de Conflictos Sociales N° 89’ (Julio 2011). Disponible en:
<http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2011/Reporte-89.pdf>

- Defensoría del Pueblo – Adjuntía Para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, ‘Reporte de Conflictos Sociales N° 103’ (Septiembre 2012). Disponible en:
<http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2012/Reporte-Mensual-de-Conflictos--Sociales-N-103---Sept-2012.pdf>

- Defensoría del Pueblo – Adjuntía Para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, ‘Reporte de Conflictos Sociales N° 117’ (Noviembre 2013). Disponible en:
<http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2013/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N-117-noviembre---2013.pdf>

- Decreto Supremo N° 014-92-EM. Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería

- Dominguez A, ‘El juego de jalar la cuerda entre las Empresas y las Comunidades’ (2010) Enfoque Derecho. Disponible en:
<http://www.enfoquederecho.com/?q=node/292/>

- El Comercio (22 de Mayo 2011). Disponible en:
<http://elcomercio.pe/ciencias/planeta/11-anos-derrame-mercurio-sintomas-persisten-choropampa-noticia-761410>

- El Comercio (01 de Diciembre 2011). Disponible en:
<http://elcomercio.pe/economia/peru/suspension-conga-impactara-nuestra-economia-efectos-se-sentiran-2012-noticia-1341929>

- Franks D, ‘Evaluación del impacto social de los proyectos de recursos’ (2012) The International Mining for Development Centre, Mining for Development: Guide to Australian Practice. Disponible en:
http://im4dc.org/wp-content/uploads/2012/01/UWA_1833_Paper-2_Spanish-version_Social-impactassessment-of-resource-projects.pdf

- Gestión, El Diario de Economía y Negocios del Perú (30 de Marzo de 2012). Disponible en: <http://gestion.pe/noticia/1394887/canon-minero-regiones-crecio-328-2011>.

- Gestión, el Diario de Economía y Negocios del Perú, (14 de Junio de 2012).
Disponible en: <http://gestion.pe/2012/06/14/economia/gobierno-regionales-tienen-estancados-us-3500-millones-canon-minero-2005175>

- Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, 'Compendio de Yacimientos Minerales del Perú' (2007) capítulo 1 Historia de la Minería del Perú.
Disponible en:
<http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/libros/2007/cyamientos/cap01.pdf>.

- Instituto Peruano de Economía. Disponible en: <http://ipe.org.pe/comentario-diario/09-8-2013/quien-corta-peor-el-jamon>

- Kirkpatrick C y Parker D. *Regulatory Impact Assessment. Towards Better Regulation?* (Cheltenham; Northampton: Edward Elgar, cop. 2007).

- Krugman P, Wells R y Graddy K. *Fundamentos de Economía*. (Segunda Edición. Editorial Reverté. Barcelona 2013).

- Lasheras M. *La regulación económica de los servicios públicos*. (1999).

- Ley de Canon. Ley N° 27506.

- Ley General del Ambiente. Ley N° 28611.

- Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. Ley N° 26821.

- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867 y Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972.

- Ley de Regalía Minera. Ley N° 28258.

- Ley y reglamento que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado. Ley N° 29230 y Decreto Supremo N° 005-2014-EF. Disponible en:
<http://www.obrasporimpuestos.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?are=0&prf=0&jer=5&sec=0>

- Martínez Z, ‘Guías prácticas para situaciones específicas: manejo de riesgos y preparación para respuestas a emergencias mineras’ (2003) Naciones Unidas Comisión Económica para América Latina y el Caribe, División de Recursos Naturales e Infraestructura, Serie 57 Recursos Naturales e Infraestructura. Disponible en: <http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/0/13040/Lcl1936e.pdf>

- Ministerio de Energía y Minas – Iniciativa Para la Transparencia de las Industrias Extractivas en el Perú, ‘Origen, Distribución y Uso de las Rentas de la Extracción de los Recursos Minerales’ (2008, Cartilla Informativa N° 2). Disponible en:
http://eitiperu.minem.gob.pe/images/archivos/cartillas/CARTILLA_2_EITI_final_23_marzo.pdf

- Molina A y Guarnido A. *Fallos de Mercado y Regulación Pública*. Temas actuales de Economía. (Universidad de Almería 2009).

- Organisation de Coopération et de Développement Économiques, ‘Introductory Handbook for Undertaking Regulatory Impact Analysis (RIA)’ (2008). Disponible en:
<http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/44789472.pdf>

- Perú 21 (04 de Diciembre de 2011). Disponible en:
<http://peru21.pe/2011/12/04/actualidad/se-gastar-mejor-canon-minero-evitar-conflictos-2001775>

- Perú 21 (29 de Mayo 2014). Disponible en: <http://peru21.pe/economia/gana-peru-plantea-que-canon-no-usado-vaya-fondo-social-2185397>.

- Portal Web de la Comisión Europea. Disponible en: http://ec.europa.eu/smart-regulation/index_en.htm

- Portal Web de la Defensoría del Pueblo – Reportes mensuales de Conflictos Sociales. Disponible en: <http://www.defensoria.gob.pe/temas.php?des=3#r>

- Portal Web ICMS Ecológico. Disponible en:
<http://www.icmsecologico.org.br/>

- Portal Web del Ministerio de Economía y Finanzas. Disponible en:
http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2296%3Acanon-metodologia-de-distribucion&catid=150&Itemid=100848&lang=en
- Portal Web del Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo. Disponible en: <http://www.pnud.org.ni/noticias/564>
- Portal Web del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Perú. Disponible en: <http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/contenido.jsp?ID=11>
- Radio Programas del Perú (14 de Junio de 2012). Disponible en: [http://www.rpp.com.pe/2012-06-14-regiones-de-peru-malgastan-ingresos-mineros-por-us\\$-3-500-millones-noticia_492235.html](http://www.rpp.com.pe/2012-06-14-regiones-de-peru-malgastan-ingresos-mineros-por-us$-3-500-millones-noticia_492235.html)
- Radio Programas del Perú (20 de Septiembre de 2013). Disponible en: http://www.rpp.com.pe/2013-09-20-humala-alcaldes-usan-canon-minero-para-hacer-elefantes-blancos-noticia_632856.html
- Reglamento para la Protección Ambiental en la Actividad Minero Metalúrgica. Decreto Supremo N° 016-93-EM.
- Sentencia del Tribunal Constitucional N° 0048-2004-PI/TC
- Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, ‘¿Qué es el Canon Minero?’ (2013). Disponible en: <http://www.snmpe.org.pe/informes-y-publicaciones-snmpe/canon/canon-en-cifras/que-es-el-canon-minero.html>
- Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía, ‘Reporte Canon Minero. Transferencias 2013’ (2014). Disponible en:
<file:///C:/Users/Usuario/Downloads/pdf-76205-reporte-canon-minero-2013.pdf>
- Voz Democrática (20 de Junio de 2012). Disponible en:
<http://vozdemocratica.wordpress.com/2012/06/20/distribucion-del-canon-minero-a-gobiernos-locales-2008-2011/>

V. Anexos

5.1. Anexo 1: Evolución de los conflictos sociales en el Perú.

En base a la información recabada de los reportes de la Defensoría del Pueblo seleccionados en el presente trabajo, en esta sección se ha extraído los cuadros de dichos documentos. Los cuadros están referidos a la evolución de los conflictos sociales entre el 2008 y el 2013. Esta información ha servido para construir el Grafico 1 sobre la evolución de los conflictos sociales de 2008-2013.

El reporte N° 60 de febrero 2009 de la Defensoría del Pueblo muestra que los conflictos sociales entre febrero 2008 y 2009 han crecido constantemente a través del tiempo. Esta se grafica en la imagen 1.

Imagen 1: Evolución de los conflictos sociales de febrero 2008 a febrero 2009



Fuente: Defensoría del Pueblo – Reporte N° 60 febrero 2009

El reporte N° 74 de abril 2010 de la Defensoría del Pueblo nos muestra que los conflictos sociales entre abril 2009 y 2010 se han mantenido constantes a través del tiempo. Esta se grafica en la imagen 2.

Imagen 2: Evolución de los conflictos sociales de Abril 2009 a Abril 2010



Fuente: Defensoría del Pueblo – Reporte N° 74 Abril 2010

El reporte N° 89 de julio 2011 de la Defensoría del Pueblo muestra que los conflictos sociales entre julio 2010 y 2011 han decrecido constantes a través del tiempo. Esto se grafica en la imagen 3.

Imagen 3: Evolución de los conflictos sociales de Julio 2010 a Julio 2011

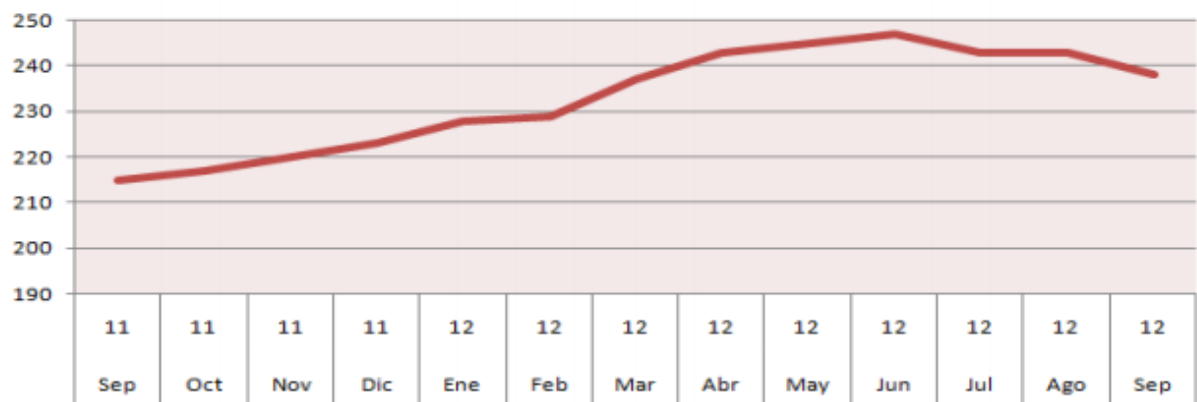


Fuente: Defensoría del Pueblo – Reporte N° 89 Julio 2011

El reporte N° 103 de septiembre 2012 de la Defensoría del Pueblo muestra que los conflictos sociales entre septiembre 2011 y 2012 han venido creciendo para después

mantenerse estables con un pequeño decrecimiento a través del tiempo. Esto se grafica en la imagen 4.

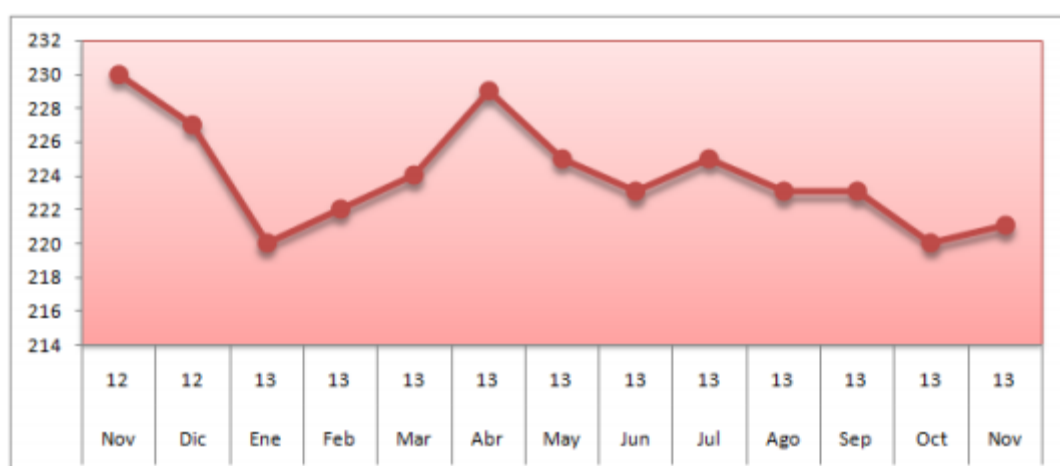
Imagen 4: Evolución de los conflictos sociales de septiembre 2011 a septiembre 2012



Fuente: Defensoría del Pueblo – Reporte N° 103 Septiembre 2012

Finalmente, el reporte N° 117 de noviembre 2013 de la Defensoría del Pueblo muestra que los conflictos sociales entre noviembre 2012 y 2013 han sido bastante variables a través del tiempo. Esto se grafica en la imagen 5.

Imagen 5: Evolución de los conflictos sociales de noviembre 2012 a noviembre 2013



Fuente: Defensoría del Pueblo – Reporte N° 117 Noviembre 2013

5.2. Anexo 2: Sistematización de los conflictos socioambientales de los 6 departamentos con mayor transferencia de canon minero respecto al Reporte N° 60 de febrero 2009 de la Defensoría del Pueblo

Departamento	Conflictos sociales activos y latentes	Por tipo	Descripción de conflictos socioambientales activos	Relacionados con minería y medio ambiente
Ancash	10 (7 activos y 3 latentes)	Socio ambiental: (80%) 5 activos y 3 latentes Asunto de Gobierno Nacional: 1 activo (10%) Laboral: 1 activo (10%)	Tipo: Socioambiental Caso: Pobladores de los caseríos de Buenos Aires y Yacucancha exigen a la empresa minera la instalación de la planta concentradora, proyectos de desarrollo y empleo para la población. Ubicación: Caseríos de Buenos Aires, Yacucancha, Distrito de Ticapampa, provincia de Recuay. Actores: Representantes de los caseríos de Buenos Aires, Yacucancha, pobladores de Alto Perú, compañía minera “Toma la Mano”.	De los 5 conflictos socioambientales activos 4 de ellos están relacionados con minería y específicamente con contaminación ambiental o supuesta contaminación. Es decir, casi el 80% de los conflictos socioambientales activos en Ancash tienen relación con minería y medio ambiente.
			Tipo: Socioambiental. Caso: Oposición de la Comisión de Regantes de Parón a la realización de descargas de la laguna de Parón por parte de DUKE ENERGY. Ubicación: Caserío Laguna de Parón, distrito de Huaylas, provincia de Caraz Actores: Alcalde de la Municipalidad Provincial de Caraz, Presidente del Comité de Regantes de la cuenca del río Llullan, Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Caraz, Comunidad de Cruz de Mayo, Empresa DUKE ENERGY Egenor S.A.	
			Tipo: Socioambiental. Caso. Conflicto por presunto incumplimiento de empresa Antamina y posible contaminación minera. Ubicación: Caserío San Antonio de Juprog, distrito de San Marcos, provincia de Huari Actores. Pobladores/as del Caserío “San Antonio de Juprog”, Compañía Minera “Antamina” S.A.	
			Tipo: Socioambiental	

			<p>Caso: La comunidad reclama por el presunto incumplimiento de compromisos asumidos por la compañía minera, en especial la construcción de una institución educativa y aportes para el desarrollo de la comunidad.</p> <p>Ubicación: Comunidad de Vicos, Distrito de Marcara, provincia de Carhuaz.</p> <p>Actores: Comunidad Campesina de Vicos, compañía minera “Toma la Mano”.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental</p> <p>Caso. La comunidad campesina de Tumpa denuncia la supuesta contaminación de las aguas subterráneas, debido al mal manejo de las canchas de relave de la empresa minera Nueva California. La comunidad indica que ocurrió un accidente (desborde de cancha de ripio-relave) y que ha afectado a árboles de eucalipto y reclama indemnización y fiscalización ambiental.</p> <p>Ubicación. Comunidad de Tumpa, Distrito de Mancos, provincia de Yungay</p> <p>Actores. Comunidad Campesina de Tumpa y Compañía Minera Nueva California.</p>	
Cajamarca	18 (14 activos y 4 latentes)	<p>Asuntos de Gobierno Local: 3 activos (17%)</p> <p>Asuntos de Gobierno Regional: 1 activo (6%)</p> <p>Socio ambiental: 11 (61%) 6 activos 5 latentes</p> <p>Asuntos de gobierno nacional: 2 activos (11%)</p> <p>Electoral: 1 activo (5%)</p>	<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso. La asociación de ex trabajadores de Cia. Minera Colquirrumi exige que se reconozca la propiedad del terreno ubicado en La Lechería, donde se ubica una zona de remediación de pasivos ambientales.</p> <p>Ubicación: Distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc</p> <p>Actores. Asociación de ex trabajadores de Cia. Minera Colquirrumi SA, presidente de asociación Dagoberto Urrutia Morales, Compañía Minera Colquirrumi SA., Gerente de Operaciones Ing. Gustavo Jo Iturizaga, Juzgado Mixto de Hualgayoc – Sala Mixta de Chota.</p>	De los 6 conflictos socioambientales activos 4 de ellos están relacionados con minería y específicamente con contaminación ambiental o supuesta contaminación. Es decir, casi el 67% de los conflictos socioambientales activos en Cajamarca tienen relación con minería y medio ambiente.
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso. Oposición de la población a la explotación minero-informal ubicada en zona en litigio.</p> <p>Ubicación: Distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba.</p> <p>Actores. Mineras Algamarca y Sullidén Shahuindo, Pobladores del CP Chuquibamba, Gobierno Regional de Cajamarca.</p>	
			Tipo: Socioambiental.	

		<p>Caso. Temor de la población por la contaminación ambiental del río Mangaybamba y desacuerdo de la población por el uso del aporte económico voluntario, extraordinario y temporal denominado “Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo”. Además la población demanda proyectos de desarrollo sostenible para la zona.</p> <p>Ubicación: Comunidades campesinas El Tingo, Anexo Predio La Jalca, Caseríos de Coymolache y Pilancones, distrito de Hualgayoc, provincia de Hualgayoc.</p> <p>Actores: Municipalidad distrital de Hualgayoc dos Centros Poblados: Moran y Coimolache, 40 caseríos, Empresa Minera Gold Fields-La Cima S.A, Representante de las Rondas Campesinas, Mesa de diálogo de Hualgayoc, Frente Único de los Interés del Pueblo de Hualgayoc, Gobernación, Frente de Defensa de los Intereses de Hualgayoc y Asociación de Trabajadores del Pueblo de Hualgayoc.</p>	
		<p>Tipo: Socioambiental</p> <p>Ubicación: Centro Poblado de La Ramada, Distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, Departamento de Cajamarca.</p> <p>Caso: Demandan la recuperación de manantiales Rume Rume, Perga Perga y Cuyoc, para uso de consumo humano y riego tecnificado, que viene utilizando la empresa Minera Yanacocha.</p> <p>Actores. Minera Yanacocha, Comité de agua potable del Centro Poblado La Ramada (presidente Emilio Yopla Chilon), Canal de Riego La Ramada (presidente José Anastasio Yopla Cueva), Administración Técnica del Distrito de Riego del Jequetepeque, Administración Técnica del Distrito de Riego de Cajamarca, Instituto</p> <p>Nacional de Recursos Naturales, Municipalidad Provincial de Cajamarca.</p>	
		<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso. Los pobladores se oponen al proyecto minero La Zanja por temor a la contaminación.</p> <p>Ubicación: Distrito de Pulán, provincia de Santa Cruz.</p> <p>Actores. Pobladores de Pulán, Minera la Zanja, Federación de Rondas campesinas de la provincia de Santa Cruz, Frente de Defensa de Santa Cruz, Municipalidad</p>	

			<p>Provincial de Santa Cruz, Municipalidad Distrital de Pulan Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chancay.</p> <p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Demandan la construcción de un nuevo sistema de agua por parte de la empresa Minera Yanacocha.</p> <p>Ubicación: Centro poblado de Huambocancha Baja, caserío el Batán, distrito de Cajamarca.</p> <p>Actores: Comité Directivo del Sistema de Agua Potable del centro Poblado de Huambocancha Baja, caserío El Batán. Representado por su Presidente Javier Tafur Flores y Empresa Minera Yanacocha.</p>	
La Libertad	6	<p>Socio ambiental: 3 (50%)</p> <p>2 activos 1 latente</p> <p>Asuntos de gobierno local: 2 activos (33%)</p>	<p>Tipo: Socioambiental</p> <p>Caso: La Asociación Marianista de Acción Social (AMAS), exige se indemnice a la gente afectada por el derrame de petróleo en el Caserío Plazapampa, además de remediar y recuperar los suelos afectados.</p> <p>Ubicación Caserío de Plazapampa, distrito de Salpo, Provincia de Otuzco.</p> <p>Actores. La Asociación Marianista de Acción Social (AMAS), la empresa minera Barrick Misquichilca S.A.; empresa PRIMAX (encargada del traslado del petróleo); Ministerio de Transportes y Comunicaciones; la Dirección de Gestión Ambiental representada por el ingeniero Juan Arévalo, el Organismo de Supervisión de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN); la Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito y Materia Ambiental de La Libertad, representada por el Dr. César Chávez y la Dirección Territorial Policial (DIRTEPOL).</p> <p>Tipo: Socioambiental</p> <p>Caso: Las rondas campesinas se oponen a la explotación minera por posible contaminación.</p> <p>Ubicación: Distrito de Huaranchal, provincia de Otuzco</p> <p>Actores. Rondas Campesinas del distrito de Huaranchal, ronderos de Chuquizongo. Empresa minera Sienna Minerals S. A. C</p>	<p>De los 2 conflictos socioambientales activos 1 de ellos están relacionados con minería y específicamente con contaminación ambiental o supuesta contaminación. Es decir, casi el 50% de los conflictos socioambientales activos en La Libertad tienen relación con minería y medio ambiente.</p>

Arequipa	6	Socio ambiental: 3 (50%) 1 activo y 2 latentes Asuntos de gobierno nacional 1 activo (17%) Laboral 1 activo (17%) Asuntos de gobierno local 1 activo (17%)	Tipo: Socioambiental Caso. Autoridades regionales, locales y sociedad civil rechazan la instalación y construcción de plantas harineras y aceite de pescado en distritos de Arequipa porque sostienen ocasionarían daño ambiental y se debe proteger los recursos hidrobiológicos para el consumo humano. Ubicación: Arequipa Actores. Sindicato de Pescadores Artesanales de la provincia de Camaná, Gobierno Regional de Arequipa, alcaldes distritales de Camaná, sociedad civil, Ministerio de la Producción.	El conflicto identificado en Arequipa no tiene relación con minería y medio ambiente. (0%)
Tacna	7	Socio ambiental: 5 (71%) 4 activos, 1 latente Asuntos de Gobierno Nacional 1 activo (14%) Demarcacion territorial 1 activo (14%)	<div> Tipo: Socioambiental. Caso: Desacuerdo por parte de los alcaldes provinciales de Jorge Basadre, Tarata, Candarave y alcalde distrital de Ite de por la firma del Convenio entre Southern Perú y la UNI para estudio de factibilidad de la construcción de la represa de callazas, por no haber sido consultados y por temor a que el almacenamiento de agua afecte a sus agricultores. Ubicación: Represa de Callazas, Provincia de Candarave Actores: Alcaldes provinciales de Jorge Basadre, Tarata, Candarave y alcalde distrital de Ite; Southern Perú y alcalde distrital de Quilahuani. </div> <div> Tipo: Socioambiental. Caso: Demanda de la Federación Agropecuaria para el cierre de pozos informales de agua utilizados por agricultores del distrito La Yarada. Ubicación: Distrito La Yarada, provincia de Tacna. Actores: Federación Agropecuaria e Industrial “Fronteras Vivas del Sur” (FEAGROSUR), Administración Técnica del Distrito de Riego Tacna. </div>	De los 4 conflictos socioambientales activos 2 de ellos están relacionados con minería y específicamente con contaminación ambiental o supuesta contaminación. Es decir, casi el 50% de los conflictos socioambientales en Tacna tienen relación con minería y medio ambiente.

			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Oposición del Municipio provincial y organizaciones sociales a la extracción de aguas superficiales y subterráneas por parte de SPCC a favor de sus centros mineros Toquepala (Tacna) y Cuajone (Moquegua), que estarían afectando los ríos Callazas, Tacalaya y Salado.</p> <p>Ubicación: Provincia de Candarave.</p> <p>Actores: Municipalidad Provincial de Candarave, Southern Perú Copper Corporation (SPCC), Junta de usuarios de Candarave, Coordinadora Regional de Comunidades Afectadas CORECAMI Tacna.</p>	
Moquegua	5	Socio ambiental: 2 (40%) 2 activos Laboral 1 latente (20%) Asuntos de gobierno nacional 1 activo (20%) Otros 1 activo (20%)	<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Agricultores se oponen al uso de las aguas subterráneas y la desviación del cauce el río Asana para el proyecto minero Quellaveco.</p> <p>Ubicación: Distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto.</p> <p>Actores: Agricultores de 28 comunidades andinas de la zona, Minera Quellaveco S.A., Autoridad Técnica de Riego (ATDR – Moquegua), Dirección Regional Agraria y CORECAMI.</p>	De los 2 conflictos socioambientales activos 2 de ellos están relacionados con minería y específicamente con contaminación ambiental o supuesta contaminación. Es decir, casi el 100% de los conflictos socioambientales en Moquegua tienen relación con minería y medio ambiente.
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Organizaciones sociales de Ilo reclaman compensación por la explotación de recursos mineros y ante daños ambientales.</p> <p>Ubicación: Distrito de Ilo, provincia de Ilo.</p> <p>Actores: Población de Ilo y Frente de Defensa de los Intereses de Moquegua y la empresa minera Southern Perú Copper Corporation (SPCC).</p>	

Fuente: Elaboración propia con los datos del Reporte N° 60 de febrero 2009 de la Defensoría del Pueblo

5.3. Anexo 3: Sistematización de los conflictos socioambientales de los 6 departamentos con mayor transferencia de canon minero respecto al Reporte N° 74 de Abril 2010 de la Defensoría del Pueblo

Departamento	Conflictos sociales activos y latentes	Por tipo	Descripción de conflictos socioambientales activos	Relacionados con minería y medio ambiente
Ancash	17 (14 activos y 3 latentes)	Asuntos de Gobierno local 5 activos (29%) Asuntos de Gobierno Regional 1 activos (6%) Socioambiental 7 (41%) 6 activos, 1 latente Laboral 1 activos 2 latentes (18%) Comunal 1 activo (6%)	<p>Tipo: Socioambiental. Caso: Comunidad de Andrés Avelino Cáceres de Cuncashca exigen a la Empresa Minera Barrick Misquichilca que los compense por el cierre del tradicional camino que conducía a sus localidades. De otro lado, exigen que dicha empresa cumpla con compromisos asumidos. Ubicación: Comunidad Campesina de Andrés Avelino Cáceres de Cuncashca, Distrito de Jangas, Provincia Huaraz. Actores Primarios. Comuneros de la Comunidad Cuncashca, Compañía Minera Barrick Misquichilca. Actores secundarios. Municipalidad Distrital de Jangas, Municipalidad Provincial de Huaraz, Gobierno Regional de Ancash, Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas.</p>	De los 6 conflictos socioambientales activos 4 de ellos están relacionados con minería y específicamente con contaminación ambiental o supuesta contaminación. Es decir, casi el 67% de los conflictos socioambientales activos en Ancash tienen relación con minería y medio ambiente.
			<p>Tipo: Socioambiental. Caso: La población de la cuenca del Río Ayash reclama atención a los impactos a la salud y el ambiente ante la denuncia que el río se encuentra contaminado por vertimiento de relaves de la empresa minera Antamina. Además, demandan que la compañía minera concrete su aporte al desarrollo local. Ubicación: CC. Ayash Pichiú, Distrito de San Marcos, Provincia de Huari. Actores Primarios: Comunidad de Ayash Pichiú, Comunidad de Santa Cruz Pichiú, Compañía Minera Antamina (CMA). Actores Secundarios: Comité de Seguimiento a la Salud Humana (COSESH) de la cuenca del Río Ayash, que está integrado por la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Ancash, Dirección Regional de Salud de Ancash, Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental.</p>	

			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Pobladores y autoridades del CP de Racrachaca exigen a Compañía Minera Antamina la suscripción de un convenio marco de relación institucional para recibir el apoyo de la compañía minera, debido a que consideran se encuentran en el área de influencia.</p> <p>Ubicación: Centro Poblado de Racrachaca, distrito de Aquia, provincia de Bolognesi.</p> <p>Actores Primarios: Centro Poblado Racrachaca, Comunidad Campesina de Racrachaca, Comunidad Campesina de Aquia, Compañía Minera Antamina S.A.</p> <p>Actores Secundarios: Gobierno Regional de Ancash.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Pobladores del C.P. de Carhuayoc y de la comunidad de Ango Raju denuncian contaminación y peligro ambiental por absorción y bombeo, y el posible drenaje de la Laguna Condorcocha y destrucción del lugar turístico del Cerro Cóndor por remoción de tierra y voladura de rocas realizadas por la Compañía Antamina.</p> <p>Ubicación: Centro Poblado de Carhuayoc, distrito de San Marcos, provincia de Huari.</p> <p>Actores Primarios: Comunidad Campesina de Ango Raju, Pobladores del Centro Poblado de Carhuayoc, Frente de Defensa de los Intereses de Desarrollo del Centro Poblado Carhuayoc FEDIP, Compañía Minera Antamina S.A.</p> <p>Actores Secundarios: Compañía Minera Contonga, Asociación Juventud Carhuayina, Asociación Hijos de Carhuayoc.</p>	

			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Los moradores del distrito de Coishco están siendo afectados con los residuos sólidos que arroja la Municipalidad Provincial del Santa en la entrada de su distrito desde hace varios años, pese a existir una sentencia judicial que lo prohíbe, situación que estaría afectando el ambiente y la salud de los pobladores, por lo que piden el cambio de la ubicación del botadero municipal.</p> <p>Ubicación: Distrito de Coishco, Provincia del Santa.</p> <p>Actores Primarios: Municipalidad Provincial del Santa, Municipalidad Distrital de Coishco, Pobladores del distrito de Coishco, Frente de Defensa del Medio Ambiente de Coishco.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso. Conflicto por presunto incumplimiento de empresa Antamina y posible contaminación minera.</p> <p>Ubicación: Caserío San Antonio de Juprog, distrito de San Marcos, provincia de Huari.</p> <p>Actores Primarios: Pobladores/as del Caserío San Antonio de Juprog, Compañía Minera Antamina, Comité de Desarrollo Social y Ambiental de Juprog S.A.</p> <p>Actores Secundarios: Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM), CENSOPAS, Dirección Regional de Salud. Terciarios: Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Ancash, Defensoría del Pueblo.</p>	
Cajamarca	17 (14 activos y 3 latentes)	Asuntos de Gobierno local 1 activo 1 latente (12%) Asuntos de Gobierno Nacional 1 activo (6%) Socio ambiental 13 (76%)11 activos, 2 latentes	<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso. Moradores de la Provincia de Celendín se oponen al Proyecto minero Conga, de la Minera Yanacocha, por no estar incorporados en el EIA como área de influencia.</p> <p>Ubicación: Caserío San Nicolás de Chaullagon – Centro Poblado San Juan de Hierba Buena, Distrito La Encañada – Provincia de Cajamarca.</p> <p>Actores Primarios: Asociación civil Plataforma Interinstitucional Celendina, Empresa Minera Yanacocha SRL – Proyecto Conga, Municipalidades de Huasmin y Sorochocho.</p>	De los 11 conflictos socioambientales activos 9 de ellos están relacionados con minería y específicamente con contaminación ambiental o supuesta contaminación. Es decir, casi el 82% de los conflictos socioambientales activos en Cajamarca tienen relación con minería y medio ambiente
			Tipo: Socioambiental.	

		Laboral 1 activo (6%)	<p>Caso. Pobladores de Quishuar Corral reclaman el incumplimiento de acuerdos suscritos con la Empresa Yanacocha en el 2008 relacionados con salud, electrificación y proyecto de desarrollo.</p> <p>Ubicación: Caserío Quishuar Corral, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca.</p> <p>Actores Primarios: Empresa Minera Yanacocha, pobladores de Quishuar Corral, Ministerio de Energía y Minas, Asociación Canal Quishuar.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso. Comuneros de El Tingo se oponen a la servidumbre minera, aprobada por el Ministerio de Energía y Minas el 15.12.09 para la construcción del complejo industrial minero del proyecto Tantahuatay a favor de Compañía Minera Coimolache S.A. por el plazo de 20 años. Los comuneros solicitan una permuta de terrenos en Cajamarca y reintegro en el justiprecio pagado por la compra-venta.</p> <p>Ubicación: Comunidad campesina El Tingo, distrito de Hualgayoc, provincia de Hualgayoc.</p> <p>Actores Primarios: Compañía Minera Coimolache S.A., Comunidad Campesinas El Tingo, Ministerio de Energía y Minas.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso. La comunidad solicita la remediación de pasivos mineros, e indemnización, supuestamente producto de exploraciones mineras anteriores.</p> <p>Ubicación: Comunidad Campesina de Michiquillay, distrito La Encañada, Provincia de Cajamarca.</p> <p>Actores Primarios: Comunidad Campesina de Michiquillay, Activos Mineros SA, Comité de Autodefensa de la Comunidad Indígena de Michiquillay, Frente de Defensa y Desarrollo de seis cuencas que beneficia Michiquillay con sus aguas.</p> <p>Actores Secundarios: Municipalidad Provincial de Cajamarca, CONACAMI.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso. Pobladores del caserío de Vista Alegre se oponen a la expansión minera en la provincia de Hualgayoc y remediación inmediata de pasivos ambientales.</p> <p>Ubicación: Caserío Vista Alegre, distrito Hualgayoc, provincia de Hualgayoc.</p> <p>Actores Primarios: Pobladores del caserío Vista Alegre, Pobladores del caserío</p>	

			<p>Vista Alegre Alto, Empresa Minera Consolidad de Hualgayoc, Ministerio de Energía y Minas, Alcalde Provincial de Hualgayoc, Alcalde Distrital de Hualgayoc.</p> <p>Actores Secundarios: Gobierno Regional de Cajamarca a través de la Dirección Regional de Energía y Minas.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso. Demandan la construcción de un nuevo sistema de agua por parte de la empresa Minera Yanacocha, mientras se vienen abastecimiento mediante cisterna, en tanto dure la construcción del nuevo sistema.</p> <p>Ubicación: CP Huambocancha Alta, Caserio El Batán, Distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca.</p> <p>Actores. Comité Directivo del Sistema de Agua Potable del centro Poblado de Huambocancha Alta, caserío El Batan, Municipalidad Provincial de Cajamarca y Empresa Minera Yanacocha.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso. La asociación de ex trabajadores de Cia. Minera Colquirrumi exige que se reconozca la propiedad del terreno ubicado en La Lechería, donde se ubica una zona de remediación de pasivos ambientales.</p> <p>Ubicación: Distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc</p> <p>Actores Primarios: Asociación de ex trabajadores de Cia. Minera Colquirrumi SA, Compañía Minera Colquirrumi SA.</p> <p>Actores Secundarios: Juzgado Mixto de Hualgayoc – Sala Mixta de Chota.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso. Oposición de la población de Chuquibamba y Condebamba a la explotación minero–informal en el cerro Algamarca y alrededores por el impacto ambiental que viene ocasionando.</p> <p>Ubicación: Distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba.</p> <p>Actores Primarios: pobladores del CP Chuquibamba, Asociación de Mineros Informales, Frente de Defensa del Medio Ambiente del Valle de Condebamba.</p> <p>Actores Secundarios: Minera Sullidén Shahuindo, Minera Inversiones Sudamericana.</p>	

		<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso. Temor de la población por la contaminación ambiental del río Mangasbamba y desacuerdo de la población por el uso del aporte económico voluntario, extraordinario y temporal realizado por la empresa como parte de sus compromisos para iniciar acciones de explotación. Además la población demanda proyectos de desarrollo sostenible para la zona.</p> <p>Ubicación: Distrito de Hualgayoc, provincia de Hualgayoc.</p> <p>Actores Primarios: Municipalidad distrital de Hualgayoc dos Centros Poblados: Moran y Coimolache, 40 caseríos, Empresa Minera Gold Fields-La Cima S.A, Rondas Campesinas, Mesa de diálogo de Hualgayoc, Frente Único de los Interés del Pueblo de Hualgayoc, Frente de Defensa de los Intereses de Hualgayoc.</p> <p>Actores Secundarios: Gobernación y Asociación de Trabajadores del Pueblo de Hualgayoc.</p>	
		<p>Tipo: Socioambiental</p> <p>Caso. Demandan la recuperación de manantiales Rume Rume, Perga Perga y Cuyoc, para consumo humano y riego tecnificado, que viene utilizando la empresa Minera Yanacocha.</p> <p>Ubicación: Centro Poblado de La Ramada, Distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, Departamento de Cajamarca.</p> <p>Actores Primarios: Minera Yanacocha, Comité de agua potable del Centro Poblado La Ramada (presidente Emilio Yopla Chilon), Canal de Riego La Ramada (presidente José Anastasio Yopla Cueva),</p> <p>Actores Secundarios: Administración Técnica del Distrito de Riego del Jequetepeque, Administración Técnica del Distrito de Riego de Cajamarca, Instituto Nacional de Recursos Naturales, Municipalidad Provincial de Cajamarca.</p>	
		<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso. Los pobladores se oponen al proyecto minero La Zanja por temor a la contaminación.</p> <p>Ubicación: Distrito de Pulán, provincia de Santa Cruz.</p> <p>Actores Primarios: Pobladores de Pulán, Minera la Zanja, Federación de Rondas</p>	

			campesinas de la provincia de Santa Cruz, Frente de Defensa de Santa Cruz. Actores Secundarios: Municipalidad Provincial de Santa Cruz, Municipalidad Distrital de Pulan, Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chancay.	
La Libertad	9 (7 activos y 2 latentes)	Asuntos de Gobierno Local 1 activo (11%) Asunto de Gobierno Regional 1 latente (11%) Socioambiental 4 activos 1 latente (56%) Laboral 2 activos (22%)	<p>Tipo: Socioambiental Caso: Pobladores y organizaciones de Sayapullo Contaminación ambiental demandan suspensión inmediata de los permisos licencias y autorizaciones otorgadas sobre las concesiones que se encuentran en Sayapullo, por las implicancias ambientales de las mismas, y remediación de Pasivos Ambientales mineros dejados por la Cía. Minera Sayapullo. Ubicación Distrito de Sayapullo, Provincia de Gran Chimú. Actores primarios. Comité de Remediación Ambiental y Reinicio de Actividades Mineras de Sayapullo, Ministerio de Energía y Minas, Corporación Minera San Manuel S.A, Compañía Minera Milpo S.A.A.</p> <p>Tipo: Socioambiental Caso: Comuneros de Huacascorral, Totoropampa, Tambopampamarca, y Cruz de Chuca, exigen a la Empresa Minera COMARSA que cumpla con ejecutar el proyecto de abastecimiento de agua potable para consumo humano. Ubicación Distrito de Angasmarca, Provincia Santiago de Chuco. Actores primarios. CC de Huacascorral, CC de Totoropampa, CC Tambopampamarca y CC Cruz de Chuca, Compañía Minera Aurífera Santa Rosa S.A. - COMARSA. Actores secundarios. Municipalidad Distrital de Angasmarca, Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, Gobierno Regional de la Libertad.</p> <p>Tipo: Socioambiental Caso: Ronderos de Pataz cuestionan la legalidad de la propiedad de los terrenos que ocupa la Unidad Santa María, de la Compañía Minera Poderosa, por supuesta expropiación ilegal de la misma. Ubicación Distrito de Pataz, Provincia Pataz. Actores Primarios. Ronda Campesina de Pueblo Nuevo, Central única de Rondas Campesinas y la base de mineros del distrito de Pataz, Compañía Minera Poderosa, Gobierno Regional de La Libertad.</p>	De los 4 conflictos socioambientales activos 2 de ellos están relacionados con minería y específicamente con contaminación ambiental o supuesta contaminación. Es decir, casi el 50% de los conflictos socioambientales activos en La Libertad tienen relación con minería y medio ambiente.

			<p>Tipo: Socioambiental</p> <p>Caso: Oposición a minería informal por posible contaminación de ríos que proveen de agua a Huamachuco.</p> <p>Ubicación Distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión.</p> <p>Actores primarios: Rondas campesinas y juntas</p>	
Arequipa	7 (5 activos y 2 latentes)	<p>Asuntos de Gobierno Local 1 latente (14%)</p> <p>Asuntos de Gobierno Nacional 1 activo (14%)</p> <p>Socioambientales 4 (57%) 3 activos 1 latente</p> <p>Laboral 1 activo (14%)</p>	<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Oposición de algunas autoridades locales y un sector de la población de la provincia de Islay al trámite de explotación minera del proyecto “Tía María” iniciado por la empresa Southern Perú Copper Corporation por posibles daños al ecosistema de la zona y reducción de los volúmenes de agua del río Tambo.</p> <p>Ubicación: Distrito de Cocachacra, provincia de Islay.</p> <p>Actores Primarios: Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú, Dirección de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas, Municipalidad Distrital de Cocachacra, Frente Amplio de Desarrollo y Defensa de los Intereses de la Provincia de Islay FADDIP-ISLAY, Frente de Lucha de Cocachacra, Coordinadora Provincial Contra la Agresión Minera, Municipalidad Dean Valdivia, Municipalidad de Matarani, Municipalidad de Punta de Bombon, Gobierno Regional de Arequipa, Coordinadora macro regional del sur de lucha contra la agresión minera.</p> <p>Actores Secundarios: Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Asociación de Pescadores Artesanales Camaroneros y Defensores de la Fauna del Río Tambo</p>	De los 3 conflictos socioambientales activos 2 de ellos están relacionados con minería y específicamente con contaminación ambiental o supuesta contaminación. Es decir, casi el 67% de los conflictos socioambientales activos en Arequipa tienen relación con minería y medio ambiente.
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: El Frente de Defensa del Medio Ambiente del Cañón de Cotahuasi, así como las autoridades y la población de la provincia de La Unión se oponen a las operaciones de la minera Arcasel S.A.C. ubicada en las cercanías de los bofedales en el anexo de Huaracaya, en el Área Natural Protegida y Reserva Paisajista de la subcuenca de Cotahuasi.</p> <p>Ubicación: Comunidad Huaracaya, Distrito de Huaynacotas, provincia de La Unión.</p> <p>Actores Primarios: La empresa minera ARCASEL S.A.C., Gerencia Regional de</p>	

			<p>la Autoridad Ambiental (ARMA), Municipalidad provincial de La Unión, sector de la población de la provincia de La Unión, Frente de Defensa del Medio Ambiente del Cañón de Cotahuasi, Comisión de Regantes de la Provincia de Cotahuasi.</p> <p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso. Autoridades y organizaciones sociales de Arequipa demandan construcción de la Tomilla II y la construcción de plantas de aguas hervidas en la pampa de la Escalerilla en el cono norte de Arequipa y en Los Hurtado (Uchumayo). Mientras los pobladores de Uchumayo rechazan la posibilidad de que en esa zona se construya una planta de tratamiento de aguas servidas.</p> <p>Ubicación: Distrito de Uchumayo, Provincia de Arequipa.</p> <p>Actores Primarios: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa SEDAPAR, Comité Lucha por el Desarrollo de Arequipa, Frente de Desarrollo del Cono Norte, Comité de Lucha de los Intereses de Arequipa, Frente Amplio Cívico de Arequipa (FACA).</p> <p>Actores Secundarios: Sociedad Minera Cerro Verde, Coordinadora Popular de Arequipa, Municipalidad Provincial de Arequipa, Asociación de Alcaldes de la provincia de Arequipa, Autoridades Regionales</p>	
Tacna	6 (4 activos y 2 latentes)	<p>Asuntos de Gobierno Nacional 1 activo (17%)</p> <p>Socioambiental 4 (67%) 3 activos 1 latente</p> <p>Demarcacion territorial 1 latente (17%)</p>	<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Oposición de autoridades provinciales de Tarata y distritales de Ticaco a las actividades de exploración minera por temor a la contaminación ambiental.</p> <p>Ubicación: Provincia de Tarata</p> <p>Actores primarios: Municipalidad Provincial de Tarata, empresa minera Newmont, Municipalidad distrital de Ticaco, la Comunidad Campesina de Ticaco y la Comisión de Regantes de Ticaco, Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente de Tacna.</p> <p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: El Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente de Tacna y otras organizaciones de Tacna se oponen a la explotación minera de MINSUR por posible contaminación de recurso hídrico.</p> <p>Ubicación: Comunidad de Vilavilani, distrito de Palca, provincia de Tacna.</p>	De los 3 conflictos socioambientales activos 3 de ellos están relacionados con minería y específicamente con contaminación ambiental o supuesta contaminación. Es decir, casi el 100% de los conflictos socioambientales en Tacna tienen relación con minería y medio ambiente.

			<p>Actores Primarios: Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente de Tacna (Presidenta: Ing. Nora Melchor Cohaila). Empresa minera MINSUR.</p> <p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Oposición del Municipio provincial y organizaciones sociales a la extracción de aguas superficiales y subterráneas por parte de SPCC a favor de sus centros mineros Toquepala (Tacna) y Cuajone (Moquegua), que estarían afectando los ríos Callazas, Tacalaya y Salado.</p> <p>Ubicación: Provincia de Candarave.</p> <p>Actores: Municipalidad Provincial de Candarave, Southern Perú Copper Corporation (SPCC), Junta de usuarios de Candarave, Coordinadora Regional de Comunidades Afectadas CORECAMI Tacna.</p>	
Moquegua	7 (3 activos y 4 latentes)	<p>Asuntos de Gobierno Local 2 activos (29%)</p> <p>Asuntos de Gobierno Nacional 1 latente (14%)</p> <p>Socioambiental 4 (57%) 2 activos 2 latentes</p> <p>Otros 1 latente (14%)</p>	<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Oposición al uso de las aguas subterráneas y la desviación del cauce el río Asana para el proyecto minero Quellaveco.</p> <p>Ubicación: Distrito Torata, Provincia de Mariscal Nieto.</p> <p>Actores Primarios: Agricultores de 28 comunidades andinas de la zona, Minera Quellaveco S.A., Gobierno Regional de Moquegua.</p> <p>Actores Secundarios: Ministerio de Energía y Minas, Autoridad Técnica de Riego (ATDR – Moquegua), Dirección Regional Agraria, Labor y CORECAMI.</p> <p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Diversas Instituciones Educativas que se encuentran en las inmediaciones de la Planta de Consorcio Terminales GMT – Terminal Ilo (Savia Perú) solicitan el traslado de la planta a un lugar fuera de la ciudad, señalando que la emanación de gas de combustible afecta a los escolares y pobladores de la zona.</p> <p>Ubicación: Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua.</p> <p>Actores Primarios: Empresa Savia Perú (antes PETRO TECH), Municipalidad Provincial de Ilo, Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera, I. E. Andrés Avelino Cáceres, I.E. Especial Corazón de Jesús, I.E. Particular San Luis, I.E. Particular Santa Anita, I.E. Particular William Prescott, I.E. Particular San Maximiliano Kolbe. Dirección Regional de Energía y Minas.</p>	De los 2 conflictos socioambientales activos 1 de ellos están relacionados con minería y específicamente con contaminación ambiental o supuesta contaminación. Es decir, casi el 50% de los conflictos socioambientales en Moquegua tienen relación con minería y medio ambiente.

Fuente: Elaboración propia con los datos del Reporte N° 74 de Abril 2010 de la Defensoría del Pueblo

5.4. Anexo 4: Sistematización de los conflictos socioambientales de los 6 departamentos con mayor transferencia de canon minero respecto al Reporte N° 89 de Julio 2011 de la Defensoría del Pueblo

Departamento	Conflictos sociales activos y latentes	Por tipo	Descripción de conflictos socioambientales activos	Relacionados con minería y medio ambiente
Ancash	17 (13 activos 4 latentes)	Asuntos de Gobierno Local 2 latente (12%) Asunto de Gobierno regional 1 activo (6%) Socioambiental 9 activos 1 latente (59%) Laboral 1 activo 1 latente (12%) Electoral 1 activo (6%)	<p>Tipo: Socioambiental Caso: Organizaciones sociales y autoridades de la Provincia de Aija al tener conocimiento del inicio de actividades mineras por parte de CIA de Minas Buenaventura en zonas cercanas a la cabecera de las microcuencas de los ríos Pallca y Mallqui, expresaron su oposición por temor a la contaminación del recurso hídrico. Ubicación: Distrito y provincia de Aija. Actores Primarios: CODEMAPA, Comisión de Regantes de las microcuencas del Río Santiago y Río Mallqui, Comisión de Regantes de Aija y Compañía Minera Buenaventura S.A.A. Actores Secundarios: Autoridades de la Provincia de Aija, Ministerio de Energía y Minas.</p>	De los 9 conflictos socioambientales activos 6 de ellos están relacionados con minería y específicamente con contaminación ambiental o supuesta contaminación. Es decir, casi el 67% de los conflictos socioambientales activos en Ancash tienen relación con minería y medio ambiente.
			<p>Tipo: Socioambiental Caso: La población de los valles de los ríos: Pativilca, Fortaleza y Santa, hacen llegar su preocupación por los trabajos de exploración minera que viene realizando en la cuenca de estos ríos, la empresa CENTAURO SAC, al parecer incluiría trabajos inclusive en las inmediaciones de la laguna de Conococha, donde nacen los ríos indicados, pudiendo afectar sus actividades agropecuarias en los distritos de Pampas Chico, Catac y Cajacay. Ubicación: Comunidad Campesina Huambo, distrito Pampas Chico, provincia Recuay, a su vez involucra a las poblaciones de los valles de los ríos Pativilca, Fortaleza y Santa Actores Primarios: Representantes de la Mancomunidad de las tres municipalidades de las cuencas hidrográficas del río Santa, Fortaleza y Pativilca.</p>	

			<p>Alcaldes y regidores del distrito de Pampas Chico, Huasta y Catac, Frente de Defensa de la Comunidad Campesina de Huambó, Frente Regional de Defensa de la Laguna Conococha, Comunidades Campesinas de Pampas Chico, Chaucayán, representantes de los hijos residentes de la comunidad de Huambó, Asociación Mayorarca, Centro Unión Huambó.</p> <p>Actores Secundarios: Frente de Defensa de la Provincia del Santa, Frente de las Organizaciones Agrarias de la Provincia del Santa, Comité Cívico de la Provincia de Recuay, Ministerio de Energía y Minas, Federación Agraria Departamental de Ancash (FADA), representantes de CONACAMI, Junta Nacional de Riego del Perú.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental</p> <p>Caso: Comuneros denuncian un supuesto incumplimiento de la empresa Antamina en la ejecución del Plan de desarrollo comunal, conforme a los compromisos asumidos.</p> <p>Ubicación: Comunidad Campesina de Huaripampa, distrito San Marcos, provincia Huari.</p> <p>Actores Primarios: Comuneros de la Comunidad Campesina de Huaripampa y la CIA Minera ANTAMINA S.A.</p> <p>Actores Secundarios: Ministerio de Energía y Minas.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Comunidad de Andrés Avelino Cáceres de Cuncashca exige a Minera Barrick Misquichilca S.A. que los compense por el cierre del camino tradicional que conducía a sus localidades. De otro lado, exigen que dicha empresa cumpla con compromisos asumidos.</p> <p>Ubicación: Comunidad Campesina de Andrés Avelino Cáceres de Cuncashca, Distrito de Jangas, Provincia Huaraz.</p> <p>Actores primarios. Comuneros de la Comunidad Cuncashca, Compañía Minera Barrick Misquichilca, Empresa Comunal ESMAC.</p> <p>Actores secundarios. Municipalidad Distrital de Jangas, Municipalidad Provincial de Huaraz, Gobierno Regional de Ancash, Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas.</p>	

			<p>Actores terciarios: Comisión Diocesana de Servicio Pastoral Social (CODISPAS).</p> <p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: La población de la cuenca del Río Ayash reclama atención a los impactos a la salud y el ambiente ante la denuncia que el río se encuentra contaminado por vertimiento de relaves de la empresa minera Antamina. Además, demandan que la compañía minera concrete su aporte al desarrollo local.</p> <p>Ubicación: Comunidad Ayash Pichiú, Distrito de San Marcos, provincia de Huari.</p> <p>Actores Primarios: Comunidad de Ayash Pichiú, Comunidad de Santa Cruz Pichiú, Compañía Minera Antamina (CMA), Asociación multisectorial para el desarrollo sostenible de Ayash (ASODESO).</p> <p>Actores Secundarios: Comité de Seguimiento a la Salud Humana (COSESH) de la cuenca del Río Ayash, que está integrado por la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Ancash, Dirección Regional de Salud de Ancash, Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Pobladores y autoridades del Centro Poblado de Racrachaca exigen a Compañía Minera Antamina la suscripción de un convenio marco de relación institucional para recibir apoyo de la empresa, debido a que se encuentran en el área de influencia. Del mismo modo, la comunidad campesina de Racrachaca exige a Compañía Minera Antamina y al comité regional de Defensa Civil la realización del estudio de riesgos para prevenir algún desastre en la zona por los derrumbes y deslizamientos que se producen en época de lluvias.</p> <p>Ubicación: Centro Poblado de Racrachaca, distrito de Aquia, provincia de Bolognesi.</p> <p>Actores Primarios: Centro Poblado Racrachaca, Comunidad Campesina de Racrachaca, Comunidad Campesina de Aquia, Compañía Minera Antamina S.A.</p> <p>Actores Secundarios: Gobierno Regional de Ancash, empresa Hidrandina.</p>	

			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Pobladores de la Comunidad Campesina de Ango Raju y del Centro Poblado Carhuayoc (San Marcos, Huari - Ancash) demandan compensación y apoyo al desarrollo social por parte de Antamina, a razón de las actividades que desarrolla en la zona.</p> <p>Ubicación: Centro Poblado de Carhuayoc, distrito de San Marcos, provincia de Huari.</p> <p>Actores Primarios: Comunidad Campesina de Ango Raju, Pobladores del Centro Poblado de Carhuayoc, Frente de Defensa de los Intereses de Desarrollo del Centro Poblado Carhuayoc FEDIP, Compañía Minera Antamina S.A.</p> <p>Actores Secundarios: Compañía Minera Contonga, Asociación Juventud Carhuayina, Asociación Hijos de Carhuayoc.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Conflicto por presunto incumplimiento de Compañía Minera Antamina y posible contaminación ambiental.</p> <p>Ubicación: Caserío San Antonio de Juprog, distrito de San Marcos, provincia de Huari</p> <p>Actores Primarios: Pobladores/as del Caserío San Antonio de Juprog, Compañía Minera Antamina, Comité de Desarrollo Social y Ambiental de Juprog S.A. (COMEAS)</p> <p>Actores Secundarios: Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM), Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS), Dirección Regional de Salud. Actores Terciarios: Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Ancash, Defensoría del Pueblo.</p>	

			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Los moradores del distrito de Coishco están siendo afectados con los residuos sólidos que arroja el Municipalidad Provincial del Santa en la entrada de su distrito desde hace varios años, pese a existir una sentencia judicial que lo prohíbe, situación que estaría afectando el ambiente y la salud de los pobladores; por lo que piden el cambio de la ubicación del botadero municipal.</p> <p>Ubicación: Distrito de Coishco, Provincia del Santa.</p> <p>Actores Primarios: Municipalidad Provincial del Santa, Municipalidad Distrital de Coishco, Pobladores del distrito de Coishco. Frente de Defensa del Medio Ambiente de Coishco.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental</p> <p>Caso: Diversas asociaciones, y el sindicato de pescadores y armadores de Nuevo Chimbote, se oponen a la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos en el Lote Z-48, pues señalan pone en riesgo la biodiversidad de la zona y causaría daños ambientales.</p> <p>Ubicación: Distritos de Casma, Nuevo Chimbote y Samanco, Provincia del Santa.</p> <p>Actores primarios: Sindicato de pescadores de Chimbote, Asociación de armadores artesanales de la Caleta, Dirección de la Producción, Empresa SAVIA Perú, Municipalidad Provincial del Santa, Asociación Cívica de Chimbote, Asociación de Pescadores de 0 a 5 millas, Dirección de la Producción, Frente de Defensa de la Provincia de Casma, Frente de Defensa de Medio de Ambiente de Casma.</p> <p>Actores secundarios: Colegio de Abogados del Santa, Colegio de Biólogos del Santa. ONG Natura</p>	
Cajamarca	18 (13 activos y 5 latentes)	<p>Asunto de Gobierno Local 1 activo 1 latente (11%)</p> <p>Asunto de Gobierno Nacional 1 latente (6%)</p>	<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso. Autoridades y dirigentes de las Comunidades Nativas de San José de Lourdes y sus organizaciones representativas rechazan la presencia de la empresa Minera Águila Dorada, ante el temor de posible contaminación.</p> <p>Ubicación: Distrito de San José de Lourdes, Provincia de San Ignacio.</p> <p>Actores Primarios: Comunidad Nativa de Naranjos, Comunidades Nativas de San</p>	De los 11 conflictos socioambientales activos 8 de ellos están relacionados con minería y específicamente con contaminación ambiental o supuesta contaminación. Es decir, casi el 73% de los conflictos socioambientales

		<p>Socioambiental 13 (72%) 11 activos 2 latentes Demarcacion territorial 1 latente (6%)</p>	<p>José de Lourdes, Organización Regional Aguaruna de San Ignacio (ORASI), Organización Fronteriza Awajún de Cajamarca (ORFAC), Municipalidad Distrital de San José de Lourdes, Rondas Campesinas de San José de Lourdes, Municipalidad Provincial de San Ignacio, Gobierno Regional de Cajamarca, Exploraciones Águila Dorada SAC.</p> <p>Actores Secundarios: Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú.</p> <p>Actores Terciarios: Vicaría de San José de Lourdes</p> <p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso. Autoridades, pobladores y miembros de las Rondas Campesinas del Centro Poblado de La Pampa y la Comunidad Campesina de Iraca, se oponen al desarrollo de las actividades mineras por problemas de relacionamiento con la Empresa Minera Río Tinto – Proyecto Minero La Granja.</p> <p>Ubicación: Centro Poblado La Pampa y Comunidad Campesina Iraca, Distrito Querocoto, Provincia de Chota.</p> <p>Actores Primarios: Pobladores del Centro Poblado de La Pampa, Comunidad Campesina Iraca, Empresa Minera Río Tinto Perú Limitada SAC – Proyecto Minero La Granja.</p> <p>Actores Secundarios: Municipalidad Distrital de Querocoto, Federación de Rondas y Central Única de Rondas del Distrito de Querocoto, Fiscalía Provincial Mixta de Chota.</p>	<p>activos en Cajamarca tienen relación con minería y medio ambiente</p>
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso. Demandan la recuperación de manantiales Rume Rume, Perga Perga y Cuyoc, para consumo humano y riego tecnificado, que viene utilizando la empresa Minera Yanacocha.</p> <p>Ubicación: Centro Poblado de La Ramada, Distrito de Cajamarca, Provincia de Cajamarca.</p> <p>Actores Primarios: Minera Yanacocha, Comité de agua potable del Centro Poblado La Ramada, Canal de Riego La Ramada, Autoridad Local del Agua de Cajamarca, Autoridad Administrativa del Agua VI Marañón.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p>	

		<p>Caso. Autoridades de la Provincia de Hualgayoc como del Distrito de Chugur se oponen a la ampliación del Proyecto Minero Tantahuatay – Ciénaga Norte aduciendo observaciones al EIA, tales como que el mismo no considera la ZEE de la Región y se encuentra en cabecera de cuenca.</p> <p>Ubicación: Distrito Chugur. Provincia de Hualgayoc.</p> <p>Actores Primarios: Municipalidad Distrital de Chugur, Gobierno Regional de Cajamarca, Cía. Minera Coimolache – Proyecto Minero Tantahutay, Comité Interprovincial de Rondas Campesinas, Central Única Provincial de Rondas Campesinas de Hualgayoc, Frente de Defensa Provincial de Hualgayoc.</p> <p>Actores Secundarios: Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros y la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas.</p>	
		<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso. Problemas de relacionamiento comunitario entre la Comunidad Campesina El Tingo y la Cía. Minera Coimolache respecto a contrataciones de servicios así como sobre adquisiciones de tierras realizadas toda vez que los comuneros perciben que se estaría ocupando mayor cantidad de tierras de las que corresponde.</p> <p>Ubicación: Comunidad Campesina El Tingo, distrito de Hualgayoc, provincia de Hualgayoc.</p> <p>Actores Primarios: CC. El Tingo, Compañía Minera Coimolache – Proyecto Minero Tantahutay.</p> <p>Actores Secundarios: Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas.</p>	
		<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso. Moradores de la Provincia de Celendín se oponen al Proyecto minero Conga de la Empresa Minera Yanacocha SRL, por los impactos negativos que se generarían en el ambiente, y por la desaparición de 4 lagunas en la zona donde se desarrollaría el proyecto.</p> <p>Ubicación: Caserío San Nicolás de Chaullagon – Centro Poblado San Juan de Hierba Buena, Distrito La Encañada – Provincia de Cajamarca.</p> <p>Actores Primarios: Asociación civil Plataforma Interinstitucional Celendina,</p>	

			<p>Empresa Minera Yanacocha SRL – Proyecto Conga Actores Secundarios: Municipalidades de Bambamarca, Huasmin y Sorochuco, Gobierno Regional de Cajamarca, Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental. Caso. La Comunidad Campesina Michiquillay demandan cumplimiento y ejecución del Fondo Social Michiquillay. Ubicación: Comunidad Campesina de Michiquillay, distrito La Encañada, Provincia de Cajamarca. Actores Primarios: Comunidad Campesina de Michiquillay, Comunidad Campesina La Encañada, Empresa Minera Anglo-American Michiquillay. Actores Secundarios: Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental. Caso. Autoridades y pobladores de la Provincia de Hualgayoc se oponen a la expansión minera en la provincia de Hualgayoc y requieren la remediación inmediata de pasivos ambientales. Ubicación: Provincia de Hualgayoc. Actores Primarios: Caserío Vista Alegre Bajo y Alto, Comité de Lucha en Defensa del Medio Ambiente, Empresa Minera Consolidada de Hualgayoc, Alcalde Provincial de Hualgayoc Actores Secundarios: Federación de Rondas Campesinas de Cajamarca, Oficina General de Gestión Social y la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Ministerio del Ambiente, Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Cajamarca, Municipalidad Distrital de Chugur, Municipalidad Distrital de Bambamarca y Hualgayoc.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental. Caso. La asociación de ex trabajadores de Cía. Minera Colquirrumi exige que se reconozca la propiedad del terreno ubicado en La Lechería, donde se ubica una zona de remediación de pasivos ambientales.</p>	

			<p>Ubicación: Distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc</p> <p>Actores Primarios: Asociación de ex trabajadores de Cía. Minera Colquirrumi SA, Compañía Minera Colquirrumi SA.</p> <p>Actores Secundarios: Juzgado Mixto de Hualgayoc – Sala Mixta de Chota.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso. Oposición de la población de Chuquibamba y Condebamba a la explotación minero–informal en el cerro Algamarca y alrededores por el impacto ambiental que viene ocasionando.</p> <p>Ubicación: Distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba.</p> <p>Actores Primarios: pobladores del CP Chuquibamba, Asociación de Mineros Informales, Frente de Defensa del Medio Ambiente del Valle de Condebamba, y Minera Sullidén Shahuindo.</p> <p>Actores Secundarios:, Oficina General de Gestión Social, Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, la Comisaría PNP de Cajabamba, Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno Regional de Cajamarca.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso. Pobladores de Hualgayoc demanda el cumplimiento de los compromisos que la Empresa Minera Gold Field – La Cima SAA asumió respecto al abastecimiento de agua, energía eléctrica, rajaduras en viviendas producto de las actividades mineras desarrolladas en la zona.</p> <p>Ubicación: Pueblo de Hualgayoc, Distrito de Hualgayoc, provincia de Hualgayoc.</p> <p>Actores Primarios: Municipalidad Distrital de Hualgayoc, Empresa Minera Gold Fields -La Cima S.A, Rondas Campesinas, Mesa de Diálogo de Hualgayoc, Frente Único de los Interés del Pueblo de Hualgayoc, Frente de Defensa de los Intereses de Hualgayoc.</p> <p>Actores Secundarios: Gobernación y Asociación de Trabajadores del Pueblo de Hualgayoc.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso. Los pobladores se oponen al proyecto minero La Zanja por temor a la contaminación ambiental que puede generar el mismo, al encontrarse en cabecera</p>	

			<p>de cuenca.</p> <p>Ubicación: Distrito de Pulán, provincia de Santa Cruz.</p> <p>Actores Primarios: Pobladores de Pulán, Minera la Zanja, Federación Provincial de Rondas Campesinas y urbanas de la provincia de Santa Cruz, Frente de Defensa de Santa Cruz, Asociación de Rondas Campesinas de la Provincia de Santa Cruz</p> <p>Actores Secundarios: Municipalidad Provincial de Santa Cruz, Municipalidad Distrital de Pulan Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chancay, Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Cajamarca, Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas, Comisión Ambiental Regional, Asociación Provincial de Desarrollo de Santa Cruz.</p>	
La Libertad	5 (1 activo y 4 latentes)	Socioambiental 5 (100%) 1 activo 4 latentes	<p>Tipo: Socioambiental</p> <p>Caso: Pobladores y organizaciones de Sayapullo demandan la suspensión inmediata de los permisos licencias y autorizaciones otorgadas sobre las concesiones que se encuentran en Sayapullo, por las implicancias ambientales de las mismas, y remediación de Pasivos Ambientales mineros dejados por la Cía. Minera Sayapullo.</p> <p>Ubicación Distrito de Sayapullo, Provincia de Gran Chimú.</p> <p>Actores primarios. Comité de Remediación Ambiental y Reinicio de Actividades Mineras de Sayapullo, Ministerio de Energía y Minas, Corporación Minera San Manuel S.A, Compañía Minera Milpo S.A.A., Rondas Campesinas de Cascas.</p> <p>Actores secundarios: Dirección Regional de Energía y Minas de la Libertad, Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Gobierno Regional de la Libertad, Autoridad Local del Agua de Chicama, Oficina de Fiscalización y Evaluación Ambiental, Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de La Libertad, Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud.</p>	El conflicto socioambiental activo está relacionado con minería y específicamente con contaminación ambiental o supuesta contaminación. Es decir, el 100% de los conflictos socioambientales activos en La Libertad tienen relación con minería y medio ambiente.

Arequipa	5 (1 activo y 4 latentes)	Asunto de Gobierno Nacional 1 latente (20%) Socioambiental 2 latentes (40%) Demarcacion territorial 1 activo (20%) Laboral 1 latente (20%)	No hay conflicto socioambiental activo descrito	No hay conflicto socioambiental activo descrito. (0%)
Tacna	6 (4 activos y 2 latentes)	Asuntos de Gobierno Nacional 1 activo 1 latente (33%) Socioambiental 3 activos (50%) Demarcacion Territorial 1 latente (17%)	<p>Tipo: Socioambiental Caso: a Comunidad Campesina de Ticaco se opone al desarrollo de actividades mineras, por ser incompatible con la actividad agraria, y generar riesgo de afectación a la salud, y calidad de las aguas. Ubicación: Comunidad Campesina de Ticaco, Distrito Ticaco, Provincia Tarata. Actores Primarios: Empresa Minera SRML Norteamericana XXI, empresa Newmont, Municipalidad distrital de Ticaco, la Comunidad Campesina de Ticaco y la Comisión de Regantes de Ticaco. Actores Secundarios: Municipalidad Provincial de Tarata, Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente de Tacna.</p> <p>Tipo: Socioambiental Caso: El Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente de Tacna y otras organizaciones de Tacna se oponen a la explotación minera de MINSUR por posible contaminación de recurso hídrico. Ubicación: Comunidad de Vilavilani, distrito de Palca, provincia de Tacna. Actores Primarios: Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente de Tacna, Empresa minera MINSUR, MINEM.</p> <p>Tipo: Socioambiental. Caso: Oposición del Municipio provincial y organizaciones sociales a la extracción de aguas superficiales y subterráneas por parte de Southern Perú Copper Corporation (SPCC) a favor de sus centros mineros Toquepala (Tacna) y</p>	De los 3 conflictos socioambientales activos 3 de ellos están relacionados con minería y específicamente con contaminación ambiental o supuesta contaminación. Es decir, casi el 100% de los conflictos socioambientales en Tacna tienen relación con minería y medio ambiente.

			<p>Cuajone (Moquegua), que estarían afectando los ríos Callazas, Tacalaya y Salado. Ubicación: Provincia de Candarave.</p> <p>Actores primarios: Municipalidad Provincial de Candarave, Southern Perú Copper Corporation (SPCC), Junta de usuarios de Candarave, Municipalidad provincial de Candarave, Autoridad Local del Agua.</p>	
Moquegua	3 (2 activos y 1 latente)	Asuntos de Gobierno Local 1 latente (33%) Socioambientales 2 activos (67%)	<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Oposición al uso de las aguas subterráneas y la desviación del cauce el río Asana para el proyecto minero Quellaveco.</p> <p>Ubicación: Distrito Torata, Provincia de Mariscal Nieto.</p> <p>Actores Primarios: Agricultores de 28 comunidades andinas de la zona, Minera Anglo American Quellaveco S.A., Gobierno Regional de Moquegua.</p> <p>Actores Secundarios: Ministerio de Energía y Minas, Autoridad Técnica de Riego (ATDR – Moquegua), Dirección Regional Agraria, ONG Labor y CORECAMI.</p>	De los 2 conflictos socioambientales activos 1 de ellos están relacionados con minería y específicamente con contaminación ambiental o supuesta contaminación. Es decir, casi el 50% de los conflictos socioambientales en Moquegua tienen relación con minería y medio ambiente.
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Instituciones Educativas y Organizaciones sociales de Ilo reclaman la reubicación de la Planta y Tanques de Almacenamiento de Hidrocarburos ubicados dentro del radio urbano de la ciudad de Ilo, de propiedad de PETROPERÚ, (otorgados en alquiler a la empresa Consorcio Terminales Graña y Montero), señalando que la emanación de gas de combustible afecta a los escolares y pobladores de la zona.</p> <p>Ubicación: Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua.</p> <p>Actores Primarios: Empresa PETROPERÚ (y Consorcio de Terminales), Municipalidad Provincial de Ilo, Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera, I. E Andrés Avelino Cáceres, I.E. Especial Corazón de Jesús, I.E. Particular San Luis, I.E. Particular Santa Anita, I.E. Particular William Prescott, I.E. Particular San Maximiliano Kolbe. Dirección Regional de Energía y Minas, Frente de Defensa de Ilo, Juntas Vecinales, OSINERGMIN.</p>	

Fuente: Elaboración propia con los datos del Reporte N° 89 de Julio 2011 de la Defensoría del Pueblo

5.5. Anexo 5: Sistematización de los conflictos socioambientales de los 6 departamentos con mayor transferencia de canon minero respecto al Reporte N° 103 de Septiembre 2012 de la Defensoría del Pueblo

Departamento	Conflictos sociales activos y latentes	Por tipo	Descripción de conflictos socioambientales activos	Relacionados con minería y medio ambiente
Ancash	32 (26 activos y 6 latentes)	Asuntos de Gobierno Local 2 activos 1 latente (9%) Asuntos de Gobierno Regional 2 activos (6%) Socioambiental 22 activos 4 latentes (81%) Laboral 1 latente (3%)	<p>Tipo: Socioambiental. Caso: Autoridades del Distrito de Pampas y del Frente de Defensa del Medio Ambiente señalan que la presencia de las empresas mineras Dynacor Exploraciones y Málaga estarían contaminando las aguas de los ríos La Plata y Huaura pues habría presencia de plomo, arsénico y grasa. Esto estaría afectando a las personas, sembríos y animales domésticos. Ubicación: Comunidad Campesina Pampas, Distrito Pampas, Provincia Pallasca. Actores primarios: Alcalde del Distrito de Pampas, Frente de Defensa del Medio Ambiente, Empresa Dynacor Exploraciones y minera Málaga. Actores secundarios: Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno de la Región Áncash (DREM), Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Santa.</p>	De los 22 conflictos socioambientales activos 16 de ellos están relacionados con minería y específicamente con contaminación ambiental o supuesta contaminación. Es decir, casi el 73% de los conflictos socioambientales activos en Ancash tienen relación con minería y medio ambiente.
			<p>Tipo: Socioambiental. Caso: Pobladores exigen que la empresa minera Greenex suspenda los trabajos de obras civiles para el proyecto minero de una Planta Flotadora de Minerales y que la Dirección Regional de Energía y Minas de Áncash suspenda los talleres de participación ciudadana, hasta que se resuelvan los temas judiciales pendientes. Además señalan que la zona donde vienen construyendo el campamento es zona de amortiguamiento del Parque Nacional Huascarán. Ubicación: Distrito Huallanca, Provincia Bolognesi. Actores Primarios: Población y autoridades del Caserío de Buenos Aires Actores Secundarios: Alcalde de Ticapampa, Dirección Regional de Energía y Minas de Áncash (DREM), Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas-SERNANP, Ministerio Público, Poder Judicial.</p>	

		<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: El Presidente de la Asociación de Municipalidades de Centros Poblados (AMUCEPS) de Áncash convocó a una paralización en la provincia de Huari en contra de las empresas mineras ANTAMINA S.A. y Nyrstar, quienes no estarían cumpliendo con sus compromisos de responsabilidad social, así como por los impactos generados en el medio ambiente. Por su parte pobladores de la provincia de Recuay coincidieron con dicha paralización pero plantearon sus reclamos a fin de ser considerados dentro de la zona de influencia de Antamina.</p> <p>Ubicación: Provincia de Recuay, Comunidad Campesina de Catac y Provincia de Huari.</p> <p>Actores primarios: La Asociación de Municipalidades de Centros Poblados (AMUCEPS) de Áncash, Antamina S.A., Nyrstar, Comunidad Campesina de Catác, Federación Agraria Departamental de Áncash (FADA).</p> <p>Actores secundarios: Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Ministerio del Ambiente (MINAM), Ministerio de Inclusión social (MIDIS), Ministerio de Economía (MEF), Ministerio de Agricultura (MINAG), Ministerio de Salud (MINSA), Sub Región Conchucos, Municipalidades de Huari, Chavín de Huantar y San Marcos.</p> <p>Actores terciarios: Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (OGGS) Defensoría del Pueblo, Obispado de Huari, Defensoría del Pueblo.</p>	
		<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Representantes del Caserío de Chipta señalan que se encuentran en el área de influencia directa de la Compañía Minera Antamina, que existe controversia de titularidad de terrenos y presuntos incumplimientos de compromisos asumidos por dicha empresa. A partir de un Informe elaborado por CENSOPAS que señalaría que existe contaminación ambiental por plomo, conforme a la muestra obtenida de un grupo de pobladores; demandan atención de las autoridades de salud y medio ambiente para intervenir en la zona. Ha habido enfrentamientos con personal de la DINOES y de la Comisaría de Yanacancha, quienes no estarían cumpliendo adecuadamente sus funciones.</p> <p>Ubicación: Caserío Chipta, Distrito San Marcos, Provincia Huari. Actores</p>	

			<p>primarios: Pobladores/as del Caserío San Antonio de Chipta, la Asociación Chávez, Compañía Minera Antamina (CMA), Comité de Desarrollo Social y Ambiental de Juprog</p> <p>Actores secundarios: Dirección de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM), CENSOPAS, Dirección Regional de Salud, Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Áncash, DIGESA, Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio Público, Poder Judicial.</p> <p>Actores terciarios: Defensoría del Pueblo.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Pobladores de la comunidad Virgen del Rosario de Quillo señalan que el representante de la concesión minera Exploandina S.A.C. realiza actividades mineras informales de explotación y extracción de minerales.</p> <p>Ubicación: Comunidad Virgen del Rosario, distrito de Quillo, Provincia Yungay.</p> <p>Actores primarios: Empresa Exploandina S.A.C, comunidad campesina Virgen del Rosario de Pocos Carhuapampa Quillo, mineros informales.</p> <p>Actores secundarios: Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno de la Región Áncash, PNP.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: La Asociación de Pescadores, Armadores Artesanales de San Pedro de Puerto Huarmey y pobladores de la zona denuncian el incumplimiento de las actas de compromiso por parte de la Compañía Minera Antamina S.A, las cuales estaban orientadas a establecer formas de apoyo al desarrollo de la población.</p> <p>Ubicación: Distrito y Provincia de Huarmey.</p> <p>Actores Primarios: Comisión de Diálogo y Concertación por el Desarrollo de Huarmey, Asociación de Pescadores, Armadores Artesanales de “San Pedro de Puerto Huarmey”, Municipalidad Provincial de Huarmey, Compañía Minera Antamina S.A.(CMA), Asociación Colectivo de la Provincia de Huarmey.</p> <p>Actores Secundarios: Ministerio del Ambiente (MINAM), Gobierno Regional de Áncash, Oficina de Gestión social del Ministerio de Energía y Minas (OGGS).</p>	

			<p>Actores Terciarios: Unidad de Conflictos Sociales de PCM, Defensoría del Pueblo.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: La población de los valles de los ríos Pativilca, Fortaleza y Santa, hacen llegar su preocupación por los trabajos de exploración minera que viene realizando en la cuenca de estos ríos la empresa Centauro SAC, al parecer incluiría trabajos inclusive en las inmediaciones de la laguna de Conococha donde nacen los ríos indicados, pudiendo afectar sus actividades agropecuarias en los distritos de Pampas Chico, Catac y Cajacay.</p> <p>Ubicación: Comunidad Campesina Huambo, distrito Pampas Chico, Provincia Recuay, a su vez involucra a las poblaciones de los valles de los ríos Pativilca, Fortaleza y Santa</p> <p>Actores Primarios: Representantes de la Mancomunidad de las tres municipalidades de las cuencas hidrográficas del río Santa, Fortaleza y Pativilca, alcaldes y regidores del distrito de Pampas Chico, Huasta y Catac, Frente de Defensa de la Comunidad Campesina de Huambó, Frente Regional de Defensa de la Laguna Conococha, Comunidades Campesinas de Pampas Chico, Chaucayán, representantes de los hijos residentes de la comunidad de Huambó, Asociación Mayorarca, Centro Unión Huambo, empresa Centauro SAC.</p> <p>Actores Secundarios: Frente de Defensa de la Provincia del Santa, Frente de las Organizaciones Agrarias de la Provincia del Santa, Comité Cívico de la Provincia de Recuay, Ministerio de Energía y Minas, Federación Agraria Departamental de Áncash (FADA), representantes de CONACAMI, Junta Nacional de Riego del Perú, Ministerio del Ambiente (MINAM), Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Autoridad Nacional del Agua (ANA).</p> <p>Actores Terciarios: Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (OGGS), Defensoría del Pueblo.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Oposición de la Comisión de Regantes de Parón a la realización de descargas de la laguna de Parón por parte de la empresa Duke Energy. Luego de un proceso de amparo seguido por la empresa ante el Tribunal Constitucional, éste</p>	

		<p>ha fallado ordenando la restitución de las instalaciones a la empresa, hecho que origina descontento en la población.</p> <p>Ubicación: Caserío Laguna de Parón, distrito de Huaylas, Provincia de Caraz.</p> <p>Actores primarios: Frente de Defensa de la Laguna de Parón, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaylas, Comité de Regantes de la cuenca del río Llullan- Parón, Parque Nacional Huascarán, Comité de recuperación de la Laguna de Parón, Empresa Duke Energy, Autoridad Nacional del Agua (ANA), Dirección de Energía del Ministerio de Energía y Minas.</p> <p>Actores secundarios: Gobierno Regional de Áncash, Ministerio del Ambiente (MINAM), INDECI Áncash, Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio Público.</p> <p>Actores Terciarios: Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), Defensoría del Pueblo.</p>	
		<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Comunidad Andrés Avelino Cáceres de Cuncashca exige a Minera Barrick Misquichilca S.A. que los compense por el cierre del camino tradicional que conducía a sus localidades. De otro lado, exigen que dicha empresa cumpla con compromisos asumidos.</p> <p>Ubicación: Comunidad Campesina de Andrés Avelino Cáceres de Cuncashca, distrito de Jangas, Provincia Huaraz.</p> <p>Actores Primarios: Comuneros de la Comunidad Cuncashca, Compañía Minera Barrick Misquichilca, Empresa Comunal ESMAC.</p> <p>Actores Secundarios: Municipalidad distrital de Jangas, municipalidad provincial de Huaraz, Gobierno Regional de Áncash, Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas.</p> <p>Actores terciarios: Comisión Diocesana de Servicio Pastoral Social (CODISPAS), Defensoría del Pueblo.</p>	
		<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: La población de la cuenca del Río Ayash reclama atención a los impactos a la salud y el ambiente ante la denuncia que el río se encuentra contaminado por vertimiento de relaves de la Compañía Minera Antamina. Además, demandan que</p>	

			<p>la empresa concrete su aporte al desarrollo local.</p> <p>Ubicación: Comunidad Ayash Pichiú, distrito de San Marcos, provincia de Huari.</p> <p>Actores primarios: Comunidad de AyashPichiú, Comunidad de Santa Cruz Pichiú, Cia. Minera Antamina (CMA), Asociación multisectorial para el desarrollo sostenible de Ayash (ASODESO).</p> <p>Actores secundarios: Comité de Seguimiento a la Salud Humana (COSESH) de la cuenca del Rio Ayash (integrado por la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Áncash), Dirección Regional de Salud de Áncash, Dirección Ejecutiva de Salud Ambienta.</p> <p>Actores terciarios: Oficina General de Gestión Social del MINEM (OGGS), Defensoría del Pueblo.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Pobladores y autoridades del Centro Poblado de Racrachaca exigen a Compañía Minera Antamina (CMA) la suscripción de un convenio marco de relación institucional para recibir apoyo de la empresa, debido a que se encuentran en el área de influencia. Del mismo modo, la comunidad campesina de Racrachaca exige a Cía minera Antamina y al comité regional de Defensa Civil la realización del estudio de riesgos para prevenir algún desastre en la zona por los derrumbes y deslizamientos que se producen en época de lluvias.</p> <p>Ubicación: Centro Poblado de Racrachaca, Distrito de Aquia, Provincia de Bolognesi.</p> <p>Actores primarios: Centro Poblado Racrachaca, Comunidad Campesina de Racrachaca, Comunidad Campesina de Aquia, Compañía Minera Antamina S.A.</p> <p>Actores secundarios: Gobierno Regional de Áncash, empresa Hidrandina.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Pobladores de la Comunidad Campesina de AngoRaju y del Centro Poblado Carhuayoc (San Marcos, Huari) demandan compensación y apoyo al desarrollo social por parte de Cia. Minera Antamina S.A., a razón de las actividades que desarrolla en la zona.</p> <p>Ubicación: Centro Poblado de Carhuayoc, Distrito de San Marcos, Provincia de Huari.</p>	

			<p>Actores primarios: Comunidad Campesina de AngoRaju, Pobladores del Centro Poblado de Carhuayoc, Frente de Defensa de los Intereses de Desarrollo del Centro Poblado Carhuayoc FEDIP, Compañía Minera Antamina S.A. (CMA).</p> <p>Actores secundarios: Compañía Minera Contonga, Asociación Juventud Carhuayina, Asociación Hijos de Carhuayoc, Ministerio de Energía y Minas (MINEN).</p> <p>Actores terciarios: Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (OGGS), Defensoría del Pueblo.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Conflicto por presunto incumplimiento de acuerdos por parte de Cía minera Antamina y posible contaminación ambiental.</p> <p>Ubicación: Caserío San Antonio de Juprog, distrito de San Marcos, provincia de Huari.</p> <p>Actores primarios: Pobladores/as del Caserío San Antonio de Juprog, Compañía Minera Antamina, Comité de Desarrollo Social y Ambiental de Juprog S.A. (COMEA)</p> <p>Actores secundarios: Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM), Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS), Dirección Regional de Salud.</p> <p>Actores terciarios: Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Áncash, Defensoría del Pueblo, Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (OGGS).</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Los moradores del Distrito de Coishco están siendo afectados con los residuos sólidos que arroja el Municipalidad Provincial del Santa en la entrada de su distrito desde hace varios años, pese a existir una sentencia judicial que lo prohíbe, situación que estaría afectando el ambiente y la salud de los pobladores; por lo que piden el cambio de la ubicación del botadero municipal.</p> <p>Ubicación: Distrito de Coishco, Provincia del Santa.</p> <p>Actores primarios: Municipalidad Provincial del Santa, Municipalidad Distrital de Coishco, pobladores del distrito de Coishco. Frente de Defensa del Medio</p>	

			Ambiente de Coishco.	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Las organizaciones usuarios de agua del Caserío de Atupa y Antaurán reclaman a la Empresa Minera Barrick Misquichilca S.A. que devuelvan el manantial Yarcok y cuestionan la calidad del agua que se usa en la zona de influencia minera. Señalan que al realizarse las operaciones mineras, dicha fuente de recurso hídrico se secó, según la empresa así estuvo establecido en el EIA, el cual fuera aprobado en su momento por las autoridades ambientales.</p> <p>Ubicación: Atupa Antaurán, Distrito Jangas, Provincia Huaraz.</p> <p>Actores primarios: Comité de Regantes de Atupa, Comité de Regantes de Antaurán y Empresa Minera Barrick Misquichilca S.A. (MBM)</p> <p>Actores secundarios: Autoridad Local del Agua (ALA Huaraz), Ministerio de Energía y Minas (MINEM).</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental</p> <p>Caso: Representantes de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) de Mareniyoc señalan que desde años atrás años tienen problemas por el uso y disponibilidad del agua con la empresa Barrick Misquichilca S.A. Que cuando se secó el manantial de Shulcan, la empresa se comprometió a dotarles de recurso hídrico pero progresivamente ello se ha ido restringiendo, además que desde el año 2007 cuentan con resoluciones administrativas del Distrito de Riego, en la que les autorizan el uso de agua por una determinada cantidad de metros cúbicos. Manifiestan que a la fecha no tienen captación de agua y sólo vienen usando las aguas de las lluvias, con el perjuicio que ello representa para la comunidad.</p> <p>Ubicación: Comunidad Campesina Mareniyoc, distrito Jangas, provincia Huaraz.</p> <p>Actores Primarios: Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) Mareniyoc y Empresa Minera Barrick Misquichilca S.A.</p> <p>Actores Secundarios: Autoridad Local del Agua (ALA) Huaraz, Ministerio de Energía y Minas (MINEM).</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Pobladores y agricultores de Yaután, Pariacoto y Casma reclaman porque la</p>	

			<p>actividad minera que pretende realizar minera San Luis afectaría la actividad agrícola. Así mismo que no han sido considerados como zona de influencia del proyecto, y que no han sido convocados a los talleres informativos.</p> <p>Ubicación: Distrito Yaután, provincia de Casma, distrito de Pariacoto, provincia de Huaraz.</p> <p>Actores Primarios: Frente de Defensa de los Intereses de Casma, Federación Agraria Departamental de Áncash (FADA), empresa minera San Luis.</p> <p>Actores Secundarios: Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente.</p> <p>Actores Terciarios: Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (OGGS), Defensoría del Pueblo.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Los pobladores demandan la intervención de las autoridades competentes para que determinen las responsabilidades por el derrame de hidrocarburos en un afluente de la Laguna Huachucocha el 03 de mayo de 2012, en el Km 91+ 400 en la carretera de penetración Conococha – Antamina, que habría sido producto de la ruptura del tanque de combustible de una unidad siniestrada de la empresa ACOINSA (contratista de ANTAMINA S.A.).</p> <p>Ubicación: Comunidad Campesina Túpac Amaru, distrito San Marcos, provincia Huari</p> <p>Actores primarios: Pobladores de la Comunidad Campesina Túpac Amaru, Municipalidad Distrital de San Marcos, Empresa minera Antamina.</p> <p>Actores secundarios: ALA Huari, MINEM; MINAM, DIRESA, Gerencia de Recursos Naturales de la Región Áncash.</p> <p>Actores Terciarios: Defensoría del Pueblo.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Pobladores del Sector denominado Huanca en el Caserío de Quihuay, distrito de Macate, Santa, Áncash, denuncian que se realiza la extracción y proceso de materiales de manera informal sin estudio de impacto ambiental.</p> <p>Ubicación: Comunidad Quihuay, distrito Macate, provincia Santa.</p> <p>Actores primarios: Concesión Minera Centro Minero Fortaleza Sac, Alcalde del distrito de Macate, Pobladores de caserío Quihuay y sector Huanca.</p>	

			Actores Secundarios: Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno de la Región Áncash, Ministerio Público.	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: La Comunidad Campesina de Cajacay exige a Compañía Minera Antamina asuma responsabilidades por el derrame de mineral (cobre y otros) ocurrido con fecha 25 de julio de 2012 en el Caserío de Santa Rosa del distrito de Cajacay, producto de la rotura del codo de una de las válvulas del mineroducto (VS1);</p> <p>Ubicación: Comunidad Campesina de Santa Rosa, caserío Cajacay, distrito Cajacay, provincia Bolognesi</p> <p>Actores Primarios: Agente Municipal del Caserío de Santa Roda, Comunidad Campesina de Cajacay, Alcalde Distrital de Cajacay, Compañía Minera Antamina,</p> <p>Actores Secundarios: Gobierno Regional de Áncash, OEFA , Ministerio Público, Ministerio de Salud (MINSA),</p> <p>Actores Terciarios: Defensoría del Pueblo.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Los Pobladores de los Centros Poblados señalan que la empresa minera ha incumplido en reiteradas oportunidades los acuerdos firmados, acuerdos que constan en los libros de actas de la dos comunidades, en las que se detallan compromisos específicos de parte d la empresa para la implementación de proyectos orientados a fortalecer el desarrollo social de ambas comunidades. Así mismo, consideran que los trabajadores de la Planta de Concentración, son pobladores del lugar y demandan mayores consideraciones y beneficios laborales por parte de la empresa, siendo los puntos más relevantes del pliego de reclamos que se mejoren las remuneraciones, capacitación, trato justo y respetuoso, bonos de productividad, mejores condiciones alimentarias, entre otros beneficios.</p> <p>Ubicación: Comunidad Campesina de Buenos Aires y Yacucancha, distrito Ticapampa, provincia Recuay.</p> <p>Actores Primarios: Alcaldes de los Centros Poblados de Yacucancha y Buenos Aires, Tenientes Gobernadores, Alcalde del distrito de Ticapampa, representantes de la Corporación Minera Toma la Mano, Directora de la Institución Educativa de</p>	

			<p>Buenos Aires, Pobladores. Actores Secundarios: Dirección Regional de Energía y Minas. Actores Terciarios: Defensoría del Pueblo.</p> <p>Tipo: Socioambiental Caso: Pobladores de la Comunidad Campesina de Tumpa se oponen a las actividades que desarrolla la Empresa Minera California ante el vencimiento e incumplimiento del contrato de servidumbre por el alquiler de 25 ha de terreno comunal, así como consideran que las actividades de extracción no cumplen con los estándares ambientales y solicitan la intervención de las autoridades administrativas y judiciales. Ubicación: Comunidad Campesina de Tumpa, distrito de Mancos, provincia de Yungay. Actores primarios: Pobladores de la comunidad Campesina de Tumpa y empresa Minera California Actores secundarios: Dirección Regional de Energía y Minas, Ministerio de Energía y Minas.</p>	
Cajamarca	13 (10 activos y 3 latentes)	<p>Asuntos de Gobierno Local 1 latente (8%) Socioambiental 9 activos (69%) Demarcacion territorial 1 latente (8%) Laboral 1 latente (8%) Otros 1 activo (8%)</p>	<p>Tipo: Socioambiental Caso. Pobladores del Distrito de la Encañada demandan a la Empresa Minera Yanacocha SRL el cumplimiento de compromisos pendientes y firma de un acuerdo social, para el financiamiento de proyectos de inversión por parte de la Municipalidad Distrital de la Encañada. Ubicación: Distrito de La Encañada, Provincia de Cajamarca. Actores primarios: Población de los caseríos y centros poblados del Distrito de la Encañada, Empresa Minera Yanacocha SRL, Municipalidad Distrital de La Encañada. Actores secundarios: Gobierno Regional de Cajamarca, Municipalidad Provincial de Hualgayoc, Ministerio del Ambiente, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Actores terciarios: Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, Gobernación Regional de Cajamarca, Defensoría del Pueblo.</p>	De los 9 conflictos socioambientales activos 6 de ellos están relacionados con minería y específicamente con contaminación ambiental o supuesta contaminación. Es decir, casi el 67% de los conflictos socioambientales activos en Cajamarca tienen relación con minería y medio ambiente
			Tipo: Socioambiental.	

		<p>Caso: Autoridades de la provincia de Hualgayoc y del Distrito de Chugur se oponen a la ampliación del Proyecto Minero Tantauatay –Ciénaga Norte aduciendo observaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA), tales como que el mismo no considera la Zonificación Ecológica Económica de la Región y se encuentra en zona que constituiría cabecera de cuenca.</p> <p>Ubicación: Distrito Chugur. Provincia de Hualgayoc.</p> <p>Actores primarios: Municipalidad Distrital de Chugur, Gobierno Regional de Cajamarca, Cía. Minera Coimolache SA – Proyecto Minero Tantauatay, Comité Interprovincial de Rondas Campesinas, Central Única Provincial de Rondas Campesinas de Hualgayoc, Frente de Defensa Provincial de Hualgayoc.</p> <p>Actores secundarios: Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros y la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente.</p> <p>Actores terciarios: Defensoría del Pueblo</p>	
		<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Autoridades, representantes de organizaciones de sociedad civil y comuneros de las Provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc demandan se declare la inviabilidad del Proyecto minero Conga de la Empresa Minera Yanacocha SRL, por los impactos ambientales negativos susceptibles de generarse en el ambiente, ante la afectación a 4 lagunas consideradas cabecera de 05 cuencas hidrográficas.</p> <p>Ubicación: Distritos de Huasmín y Sorochuco – Provincia de Celendín. Distrito de la Encañada – Provincia de Cajamarca.</p> <p>Actores primarios: Gobierno Regional de Cajamarca, Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, Frente de Defensa de los Intereses de Cajamarca, Asociación civil Plataforma Interinstitucional Celendina – PIC, Empresa Minera Yanacocha SRL. – Proyecto Minero Conga, Municipalidad Distrital de Huasmín, Municipalidad Distrital de Sorochuco, Municipalidad Provincial de Celendín, Municipalidad Distrital de Bambamarca, Municipalidad Provincial de Cajamarca, Municipalidad Distrital de la Encañada, Municipalidad Distrital de La Encañada, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, Presidencia de Consejo</p>	

			<p>de Ministros.</p> <p>Actores secundarios: Gobernador de la Región Cajamarca, Autoridad Nacional del Agua, Presidente de la Cámara de Comercio de Cajamarca, Decano del Colegio de Abogados de Cajamarca, Universidad Nacional de Cajamarca, Ministerio del Interior, Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Vivienda y Saneamiento, Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible – GRUFIDES.</p> <p>Actores terciarios: Sacerdotes Miguel Cabrejos y Gastón Garatea, Defensoría del Pueblo.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: La población de Chuquibamba y Condebamba se oponen a las actividades mineros ilegales e informales que se desarrollan en el cerro Algamarca y la zona de la Chilca debido al impacto ambiental negativo que estas ocasionan.</p> <p>Ubicación: Distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba.</p> <p>Actores primarios: Pobladores del Centro Poblado Chuquibamba, Asociación de Mineros Informales, Frente de Defensa del Medio Ambiente del Valle de Condebamba, y Empresa Minera Sullidén Shahuindo SAC.</p> <p>Actores secundarios:, Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Cajamarca, la Comisaría PNP de Cajabamba, Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno Regional de Cajamarca.</p> <p>Actores terciarios: Defensoría del Pueblo.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: El Pueblo de Hualgayoc demanda el cumplimiento de compromisos que la Empresa Minera Goldfield – La Cima SAA (Proyecto Cerro Corona) asumió respecto al abastecimiento de agua, energía eléctrica, rajaduras en viviendas producto de las actividades mineras desarrolladas en la zona.</p> <p>Ubicación: Distrito de Hualgayoc. Provincia de Hualgayoc.</p> <p>Actores Primarios: Municipalidad Distrital de Hualgayoc, Empresa Minera Gold Fields–La Cima S.A - Proyecto Cerro Corona, Rondas Campesinas, Mesa de Diálogo de Hualgayoc, Frente Único de los Interés del Pueblo de Hualgayoc,</p>	

			<p>Frente de Defensa de los Intereses de Hualgayoc. Actores Secundarios: Gobernación y Asociación de Trabajadores del Pueblo de Hualgayoc, Gobierno Regional de Cajamarca, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO. Actores terciarios: Defensoría del Pueblo.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental. Caso: La Comunidad Campesina El Tingo demanda que la Cía. Minera Coimolache S. A. cumpla compromisos sociales asumidos y aclare la compra y venta de tierras toda vez que los comuneros percibían que se está ocupando mayor cantidad de tierras de las que corresponde. Ubicación: Comunidad Campesina El Tingo, Distrito de Hualgayoc. Provincia de Hualgayoc. Actores primarios: Comunidad Campesina El Tingo, Compañía Minera Coimolache SA – Proyecto Minero Tintahutay. Actores secundarios: Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental. Caso: Los pobladores se oponen al proyecto minero La Zanja por temor a la contaminación ambiental que puede generar el mismo, al encontrarse en cabecera de cuenca. Ubicación: Distrito de Pulán, provincia de Santa Cruz. Actores primarios: Pobladores de Pulán, Minera La Zanja SRL, Federación Provincial de Rondas Campesinas y urbanas de la provincia de Santa Cruz, Frente de Defensa de Santa Cruz, Asociación de Rondas Campesinas de la Provincia de Santa Cruz. Actores secundarios: Municipalidad Provincial de Santa Cruz, Municipalidad Distrital de Pulan Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chancay, Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Cajamarca, Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas, Comisión Ambiental Regional, Asociación Provincial de Desarrollo de Santa</p>	

			<p>Cruz.</p> <p>Actores terciarios: Defensoría del Pueblo.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Autoridades y pobladores del Distrito de Baños del Inca exigen que la Empresa Minera Yanacocha SRL respete lo dispuesto por la Ordenanza No. 051-2006-MDBI a través de la cual se creó el área de conservación municipal en torno a la microcuenca del río Quinuario así como en parte de las microcuencas de los ríos Grande y Mashcon, consecuentemente paralice las actividades de exploración que viene desarrollando en la zona.</p> <p>Ubicación: Distrito de Baños del Inca, Provincia Cajamarca.</p> <p>Actores Primarios: Municipalidad Distrital de Baños del Inca, Comité de Gestión del Recurso Hídrico, Comisión Especial de Defensa de la Ordenanza No. 051-2006-MDBI, Empresa Minera Yanacocha SRL.</p> <p>Actores Secundarios: 34° Juzgado Civil de la Corte Superior de Lima, Fiscalía Especializada en materia Ambiental de Cajamarca y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental con sede en Cajamarca.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Autoridades y dirigentes de las Comunidades Nativas de San José de Lourdes y sus organizaciones representativas rechazan la presencia de la empresa Exploraciones Mineras Águila Dorada S.A.C., ante el temor de posible contaminación.</p> <p>Ubicación: Distrito de San José de Lourdes, Provincia de San Ignacio.</p> <p>Actores primarios: Comunidad Nativa de Supayacu, Comunidad Nativa de Naranjos, Comunidades Nativas de San José de Lourdes, Organización Regional Aguaruna de San Ignacio (ORASI), Organización Fronteriza Awajún de Cajamarca (ORFAC), Municipalidad Distrital de San José de Lourdes, Rondas Campesinas de San José de Lourdes, Municipalidad Provincial de San Ignacio, Dirección Regional de Energía y Minas de Cajamarca, Exploraciones Mineras Águila Dorada SAC.</p> <p>Actores secundarios: Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú, Gobierno Regional de Cajamarca, Ministerio de Energía y Minas.</p>	

			Actores terciarios: Vicaría de San José de Lourdes, Defensoría del pueblo.	
La Libertad	4 (4 activos y 0 latente)	Socioambiental 4 activos (100%)	<p>Tipo: Socioambiental</p> <p>Caso: Campesinos y Ronderos demandan el retiro de la Empresa Minera Barrick Misquichilca S.A. (Proyecto Las Lagunas Sur) por temor a la afectación a 05 lagunas consideradas cabecera de cuencas y afectación a las labores agrícolas y ganaderas, que la actividad minera que pretenden desarrollar en la zona sea susceptible de generar.</p> <p>Ubicación: Distrito de Quiruvilca. Provincia de Santiago de Chuco.</p> <p>Actores primarios. Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, Municipalidad de Distrital de Quiruvilca, Asociación de los Caseríos del Distrito de Laredo, Central de Rondas Campesinas de Santiago de Chuco, Central Única Regional de Rondas Campesinas de La Libertad y Empresa Minera Barrick Misquichilca SA.</p> <p>Actores secundarios. Autoridad Nacional del Agua, Ministerio de Energía y Minas.</p>	De los 4 conflictos socioambientales activos 3 de ellos están relacionados con minería y específicamente con contaminación ambiental o supuesta contaminación. Es decir, el 75% de los conflictos socioambientales activos en La Libertad tienen relación con minería y medio ambiente.
			<p>Tipo: Socioambiental</p> <p>Caso: Comuneros de las Comunidades Campesinas de Huacascorral, Totoropampa, Tambopampamarca, y Cruz de Chuca, exigen a la Compañía Minera Aurífera Santa Rosa SA que cumpla con ejecutar el proyecto de abastecimiento de agua potable para consumo humano.</p> <p>Ubicación: Distrito de Angasmarcha, Provincia Santiago de Chuco.</p> <p>Actores primarios. Comunidad Campesina de Huacascorral, Comunidad Campesina de Totoropampa, Comunidad Campesina Tambopampamarca y Comunidad Campesina Cruz de Chuca, Compañía Minera Aurífera Santa Rosa S.A. – COMARSA.</p> <p>Actores secundarios. Municipalidad Distrital de Angasmarcha, Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, Gobierno Regional de la Libertad.</p> <p>Actores Terciario. Defensoría del Pueblo.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Pobladores y organizaciones del distrito de Sayapullo demandan la suspensión inmediata de los permisos, licencias y autorizaciones otorgadas sobre</p>	

		<p>las concesiones localizadas en dicho distrito, debido a las implicancias ambientales de las mismas, asimismo, exigen la remediación de los pasivos ambientales mineros que habría generado la Compañía Minera Sayapullo S.A.</p> <p>Ubicación Distrito de Sayapullo, Provincia de Gran Chimú.</p> <p>Actores primarios: Comité de Remediación Ambiental y Reinicio de Actividades Mineras de Sayapullo, Ministerio de Energía y Minas, Cía. Minera Sayapullo SA, Corporación Minera San Manuel S.A, Compañía Minera Milpo S.A.A., Rondas Campesinas de Cascas.</p> <p>Actores secundarios: Dirección Regional de Energía y Minas de la Libertad, Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Gobierno Regional de la Libertad, Autoridad Local del Agua de Chicama, Oficina de Fiscalización y Evaluación Ambiental del Ministerio del Ambiente, Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de La Libertad, Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud.</p> <p>Actores terciarios: Defensoría del Pueblo.</p>	
		<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Pobladores de las Comunidades Campesinas de Coygobamba, Shiracmaca y El Toro, demandan la intervención de autoridades competentes para atender problema social y ambiental generado en torno a las actividades mineras formales e informales desarrolladas en el Cerro El Toro y zonas aledañas.</p> <p>Ubicación: Distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión</p> <p>Actores primarios: Comunidades Campesinas de Coygobamba, Shiracmaca y El Toro, Empresa Minera Corporación del Centro SA, mineros ilegales e informales, Dirección Regional de Energía y Minas de La Libertad.</p> <p>Actores secundarios: Gobierno Regional de La Libertad, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, Fiscalía Provincial Mixta de Sánchez Carrión.</p>	

Arequipa	3 (2 activos y 1 latente)	Socioambiental 1 activo (33%) Demarcacion Territorial 1 latente (33%) Laboral 1 activo (33%)	<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Mineros informales protestan contra decretos legislativos que regulan la actividad minera artesanal e informal, y piden que se den facilidades para que sigan operando mientras dure el proceso de formalización.</p> <p>Ubicación: Distrito Chala, provincia de Caravelí.</p> <p>Actores Primarios: Federación Única de Mineros Artesanales de Arequipa (Fumara), Presidencia del Consejo de Ministros PCM, Ministerio de Energía y Minas (MINEM).</p> <p>Actores Secundarios: Dirección Regional de Energía y Minas</p> <p>Actores Terciarios: Defensoría del Pueblo</p>	Del conflicto socioambiental activo, no hay relación con minería y medio ambiente en Arequipa (0%).
Tacna	6 (4 activos y 2 latentes)	Socioambiental 4 activos (67%) Demarcacion territorial 2 latente (33%)	<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Agricultores de las Juntas de Usuarios de los Distritos de Riego de Tacna, se oponen al proyecto “Ampliación de la Concentradora Toquepala y Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda”, a cargo de Southern Perú Copper Corporation porque, entre otras demandas, restaría agua a la actividad agrícola.</p> <p>Ubicación: Distritos de Ilabaya y Locumba, Provincia Jorge Basadre.</p> <p>Actores primarios: Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Candarave, Tarata, Locumba, Sama, La Yarada y Tacna, Frente de Defensa de Tacna, de Candarave y del Distrito de Ilabaya, empresa Minera Southern Perú Copper Corporation (SPCC), Gobierno Regional de Tacna, Municipalidades provinciales de Tacna, Candarave, Tarata y Jorge Basadre, Municipalidades distritales de la región Tacna,</p> <p>Actores secundarios: Ministerio de Energía y Minas (MEM), Ministerio del Ambiente (MINAM), Dirección Regional de Energía y Minas, Presidencia del Consejo de Ministros, Autoridad Nacional del Agua (ANA).</p> <p>Actores Terciarios: Defensoría del Pueblo.</p>	De los 4 conflictos socioambientales activos 4 de ellos están relacionados con minería y específicamente con contaminación ambiental o supuesta contaminación. Es decir, casi el 100% de los conflictos socioambientales en Tacna tienen relación con minería y medio ambiente.
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: La Comunidad Campesina de Ticaco se opone al desarrollo de actividades mineras, por ser incompatible con la actividad agraria, y generar riesgo de afectación a la salud, y calidad de las aguas.</p>	

			<p>Ubicación: Comunidad Campesina de Ticaco, Distrito de Ticaco, Provincia de Tarata.</p> <p>Actores primarios: Empresa Minera SRML Norteamericana XXI, empresa Newmont, Municipalidad distrital de Ticaco, la Comunidad Campesina de Ticaco y la Comisión de Regantes de Ticaco.</p> <p>Actores secundarios: Municipalidad Provincial de Tarata, Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente de Tacna.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: El Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente de Tacna y otras organizaciones de Tacna se oponen a la explotación minera de MINSUR por posible contaminación del recurso hídrico.</p> <p>Ubicación: Comunidad de Vilavilani, Distrito de Palca, Provincia de Tacna.</p> <p>Actores primarios: Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente de Tacna, empresa minera MINSUR, Entidad prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS).</p> <p>Actores secundarios: Ministerio de Energía y Minas (MINAM), Ministerio del Ambiente (MINAM), Ministerio de Cultura. Actores Terciarios: Defensoría del Pueblo, Alcalde Provincial de Tacna</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Oposición del Municipio provincial y organizaciones sociales a la extracción de aguas superficiales y subterráneas por parte de Southern Perú Copper Corporation (SPCC) a favor de sus centros mineros Toquepala (Tacna) y Cuajone (Moquegua), que estarían afectando los ríos Callazas, Tacalaya y Salado.</p> <p>Ubicación: Provincia de Candarave.</p> <p>Actores primarios: Municipalidad Provincial de Candarave, Southern Perú Copper Corporation (SPCC), Junta de usuarios de Candarave.</p> <p>Actores Secundarios: Ministerio de Energía y Minas.</p>	
Moquegua	3 (3 activos y 0 latentes)	Socioambiental 3 activos (100%)	<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Autoridades regionales, locales, agricultores, representantes del Frente de Defensa del Distrito de Torata y organizaciones sociales de Moquegua reclaman a la empresa Southern Perú Copper Corporation (SPCC) compensación por los</p>	De los 3 conflictos socioambientales activos 1 de ellos están relacionados con minería y específicamente con contaminación ambiental o supuesta

		<p>impactos ambientales, en explotación desde hace varios años, entre ellos, la explotación del yacimiento Cuajone.</p> <p>Ubicación: Distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto y provincia de Ilo.</p> <p>Actores primarios: Gobierno Regional, municipalidades provinciales de Ilo y Mariscal Nieto, Municipalidad Distrital de Torata, Agricultores de Torata, Frente de Defensa de Torata, empresa Southern Perú Copper Corporation (SPCC) Frente de defensa de Moquegua, Junta de Usuarios del Distrito de Riego.</p> <p>Actores secundarios: Autoridad Nacional del Agua (ANA) Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).</p> <p>Actores terciarios: Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Defensoría del Pueblo.</p>	contaminación. Es decir, casi el 33% de los conflictos socioambientales en Moquegua tienen relación con minería y medio ambiente.
		<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Instituciones Educativas y Organizaciones sociales de Ilo reclaman la reubicación de la Planta y Tanques de Almacenamiento de Hidrocarburos ubicados dentro del radio urbano de la ciudad de Ilo, de propiedad de PETROPERÚSA, (otorgados en alquiler a la empresa Consorcio Terminales Graña y Montero), señalando que la emanación de gas de combustible afecta a los escolares y pobladores de la zona.</p> <p>Ubicación: Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua.</p> <p>Actores primarios: PETROPERÚSA (y Consorcio de Terminales), Municipalidad Provincial de Ilo, Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera, I. E. Andrés Avelino Cáceres, I.E. Especial Corazón de Jesús, I.E. Particular San Luis, I.E. Particular Santa Anita, I.E. Particular William Prescott, I.E. Particular San Maximiliano Kolbe. Dirección Regional de Energía y Minas de Moquegua, Frente de Defensa de Ilo, Juntas Vecinales, OSINERGMIN.</p> <p>Actores secundarios: Asociación Civil Transparencia, Superintendencia de Bienes Nacionales.</p> <p>Actores Terciarios. Defensoría del Pueblo.</p>	

			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Representantes de la comunidad de Corire exigen el retiro de la empresa Canteras del Hallazgo (CDH) del territorio de su comunidad debido al incumplimiento del Convenio Marco celebrado entre ellos.</p> <p>Ubicación: Distrito de Ichuña, provincia de General Sánchez Cerro, Departamento de Moquegua</p> <p>Actores primarios: Comunidad de Corire, Empresa Canteras del Hallazgo (CDH).</p> <p>Actores secundarios: Dirección Regional de Energía y Minas (DREM)</p> <p>Actores terciarios: Oficina General de Gestión Social del MINEM (OGGS), Defensoría del Pueblo.</p>	
--	--	--	---	--

Fuente: Elaboración propia con los datos del Reporte N° 103 de Septiembre 2012 de la Defensoría del Pueblo

5.6. Anexo 6: Sistematización de los conflictos socioambientales de los 6 departamentos con mayor transferencia de canon minero respecto al Reporte N° 117 de Noviembre 2013 de la Defensoría del Pueblo

Departamento	Conflictos sociales activos y latentes	Por tipo	Descripción de conflictos socioambientales activos	Relacionados con minería y medio ambiente
Ancash	30 (21 activos y 9 latentes)	Asuntos de Gobierno Local 1 activo 1 latente (7%) Asunto de Gobierno Regional 1 latente (3%) Socioambiental 19 activos 5 latentes (80%) Laboral 2 latentes (7%) Otros asuntos 1 activo (3%)	<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: El presidente de la Asociación de Municipalidades de Centros Poblados (AMUCEPS) de Huari convocó a una paralización en la provincia de Huari en contra de las empresas mineras Antamina S.A. y Nyrstar, quienes no estarían cumpliendo con sus compromisos de responsabilidad social, así como por los impactos generados en el medio ambiente. Por su parte pobladores de la provincia de Recuay coincidieron con dicha paralización pero plantearon sus reclamos a fin de ser considerados dentro de la zona de influencia de Antamina.</p> <p>Ubicación: Comunidad Campesina de Catac. Provincia de Huari y Provincia de Recuay.</p> <p>Actores primarios: Asociación de Municipalidades de Centros Poblados (AMUCEPS) de Huari, Compañía Minera Antamina S.A. (CMA), Nyrstar, Comunidad Campesina de Catác, Federación Agraria Departamental de Áncash (FADA).</p> <p>Actores secundarios: Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Ministerio del Ambiente (MINAM), Ministerio de Inclusión social (MIDIS), Ministerio de Economía (MEF), Ministerio de Agricultura (MINAG), Ministerio de Salud (MINSA), Sub Región Conchucos, Municipalidades de Huari, Chavín de Huantar y San Marcos.</p> <p>Actores terciarios: Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (OGGS), Defensoría del Pueblo, Obispado de Huari.</p>	De los 19 conflictos socioambientales activos 13 de ellos están relacionados con minería y específicamente con contaminación ambiental o supuesta contaminación. Es decir, casi el 68% de los conflictos socioambientales activos en Ancash tienen relación con minería y medio ambiente.
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Representantes del Caserío de Chipta señalan que se encuentran en el área de influencia directa de la Compañía Minera Antamina S.A. y que existen</p>	

			<p>reclamos por la titularidad de terrenos y presuntos incumplimientos de compromisos asumidos por dicha empresa. A partir de un informe elaborado por CENSOPAS que señalaría que existe contaminación ambiental por plomo, conforme a la muestra obtenida de un grupo de pobladores, demandan atención de las autoridades de salud y medio ambiente para intervenir en la zona. Se cuestiona la intervención de personal de DINOES y la existencia de la Comisaría en Yanacancha.</p> <p>Ubicación: Caserío Chipta, distrito San Marcos, provincia de Huari.</p> <p>Actores primarios: Pobladores/as del Caserío San Antonio de Chipta, la Asociación Chávez, Compañía Minera Antamina S.A. (CMA), Comité de Desarrollo Social y Ambiental de Juprog.</p> <p>Actores secundarios: Dirección de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM), Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS), Dirección Regional de Salud (DIRESA), Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Áncash, Dirección General de Salud (DIGESA), Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio Público, Poder Judicial.</p> <p>Actores terciarios: Defensoría del Pueblo.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: La Asociación de Pescadores, Armadores Artesanales de San Pedro de Puerto Huarmey y pobladores de la zona denuncian el incumplimiento de las actas de compromiso por parte de la Compañía Minera Antamina S.A., las cuales estaban orientadas a establecer formas de apoyo al desarrollo de la población.</p> <p>Ubicación: Distrito y provincia de Huarmey.</p> <p>Actores primarios: Comisión de Diálogo y Concertación por el desarrollo de Huarmey, Asociación de Pescadores, Armadores Artesanales de “San Pedro de Puerto Huarmey”, Frente de Defensa de la Intereses de Huarmey (FEDIP), Municipalidad Provincial de Huarmey (MPH), Compañía Minera Antamina S.A.(CMA), Asociación Colectivo de la Provincia de Huarmey.</p> <p>Actores secundarios: Ministerio del Ambiente (MINAM), Gobierno Regional de</p>	

			<p>Áncash, Oficina General de Gestión social del Ministerio de Energía y Minas (OGGS) Ministerio del Ambiente (MINAM), Gobierno Regional de Áncash, Oficina de Gestión social del Ministerio de Energía y Minas (OGGS), el Consejo de Coordinación Local Provincial de Huarmey (CCL).</p> <p>Actores terciarios: Oficina Nacional de Diálogo y la Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (ONDS), Defensoría del Pueblo.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Oposición de la Comisión de Regantes de Parón a la realización de descargas de la laguna de Parón por parte de la empresa Duke Energy. Luego de un proceso de amparo seguido por la empresa ante el Tribunal Constitucional, éste ha fallado ordenando la restitución de las instalaciones a la empresa, hecho que origina descontento en la población.</p> <p>Ubicación: Caserío Laguna de Parón, distrito de Caraz, provincia de Huaylas.</p> <p>Actores primarios: Frente de Defensa de la Laguna de Parón, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaylas, Comité de Regantes de la cuenca del río Llullan- Parón, Parque Nacional Huascarán, Comité de recuperación de la Laguna de Parón, Empresa Duke Energy, Autoridad Nacional del Agua (ANA), Dirección de Energía del Ministerio de Energía y Minas.</p> <p>Actores secundarios: Gobierno Regional de Áncash, Ministerio del Ambiente (MINAM), INDECI Áncash, Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio Público.</p> <p>Actores terciarios: Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), Defensoría del Pueblo.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Comunidad Andrés Avelino Cáceres de Cuncashca exige a Minera Barrick Misquichilca S.A. que los compense por el cierre del camino tradicional que conducía a sus localidades. De otro lado, exigen que dicha empresa cumpla con compromisos asumidos.</p> <p>Ubicación: Comunidad Campesina Andrés Avelino Cáceres de Cuncashca, distrito de Jangas, provincia de Huaraz.</p> <p>Actores primarios: Comuneros de la Comunidad Cuncashca, Compañía Minera</p>	

			<p>Barrick Misquichilca S.A. (MBM), Empresa Comunal ESMAC.</p> <p>Actores secundarios: Municipalidad distrital de Jangas, Municipalidad Provincial de Huaraz, Gobierno Regional de Áncash, Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (OGGS).</p> <p>Actores terciarios: Comisión Diocesana de Servicio Pastoral Social (CODISPAS), Defensoría del Pueblo.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: La población de la cuenca del Río Ayash reclama atención a los impactos a la salud y el ambiente ante la denuncia que el río se encuentra contaminado por vertimiento de relaves de la Compañía Minera Antamina S.A. Además, demandan que la empresa concrete su aporte al desarrollo local.</p> <p>Ubicación: Comunidad Ayash Pichiú, distrito de San Marcos, provincia de Huari.</p> <p>Actores primarios: Comunidad Ayash Pichiú, Comunidad Santa Cruz Pichiú, Compañía Minera Antamina S.A. (CMA), Asociación multisectorial para el desarrollo sostenible de Ayash (ASODESO).</p> <p>Actores secundarios: Comité de Seguimiento a la Salud Humana (COSESH) de la cuenca del Río Ayash (integrado por la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Áncash), Dirección Regional de Salud de Áncash (DIRESA), Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA); Autoridad Nacional del Agua (ANA), Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Organismo Supervisor de la Inversión en Minería y Energía (OSINERGMIN), Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS), Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED).</p> <p>Actores terciarios: Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (ONDS), Oficina General de Gestión Social del MINEM (OGGS), Defensoría del Pueblo.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Pobladores de la Comunidad Campesina de Angoraju y del Centro Poblado Carhuayoc (San Marcos, Huari) demandan compensación y apoyo al desarrollo</p>	

			<p>social por parte de Compañía Minera Antamina S.A. (CMA) a razón de las actividades que desarrolla en la zona.</p> <p>Ubicación: Centro Poblado de Carhuayoc, distrito de San Marcos, provincia de Huari.</p> <p>Actores primarios: Comunidad Campesina de Angoraju, Pobladores del Centro Poblado de Carhuayoc, Frente de Defensa de los Intereses de Desarrollo del Centro Poblado Carhuayoc FEDIP, Compañía Minera Antamina S.A. (CMA).</p> <p>Actores secundarios: Compañía Minera Contonga, Asociación Juventud Carhuayina, Asociación Hijos de Carhuayoc, Ministerio de Energía y Minas (MINEN).</p> <p>Actores terciarios: Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (OGGS), Defensoría del Pueblo.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Autoridades y pobladores del Caserío San Antonio de Juprog demandan el cumplimiento de acuerdos a la Compañía Minera Antamina S.A. (CMA) y solicitan intervención de autoridades ante presuntos impactos ambientales que originan sus actividades en la zona.</p> <p>Ubicación: Caserío San Antonio de Juprog, distrito de San Marcos, provincia de Huari.</p> <p>Actores primarios: Pobladores/as del Caserío San Antonio de Juprog, Compañía Minera Antamina S.A. (CMA), Comité de Desarrollo Social y Ambiental de Juprog S.A. (COMEAS).</p> <p>Actores secundarios: Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM), Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS), Dirección Regional de Salud.</p> <p>Actores terciarios: Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Áncash, Defensoría del Pueblo, Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (OGGS).</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Los moradores del distrito de Coishco están siendo afectados con los residuos sólidos que arroja la Municipalidad Provincial del Santa en la entrada de</p>	

			<p>su distrito desde hace varios años, pese a existir una sentencia judicial que lo prohíbe. Esta situación estaría afectando el ambiente y la salud de los pobladores; por lo que piden el cambio de la ubicación del botadero municipal.</p> <p>Ubicación: Distrito de Coishco, provincia del Santa.</p> <p>Actores primarios: Municipalidad Provincial del Santa (MPS), Municipalidad Distrital de Coishco, pobladores del distrito de Coishco, Frente de Defensa del Medio Ambiente de Coishco.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Las organizaciones usuarios de agua del Caserío de Atupa y Antaurán reclaman a la empresa minera Barrick Misquichilca S.A. que devuelvan el manantial Yarcok y cuestionan la calidad del agua que se usa en la zona de influencia minera. Señalan que al realizarse las operaciones mineras, dicha fuente de recurso hídrico se secó, según la empresa así estuvo establecido en el EIA, el cual fuera aprobado en su momento por las autoridades ambientales.</p> <p>Ubicación: Caserío Atupa y Antaurán, distrito Jangas, provincia Huaraz.</p> <p>Actores primarios: Comité de Regantes de Atupa, Comité de Regantes de Antaurán y Empresa Minera Barrick Misquichilca S.A. (MBM)</p> <p>Actores secundarios: Autoridad Local del Agua (ALA Huaraz), Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Ministerio de Agricultura (MINAG), Ministerio del Ambiente (MINAM), Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)</p> <p>Actores terciarios: Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (ONDS).</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental</p> <p>Caso: Representantes de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) de Mareniyoc señalan que desde años atrás tienen problemas por el uso y disponibilidad del agua con la empresa Barrick Misquichilca S.A. cuando se secó el manantial de Shulcan, la empresa se comprometió a dotarles de recurso hídrico pero progresivamente ello se ha ido restringiendo, además que desde el año 2007 cuentan con resoluciones administrativas del Distrito de Riego, en la que les autorizan el uso de agua por una determinada cantidad de metros cúbicos.</p>	

			<p>Manifiestan que a la fecha no tienen captación de agua y sólo vienen usando las aguas de las lluvias, con el perjuicio que ello representa para la comunidad.</p> <p>Ubicación: Comunidad Campesina Mareniyoc, distrito Jangas, provincia Huaraz.</p> <p>Actores primarios: Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) Mareniyoc y Empresa Minera Barrick Misquichilca S.A. (MBM).</p> <p>Actores secundarios: Autoridad Local del Agua (ALA) Huaraz, Ministerio de Energía y Minas (MINEM)</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: La Comunidad Campesina de Cajacay exige a Compañía Minera Antamina S.A. (CMA) asuma responsabilidades por el derrame de mineral (cobre y otros) ocurrido con fecha 25 de julio de 2012 en el Caserío de Santa Rosa del distrito de Cajacay, producto de la rotura del codo de una de las válvulas del mineroducto (VS1).</p> <p>Ubicación: Comunidad Campesina de Santa Rosa, caserío Cajacay, distrito Cajacay, provincia Bolognesi</p> <p>Actores primarios: Agente Municipal del Caserío de Santa Rosa, Comunidad Campesina de Cajacay, Alcalde Distrital de Cajacay, Compañía Minera Antamina S.A. (CMA).</p> <p>Actores secundarios: Gobierno Regional de Áncash, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Ministerio Público, Ministerio de Salud (MINSA).</p> <p>Actores terciarios: Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), Defensoría del Pueblo.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental</p> <p>Caso: Pobladores de la Comunidad Campesina de Tumpa se oponen a las actividades que desarrolla la empresa minera California ante el vencimiento e incumplimiento del contrato de servidumbre por el alquiler de 25 ha de terreno comunal, así como consideran que las actividades de extracción no cumplen con los estándares ambientales y solicitan la intervención de las autoridades administrativas y judiciales.</p> <p>Ubicación: Comunidad Campesina de Tumpa, distrito de Mancos, provincia de</p>	

			<p>Yungay.</p> <p>Actores primarios: Pobladores de la comunidad Campesina de Tumpa y empresa minera California.</p> <p>Actores secundarios: Dirección Regional de Energía y Minas, Ministerio de Energía y Minas.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental</p> <p>Caso: Pobladores de la localidad de Pampacancha informan que en la quebrada de Sipchop, distrito y provincia de Recuay, ocurrió un derrame de mineral en la cancha de relave de la Planta Procesadora de Minerales Huancapeti 2009 de la Empresa Minera Huancapeti S.A.C. Este hecho estaría afectando la salud y el ambiente en la zona.</p> <p>Ubicación: Pampacancha, distrito y provincia de Recuay.</p> <p>Actores primarios: Pobladores de Pampacancha, Empresa Minera Huancapeti S.A.C.</p> <p>Actores secundarios: Dirección Regional de Energía y Minas (DREM), Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA),</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental</p> <p>Caso: Pobladores de la zona demandan que la empresa minera Greenex suspenda los trabajos de obras civiles de la Planta Flotadora de Minerales pues podría generar contaminación del agua, ubicada dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Huascarán. Exigen, además, que la Dirección Regional de Energía y Minas suspenda los talleres de participación ciudadana, que tendría como finalidad obtener la autorización respectiva para operar, hasta que se resuelvan los temas judiciales pendientes.</p> <p>Ubicación: Caserío de Buenos Aires, distrito de Ticapampa, provincia de Recuay.</p> <p>Actores primarios: Población y autoridades del Caserío de Buenos Aires, empresa minera Greenex.</p> <p>Actores secundarios: Dirección Regional de Energía y Minas (DREM), SERNANP, Ministerio Público, Poder Judicial, Municipalidad Distrital de Ticapampa.</p>	
			Tipo: Socioambiental	

		<p>Caso: La Asociación Única de Pescadores Artesanales de Coishco –ASUPAC plantea que no se otorgue autorización para desarrollar la actividad de acuicultura de repoblamiento de la concha de abanico a la Asociación de Pescadores y Armadores dedicados a la actividad pesquera Artesanal en la Caleta de Coishco – APADAPC, por temor a contaminación y afectación a la biodiversidad de la isla. Ubicación: Caleta Coishco, distrito de Coishco, provincia del Santa. Actores primarios: Asociación de Pescadores y Armadores Dedicados a la actividad pesquera Artesanal en la Caleta de Coishco – APADAPC, Asociación Única de Pescadores Artesanales de Coishco –ASUPAC Actores secundarios: Dirección Regional de Producción de la Región Áncash, SERNANP, IMARPE, DICAPI, Dirección Regional de Acuicultura, Municipalidad Distrital de Coishco.</p>	
		<p>Tipo: Socioambiental. Caso:La Comunidad Campesina de Shumay y demás Comunidades Campesinas de Carhuaz demandan que la empresa Mistr se retire de la zona ya que sus actividades no metálicas vienen contaminando a la comunidad con las emisiones de polvo producidas por el tráfico de vehículos, como camionetas y volquetes y por los fuertes vientos de la temporada. Ubicación: Comunidad campesina de Shumay, distrito Marcará, provincia de Carhuaz. Actores primarios: Comunidad Campesina de Shumay y Concesión Minera No Metálica San Gerónimo Mistr S.A. Actores secundarios: Dirección Regional de Energía y Minas de Áncash (DREM), Fiscal Provincial de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, Autoridades locales de la provincia. Actores terciarios: Defensoría del Pueblo, Gobernación Provincial.</p>	
		<p>Tipo: Socioambiental Caso: Pobladores de la comunidad campesina de Vicos demandan el cumplimiento de los términos del convenio de usufructo suscrito con la empresa minera Toma la Mano. Ubicación: Comunidad Campesina Vicos, distrito Marcará, provincia Carhuaz.</p>	

			<p>Actores primarios: Pobladores de la comunidad campesina de Vicos, Corporación Minera Toma la Mano.</p> <p>Actores secundarios: Dirección Regional de Energía y Minas, Ministerio Público.</p> <p>Tipo: Socioambiental</p> <p>Caso: Los pobladores de la Comunidad Campesina de Pocpa solicitan el cumplimiento compromisos de la empresa minera Santa Luisa referidos al aporte a las municipalidades provincial de de Bolognesi, y distrital de Pacllon, y a la Comunidad Campesina de Pocpa. Además, reclaman el cumplimiento de la Titulación del predio Molla de Pallca, de la servidumbre de la carretera Salhuyoc-Cuncush, el equipamiento y trámite de la resolución de la posta médica, petitorio para el análisis de aguas del rio Llamac y las pozas de sedimentación, el salario según el régimen minero laboral más la bonificación por alimentación, entre otras demandas.</p> <p>Ubicación: Centro poblado de Pocpa, distrito Huasta, provincia Bolognesi.</p> <p>Actores primarios: Comunidad Campesina de Pocpa – Empresa Minera Santa Luisa.</p> <p>Actores secundarios: Ministerio de Energía y Minas – Ministerio de Trabajo - Municipalidad de Bolognesi y Municipalidad Distrital de Pacllon.</p>	
Cajamarca	13 (10 activos y 3 latentes)	<p>Asuntos de Gobierno Local 1 latente (8%)</p> <p>Socioambiental 10 activos 1 latente (85%)</p> <p>Demarcacion territorial 1 latente (8%)</p>	<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso. Sector de pobladores y autoridades del distrito de la Encañada demandan a la empresa minera Yanacocha S.R.L., el cumplimiento de compromisos pendientes y firma de un acuerdo social, para el financiamiento de proyectos de inversión por parte de la Municipalidad Distrital de la Encañada.</p> <p>Ubicación: Distrito de La Encañada, provincia de Cajamarca.</p> <p>Actores primarios: Población de los caseríos y centros poblados del Distrito de La Encañada, Empresa Minera Yanacocha S.R.L., Municipalidad Distrital de La Encañada.</p> <p>Actores secundarios: Gobierno Regional de Cajamarca, Municipalidad Provincial de Hualgayoc, Ministerio del Ambiente, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).</p> <p>Actores terciarios: Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y</p>	De los 10 conflictos socioambientales activos 7 de ellos están relacionados con minería y específicamente con contaminación ambiental o supuesta contaminación. Es decir, casi el 70% de los conflictos socioambientales activos en Cajamarca tienen relación con minería y medio ambiente

			<p>Minas, Gobernación Regional de Cajamarca, Defensoría del Pueblo. Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia de Consejo de Ministros.</p> <p>Tipo: Socioambiental</p> <p>Caso: La Comunidad Campesina El Tingo demandó que la Cía. Minera Coimolache S.A. cumpla compromisos sociales asumidos y aclare la compra y venta de tierras ya que los comuneros perciben que la empresa está ocupando una mayor cantidad de tierras de las que corresponde.</p> <p>Ubicación: Comunidad Campesina El Tingo, Distrito de Hualgayoc. Provincia de Hualgayoc.</p> <p>Actores primarios: Comunidad Campesina El Tingo, Compañía Minera Coimolache S.A. – Proyecto Minero Tantahutay.</p> <p>Actores secundarios: Central Única de Rondas Campesinas de Bambamarca, Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Ministerio del Ambiente (MINAM), Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio de Educación (MINEDU), Ministerio de Salud (MINSA).</p> <p>Tipo: Socioambiental</p> <p>Caso: Autoridad local, rondas campesinas y organizaciones sociales del Distrito de Pomahuaca se oponen al desarrollo de actividades mineras por parte de la Empresa Origen Group S.A.C. (Proyecto Minero Pampa Colorada) por el temor a la contaminación ambiental que puede ocasionarse al ambiente, tierras de cultivo y recurso hídrico, como por considerarlo incompatible con las actividades tradicionales (agricultura y pastoreo).</p> <p>Ubicación: Distrito Pomahuaca, provincia de Jaén.</p> <p>Actores primarios: Rondas Campesinas de los Distritos de Pucara, Colasay y Pomahuaca, Rondas Campesina y Urbanas del Distrito de Pomahuaca, Municipalidad Distrital de Pomahuaca, Asociación de pobladores en Defensa del Desarrollo y Fiscalización de las Juntas y Pampa Colorada, Empresa Minera Origen Group S.A.C.</p> <p>Actores secundarios: Gobierno Regional de Cajamarca, Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Cajamarca, Gobernador Distrital de</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Pomahuaca, Frente de Defensa de la Vida y el Medio Ambiente de Pomahuaca, Asociación de Productores Agropecuarios del Valle de Pomahuaca, Comisario PNP del Distrito de Pomahuaca, Municipalidad Provincial de Jaén, Vicaría del Medio Ambiente de Jaén, Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú.</p> <p>Actores terciarios: Defensoría del Pueblo.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Autoridades de la provincia de Hualgayoc como del distrito de Chugur se oponen a la ampliación del Proyecto Minero Tantahuatay – Ciénaga Norte (Cía. Minera Coimolache S.A.) aduciendo observaciones al Estudio de Impacto Ambiental, tales como no considera la ZEE de la región y se encuentra en zona que constituiría cabecera de cuenca.</p> <p>Ubicación: Distrito de Chugur, provincia de Hualgayoc.</p> <p>Actores primarios: Municipalidad Distrital de Chugur, Gobierno Regional de Cajamarca, Cía. Minera Coimolache S.A. – Proyecto Minero Tantahutay, Comité Interprovincial de Rondas Campesinas, Central Única Provincial de Rondas Campesinas de Hualgayoc, Frente de Defensa Provincial de Hualgayoc.</p> <p>Actores secundarios: Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros y la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, Movimiento Tierra y Libertad.</p> <p>Actores terciarios: Defensoría del Pueblo.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Autoridades, representantes de Organizaciones de Sociedad Civil y comuneros de las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc demandan se declare la inviabilidad del proyecto de exploración minero Conga de la Empresa Minera Yanacocha S.R.L., por los impactos ambientales negativos susceptibles de generarse en el ambiente, ante la presunta afectación a 4 lagunas consideradas cabecera de 05 cuencas hidrográficas.</p> <p>Ubicación: Distritos de Huasmín y Sorochocho, provincia de Celendín. Distrito de la Encañada, provincia de Cajamarca.</p> <p>Actores primarios: Gobierno Regional de Cajamarca, Frente de Defensa</p>	

		<p>Ambiental de Cajamarca, Frente de Defensa de los Intereses de Cajamarca, Asociación civil Plataforma Interinstitucional Celendina – PIC, Empresa Minera Yanacocha S.R.L. – Proyecto Minero Conga, Municipalidad Distrital de Huasmín, Municipalidad Distrital de Sorochuco, Municipalidad Provincial de Celendín, Municipalidad Distrital de Bambamarca, Municipalidad Provincial de Cajamarca, Municipalidad Distrital de la Encañada, Municipalidad Distrital de La Encañada, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, Presidencia de Consejo de Ministros, Central Única de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-Perú)</p> <p>Actores secundarios: Gobernador de la Región Cajamarca, Autoridad Nacional del Agua, Presidente de la Cámara de Comercio de Cajamarca, Decano del Colegio de Abogados de Cajamarca, Universidad Nacional de Cajamarca, Ministerio del Interior, Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Vivienda y Saneamiento, Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible – GRUFIDES, Central Única de Rondas</p>	
		<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Las autoridades y un sector de la población de Chuquibamba y Condebamba se oponen tanto a las actividades mineras formales que se pretenden desarrollar en la Provincia (Empresa Minera Sullidén Shahuindo S.A.C.) como a las actividades mineras informales que se desarrollan en el cerro Algamarca y la zona de la Chilca debido al impacto ambiental negativo que estas ocasionan al valle de Condebamba.</p> <p>Ubicación: Distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba.</p> <p>Actores primarios: Pobladores del Centro Poblado Chuquibamba, Asociación de Mineros Informales, Frente de Defensa del Medio Ambiente del Valle de Condebamba, y Empresa Minera Sullidén Shahuindo S.A.C.</p> <p>Actores secundarios: Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Cajamarca, la Comisaría PNP de Cajabamba, Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno Regional de Cajamarca, Central Única de la Federación Nacional de Rondas Campesinas, Frente de</p>	

			<p>Defensa de los Intereses de Cajamarca, Frente de Defensa de San Marcos. Actores terciarios: Defensoría del Pueblo.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental. Caso: El Pueblo de Hualgayoc demanda el cumplimiento de compromisos que la Empresa Minera Gold Fields – La Cima S.A.A. (Proyecto Minero Cerro Corona) asumió respecto al abastecimiento de agua, energía eléctrica, rajaduras en viviendas producto de las actividades mineras desarrolladas en la zona. Ubicación: Distrito de Hualgayoc, provincia de Hualgayoc. Actores primarios: Municipalidad Distrital de Hualgayoc, Empresa Minera Gold Fields–La Cima S.A.A. - Proyecto Cerro Corona, Rondas Campesinas, Mesa de Diálogo de Hualgayoc, Frente Único de los Interés del Pueblo de Hualgayoc, Frente de Defensa de los Intereses de Hualgayoc. Actores Secundarios: Gobernación y Asociación de Trabajadores del Pueblo de Hualgayoc, Gobierno Regional de Cajamarca, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, OSINERGMIN, Instituto Geológico Minero Metalúrgico - INGEMMET, Autoridad Nacional del Agua - ANA. Actores terciarios: Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia de Consejo de Ministros, Defensoría del Pueblo.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental. Caso: Sectores de la población de Pulan se oponen al desarrollo del proyecto minero La Zanja (Cía. Minera La Zanja S.R.L.) por temor a la contaminación ambiental que puede generar el mismo, al encontrarse en una zona considerada cabecera de cuenca. Ubicación: Distrito de Pulán, provincia de Santa Cruz. Actores primarios: Pobladores de Pulán, Cía. Minera La Zanja S.R.L., Federación Provincial de Rondas Campesinas y urbanas de la provincia de Santa Cruz, Frente de Defensa de Santa Cruz, Asociación de Rondas Campesinas de la Provincia de Santa Cruz, Rondas Campesinas de Pulán. Actores secundarios: Municipalidad Provincial de Santa Cruz, Municipalidad Distrital de Pulan, Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chancay Lambayeque,</p>	

			<p>Junta de Usuarios del valle de Zaña, Frente de Defensa del valle Chancay-Lambayeque, Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Cajamarca, Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas, Comisión Ambiental Regional, Asociación Provincial de Desarrollo de Santa Cruz, Comando Unitario de Lucha de Lambayeque- CULL. Actores terciarios: Defensoría del Pueblo.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Autoridades y pobladores del distrito de Los Baños del Inca exigen que la Empresa Minera Yanacocha S.R.L. respete lo dispuesto por la Ordenanza No. 051-2006-MDBI a través de la cual se creó el área de conservación municipal en torno a la microcuenca del río Quinuario así como en parte de las microcuencas de los ríos Grande y Mashcon, consecuentemente paralice las actividades de exploración que viene desarrollando en la zona.</p> <p>Ubicación: Distrito de Los Baños del Inca, provincia Cajamarca.</p> <p>Actores primarios: Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca, Comité de Gestión del Recurso Hídrico, Comisión Especial de Defensa de la Ordenanza No. 051-2006-MDBI, Empresa Minera Yanacocha S.R.L.</p> <p>Actores secundarios: 34° Juzgado Civil de la Corte Superior de Lima, Fiscalía Especializada en materia Ambiental de Cajamarca y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental con sede en Cajamarca.</p> <p>Actores terciario: Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia de Consejo de Ministros.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: La comunidad nativa de Supayacu y sectores de la comunidad nativa de Naranjos rechazan la presencia y desarrollo de actividades mineras en territorio comunal por parte de la empresa Exploraciones Mineras Águila Dorada S.A.C., por temor a posible afectación ambiental.</p> <p>Ubicación: Distrito de San José de Lourdes, provincia de San Ignacio.</p> <p>Actores primarios: Comunidad Nativa de Supayacu, Comunidad Nativa de Naranjos, Comunidades Nativas de San José de Lourdes, Organización Regional Aguaruna de San Ignacio (ORASI), Organización Fronteriza Awajún de</p>	

			<p>Cajamarca (ORFAC), Municipalidad Distrital de San José de Lourdes, Rondas Campesinas de San José de Lourdes, Municipalidad Provincial de San Ignacio, Dirección Regional de Energía y Minas de Cajamarca, Exploraciones Mineras Águila Dorada S.A.C.</p> <p>Actores secundarios: Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú, Gobierno Regional de Cajamarca, Ministerio de Energía y Minas.</p> <p>Actores terciarios: Vicaría de San José de Lourdes, Defensoría</p>	
La Libertad	5 (5 activos y 0 latentes)	Socioambiental 4 activos (80%) Otros asuntos 1 activo (20%)	<p>Tipo: Socioambiental</p> <p>Caso: Mineros ilegales e informales demandan diálogo con el Consorcio Minero Horizonte S.A. e intervención de autoridades competentes. Todo esto para viabilizar la formalización de las actividades mineras que desarrollaban en áreas concesionadas a favor de dicha empresa.</p> <p>Ubicación: Sector Fernandini, Anexo Retamas, distrito de Parcoy, provincia Pataz.</p> <p>Actores primarios: Asociación de Mineros Artesanales Parcoy, Compañía Minera La Bonita de Parcoy S.A., Consorcio Minero Horizonte SA</p> <p>Actores secundarios: Gerencia Regional de Energía y Minas e Hidrocarburos del Gobierno Regional de La Libertad, Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas.</p> <p>Actores terciarios: Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia de Consejo de Ministros.</p>	De los 4 conflictos socioambientales activos 1 de ellos están relacionados con minería y específicamente con contaminación ambiental o supuesta contaminación. Es decir, el 25% de los conflictos socioambientales activos en La Libertad tienen relación con minería y medio ambiente.
			<p>Tipo: Socioambiental</p> <p>Caso: La Asociación de Mineros Artesanales del distrito de Pataz demanda la intermediación de las autoridades competentes para viabilizar el proceso de formalización de la actividad minera artesanal en las concesiones cuya titularidad corresponde a la Cía. Minera Poderosa S.A.</p> <p>Ubicación: Distrito de Pataz, provincia Pataz.</p> <p>Actores primarios: Asociación de Mineros Artesanales del distrito de Pataz, Cía. Minera Poderosa S.A.</p> <p>Actores secundarios: Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, Gerencia Regional de Energía y Minas e Hidrocarburos del Gobierno</p>	

			<p>Regional de La Libertad.</p> <p>Actores terciarios: Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia de Consejo de Ministros, Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, Defensoría del Pueblo.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental</p> <p>Caso: Pobladores y ronderos del Centro Poblado Chota se oponen a las actividades mineras que pretende desarrollar la Sociedad Minera Trinity Perú S.A.C. (Proyecto Minero Caupar) en la zona del Cerro Caupar por temor a la afectación a la salud, actividades tradicionales y contaminación susceptible de generarse en una zona considerada cabecera de cuenca del río Chonta.</p> <p>Ubicación: Centro poblado de Chota, distrito de Agallpampa, provincia de Otuzco.</p> <p>Actores primarios: Centro Poblado Chota, Sociedad Minera Trinity Perú S.A.C., Comité de Agricultores y Medio Ambiente de Chota.</p> <p>Actores secundarios: Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de La Libertad, Gobierno Regional de La Libertad, Municipalidad Provincial de Otuzco, Municipalidad Distrital de Agallpampa, Municipalidad de Centro Poblado Menor de Chota, Central Única de Rondas Campesinas de La Libertad, Ronda campesina de Chota, Federación de Rondas Campesinas de La Libertad, Federación de Rondas de Agallpampa.</p> <p>Actores terciarios: Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental</p> <p>Caso: Los mineros artesanales de La Libertad exigen a la Presidencia del Consejo de Ministros, que cumpla con los acuerdos asumidos el 20 y 22 de agosto de 2013 en el marco de proceso de diálogo entre Estado y representantes de los mineros informales.</p> <p>Ubicación: La Libertad.</p> <p>Actores primarios: Federación Regional de Mineros Artesanales de La Libertad (FREMARLIB), Presidencia del Consejo de Ministros.</p>	

			Actores secundarios: Policía Nacional del Perú, Fiscalía provincial de Otuzco. Actores terciarios: Defensoría del Pueblo.	
Arequipa	8 (5 activos y 3 latentes)	Socioambiental 2 activos 3 latentes (63%) Demarcación territorial 1 activo (13%) Laboral 1 activo (13%) Asuntos de Gobierno Nacional 1 activo (13%)	<p>Tipo: Socioambiental. Caso: Mineros informales protestan contra decretos legislativos que regulan la actividad minera artesanal e informal, y piden que se den facilidades para que sigan operando mientras dure el proceso de formalización. Ubicación: Distrito Chala, provincia de Caravelí. Actores primarios: Federación Única de Mineros Artesanales de Arequipa (Fumara), Base Regional del CONAMI, Presidencia del Consejo de Ministros PCM, Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Ministerio del Ambiente (MINAM). Actores secundarios: Dirección Regional de Energía y Minas (DREM), Autoridad Regional Ambiental (ARMA), Gobierno Regional de Arequipa, Oficina de Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental, Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Actores terciarios: Defensoría del Pueblo.</p> <p>Tipo: Socioambiental. Caso: Agricultores, pobladores y autoridades locales de la provincia de Islay se oponen al proyecto minero Tía María de la empresa minera Southern Perú Copper Corporation (SPCC) por posibles daños ambientales. Cabe precisar que este caso fue reportado en agosto de 2009 hasta abril de 2011 en que se llega a una solución con la emisión de la Resolución Directoral N° 105-2011 –MEM-AAM del Ministerio de Energía y Minas que declara inadmisible el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Tía María presentado por la empresa minera SPCC. Ubicación: Distritos de Deán Valdivia, Cocachacra y Punta de Bombón, provincia de Islay. Actores primarios: Agricultores y pobladores de los distritos de Cocachacra y Deán Valdivia, Municipalidad distrital de Deán Valdivia, Empresa Minera Southern Perú Copper Corporation (SPCC).</p>	De los 2 conflictos socioambientales activos 1 de ellos están relacionados con minería y específicamente con contaminación ambiental o supuesta contaminación. Es decir, el 50% de los conflictos socioambientales activos en Arequipa tienen relación con minería y medio ambiente.

			<p>Actores secundarios: Pobladores de otros distritos de la provincia de Islay, Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Autoridad Regional del Medio Ambiente.</p> <p>Actores terciarios: Gobierno Regional de Arequipa, Defensoría del Pueblo.</p>	
Tacna	5 (5 activos y 0 latentes)	Socioambiental 4 activos (80%) Demarcación territorial 1 activo (20%)	<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Agricultores de las Juntas de Usuarios de los Distritos de Riego de Tacna, se oponen al proyecto “Ampliación de la Concentradora Toquepala y Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda”, a cargo de Southern Perú Copper Corporation porque, entre otras demandas, restaría agua a la actividad agrícola.</p> <p>Ubicación: Distritos de Ilabaya y Locumba, provincia Jorge Basadre.</p> <p>Actores primarios: Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Candarave, Tarata, Locumba, Sama, La Yarada y Tacna, Frente de Defensa de Tacna, de Candarave y del Distrito de Ilabaya, empresa Minera Southern Perú Copper Corporation (SPCC), Gobierno Regional de Tacna, Municipalidades provinciales de Tacna, Candarave, Tarata y Jorge Basadre, Municipalidades distritales de la región Tacna,</p> <p>Actores secundarios: Ministerio de Energía y Minas (MEM), Ministerio del Ambiente (MINAM), Dirección Regional de Energía y Minas, Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Autoridad Nacional del Agua (ANA).</p> <p>Actores terciarios: Defensoría del Pueblo.</p>	De los 4 conflictos socioambientales activos 3 de ellos están relacionados con minería y específicamente con contaminación ambiental o supuesta contaminación. Es decir, casi el 75% de los conflictos socioambientales en Tacna tienen relación con minería y medio ambiente.

			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: El Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente de Tacna y otras organizaciones de Tacna se oponen a la explotación minera de Minsur por posible contaminación del recurso hídrico.</p> <p>Ubicación: provincia de Tacna.</p> <p>Actores primarios: Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente de Tacna, empresa minera MINSUR, Entidad prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS), Gobierno Regional de Tacna, Municipalidad Distrital Alto de la Alianza.</p> <p>Actores secundarios: Ministerio de Energía y Minas (MINAM), Ministerio del Ambiente (MINAM), Ministerio de Cultura, Coordinadora Ambiental de Arica y Parinacota, Proyecto Especial Tacna (PET), Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (UNJBG).</p> <p>Actores terciarios: Defensoría del Pueblo, alcalde Provincial de Tacna, Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: La Asociación de damnificados de la comunidad de Ancomarca expresan su rechazo al sellado de pozos informales y a las acciones legales interpuestas por el Proyecto Especial de Tacna por posesión precaria de terrenos destinados a la ejecución del proyecto acuífero Vilavilani II.</p> <p>Ubicación: Sector La Yarada , distrito de Tacna, provincia de Tacna</p> <p>Actores primarios: Asociación de damnificados de la comunidad de Ancomarca, Proyecto Especial de Tacna (PET)</p> <p>Actores secundarios: Autoridad Nacional del Agua (ANA), Junta de Usuarios La Yarada, Municipalidad Distrital de Pocollay, Policía Nacional de Perú (PNP), Segundo Juzgado de Descarga Procesal del Módulo Básico de Justicia de Gregorio Albarracín, Municipalidad Provincial de Tacna, Gobierno Regional de Tacna.</p> <p>Actores Terciarios: Defensoría del Pueblo.</p>	
			<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Autoridades y población de los distritos de Tarata y Ticaco se oponen al</p>	

			<p>otorgamiento del petitorio minero Revelación 7 presentado por la Compañía Minera San Jorge S.A. porque se encuentra en área de expansión urbana y afectaría la actividad agrícola y las zonas arqueológicas existentes en la zona.</p> <p>Ubicación: Distrito de Tarata y Ticaco, provincia de Tarata.</p> <p>Actores primarios: autoridades, población del distrito de Tarata y Ticaco, Compañía Minera San Jorge S.A.</p> <p>Actores secundarios: Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET).</p>	
Moquegua	3 (2 activos y 1 latente)	<p>Socioambiental 1 activo 1 latente (67%)</p> <p>Asuntos de Gobierno Nacional 1 latente (33%)</p>	<p>Tipo: Socioambiental.</p> <p>Caso: Autoridades regionales, locales, agricultores, representantes del Frente de Defensa del Distrito de Torata y organizaciones sociales de Moquegua reclaman a la empresa Southern Perú Copper Corporation (SPCC) compensación por los impactos ambientales, en explotación desde hace varios años, entre ellos, la explotación del yacimiento Cuajone.</p> <p>Ubicación: Distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto y provincia de Ilo.</p> <p>Actores primarios: Gobierno Regional, municipalidades provinciales de Ilo y Mariscal Nieto, Municipalidad Distrital de Torata, Agricultores de Torata, Frente de Defensa de Torata, empresa Southern Perú Copper Corporation (SPCC) Frente de defensa de Moquegua, Junta de Usuarios del Distrito de Riego.</p>	<p>Del conflicto socioambiental activo 1 de ellos están relacionados con minería y específicamente con contaminación ambiental o supuesta contaminación. Es decir, casi el 100% de los conflictos socioambientales en Moquegua tienen relación con minería y medio ambiente.</p>

Fuente: Elaboración propia con los datos del Reporte N° 117 de Noviembre 2013 de la Defensoría del Pueblo